CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

Diario de los Debates

ÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

Director General de Crónica y Gaceta Parlamentaria Gilberto Becerril Olivares	Presidente Diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué	Directora del Diario de los Debates Eugenia García Gómez
Año III	Ciudad de México, lunes 14 de septiembre de 2026	Sesión 7 Apéndice IV

S U M A R I O

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

De la diputada Tania Palacios Kuri y las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. **3**

LEY GENERAL DE TURISMO Y LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS

De la diputada Tania Palacios Kuri y las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. **37**

LEY GENERAL DE TURISMO, LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

De la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. **79**

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Del diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. **110**

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

Del diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal. **129**

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS

Del diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. **182**

LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

De la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 89 y 99 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. **207**

Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia 280
para dictamen.
Septiembre 14 de 2026.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

DIP. TANIA PALACIOS KURI
DIPUTADA FEDERAL
Querétaro

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SEGURIDAD DIGITAL Y PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA PALACIOS KURI Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Quien suscribe, la Diputada Tania Palacios Kuri y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SEGURIDAD DIGITAL Y PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las niñas, niños y adolescentes a nivel global atraviesan una transformación tecnológica sin precedentes. La Inteligencia Artificial ha dejado de ser una herramienta exclusiva de los centros de investigación para convertirse en una tecnología presente en la vida cotidiana de millones de personas.

Hoy se utiliza para aprender, comunicarse, trabajar, crear contenido, tomar decisiones e incluso interactuar con otras personas mediante sistemas automatizados. Sin embargo, el extraordinario potencial de esta tecnología también ha traído consigo riesgos inéditos que afectan, de manera especial, a quienes se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad: las niñas, niños y adolescentes.

La infancia mexicana pertenece a la primera generación que crecerá plenamente acompañada por sistemas de Inteligencia Artificial. Para millones de niñas, niños y adolescentes, el mundo digital ya no constituye un espacio distinto de la realidad, sino una extensión de su vida diaria.

En internet estudian, juegan, establecen relaciones personales, consumen información y desarrollan parte importante de su identidad, y muchas ocasiones los abusos y la violencia digital desencadena consecuencias terribles que incluso el INEGI ha detallado que a causa de estos factores entre 3 y 4 niñas, niños y adolescentes se suicidan cada día en México, por esta realidad se exige que el Estado mexicano actualice su marco jurídico para garantizar que el desarrollo tecnológico ocurra siempre bajo el principio constitucional del interés superior de la niñez.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, obligan al Estado a adoptar todas las medidas legislativas necesarias para proteger integralmente a las personas menores de dieciocho años frente a cualquier forma de violencia, abuso, explotación o afectación a sus derechos fundamentales. Dicho mandato constitucional no distingue entre riesgos físicos y digitales; por el contrario, exige que la protección evolucione conforme evolucionan las amenazas.

Como Legisladora he encausado mis actividades a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y es urgente actuar ya que actualmente, la Inteligencia Artificial ha facilitado la creación de imágenes, audios y videos sintéticos con un nivel de realismo nunca antes visto.

Estas herramientas, conocidas comúnmente como deepfakes, permiten suplantar la identidad de cualquier persona utilizando únicamente fotografías o grabaciones disponibles en internet. Lo que hace apenas unos años requería conocimientos altamente especializados, hoy puede realizarse en cuestión de minutos mediante aplicaciones disponibles para cualquier usuario.

Este fenómeno representa un riesgo particularmente grave para niñas, niños y adolescentes. La generación de imágenes falsas de carácter sexual, la clonación de voces para engañar a familiares, la creación de videos destinados al acoso escolar, la manipulación de contenido para extorsionar o humillar, así como la difusión masiva de material sintético sin posibilidad de distinguir si fue generado por Inteligencia Artificial, constituyen nuevas formas de violencia digital que el marco jurídico mexicano aún no regula de manera suficiente.

La preocupación no es únicamente teórica. La evidencia internacional demuestra que estos riesgos ya afectan a millones de personas menores de edad.

De acuerdo con el estudio Disrupting Harm México, elaborado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en México sufrió explotación o abuso sexual facilitados por tecnologías digitales durante un solo año, lo que equivale aproximadamente a 1.6 millones de adolescentes. Asimismo, el estudio revela que en 67 % de los casos los hechos ocurrieron exclusivamente en línea, mientras que casi dos de cada tres víctimas conocían previamente a su agresor, demostrando que los riesgos digitales y los riesgos presenciales se encuentran profundamente vinculados.

Del mismo modo, UNICEF ha señalado que el acceso de niñas, niños y adolescentes al entorno digital es prácticamente universal. En México, casi ocho de cada diez niñas y niños de entre 6 y 11 años utilizan internet, mientras que más del 95 % de las y los adolescentes son usuarios habituales de servicios digitales, dedicando varias horas al día a plataformas en línea. Esto significa que la protección de la infancia ya no puede limitarse al hogar, la escuela o los espacios públicos tradicionales; debe extenderse necesariamente al entorno digital.

La violencia digital también presenta una tendencia creciente. Información difundida por UNICEF con base en estadísticas nacionales refiere que 2.9 millones de adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años fueron víctimas de ciberacoso durante los últimos doce meses, cifra equivalente al 23 % de quienes utilizan internet en ese grupo de edad. Estas conductas incluyen amenazas, hostigamiento, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, suplantación de identidad y otras formas de violencia que afectan profundamente el desarrollo emocional y psicológico de las personas menores de edad.

A ello se suma un fenómeno aún más preocupante: el uso de la Inteligencia Artificial para producir material sintético de carácter sexual. UNICEF ha advertido que los deepfakes representan una nueva modalidad de violencia sexual digital, ya que permiten fabricar imágenes o videos falsos con apariencia completamente auténtica. Aunque el contenido sea artificial, el daño a la víctima es absolutamente real: genera ansiedad, humillación, estigmatización, extorsión, aislamiento social y afectaciones permanentes a su dignidad y desarrollo integral.

Frente a esta realidad, diversos países han comenzado a construir marcos regulatorios específicos para la Inteligencia Artificial, privilegiando la transparencia, la protección de grupos vulnerables, la supervisión humana y la responsabilidad de quienes desarrollan o administran plataformas digitales. Organismos internacionales como UNESCO, UNICEF y la OCDE han coincidido en que el desarrollo de la Inteligencia Artificial debe regirse por principios éticos que coloquen a la persona y a sus derechos fundamentales en el centro de toda innovación tecnológica.

México no puede permanecer ajeno a esta transformación. La Inteligencia Artificial representa una extraordinaria oportunidad para impulsar el desarrollo científico, económico y educativo del país; sin embargo, su crecimiento debe ir acompañado de reglas claras que garanticen un uso responsable, particularmente cuando se encuentran involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, la presente iniciativa propone fortalecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante obligaciones específicas para los concesionarios de telecomunicaciones, proveedores de internet, plataformas digitales, desarrolladores de aplicaciones y fabricantes de dispositivos tecnológicos. Entre dichas obligaciones destacan la implementación de mecanismos efectivos de verificación de edad, controles parentales accesibles, herramientas para identificar contenido generado mediante Inteligencia Artificial, sistemas para detectar y retirar contenidos que constituyan violencia digital o suplantación de identidad, así como la obligación de privilegiar el interés superior de la niñez en los algoritmos de recomendación utilizados por plataformas digitales.

Asimismo, la iniciativa fomenta el desarrollo de capacidades nacionales en materia de Inteligencia Artificial, promueve la alfabetización digital de niñas, niños, adolescentes, madres, padres de familia y docentes, e impulsa una cultura de innovación tecnológica sustentada en principios de legalidad, transparencia, supervisión humana, seguridad, protección de datos personales y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Legislar sobre Inteligencia Artificial no significa frenar la innovación. Por el contrario, significa dotar a México de un marco jurídico moderno que permita aprovechar los beneficios de esta tecnología sin sacrificar la protección de la infancia. Cada avance tecnológico debe traducirse en mayores oportunidades para nuestras niñas y nuestros niños, nunca en mayores riesgos.

Las generaciones futuras recordarán este momento como el inicio de una nueva era tecnológica. La responsabilidad del Poder Legislativo consiste en asegurar que esa nueva era sea también una etapa de mayor protección, mayor seguridad y mayor dignidad para quienes representan el presente y el futuro de nuestro país.

La Inteligencia Artificial debe desarrollarse al servicio de las personas y no a costa de sus derechos.

FORTALECIMIENTO DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El contenido de esta iniciativa se inserta en el parámetro de regularidad constitucional previsto por el artículo 1o. de la Constitución, integrado también por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a adoptar medidas legislativas, administrativas, educativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin discriminación y atendiendo de manera primordial a su interés superior. Estas obligaciones no se limitan a espacios físicos: alcanzan a los entornos digitales y a las tecnologías que intervienen en el ejercicio de la privacidad, la identidad, la educación, la información, la participación, la salud, la integridad y el desarrollo integral.

La Observación general núm. 25 (2021) del Comité de los Derechos del Niño, relativa a los derechos de la niñez en relación con el entorno digital, constituye el estándar interpretativo internacional más directo para esta reforma. El Comité reconoce que el entorno

digital se encuentra en constante evolución y exige que los Estados revisen, adopten y actualicen su legislación para prevenir vulneraciones, asegurar mecanismos de supervisión y garantizar recursos efectivos. Asimismo, señala que las empresas deben respetar los derechos de la niñez, realizar evaluaciones de impacto, prevenir y mitigar riesgos, incorporar niveles elevados de privacidad y seguridad y ofrecer mecanismos accesibles de denuncia y reparación.

El mismo estándar obliga a aplicar de manera transversal los principios de no discriminación; interés superior de la niñez; derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; y respeto a las opiniones de niñas, niños y adolescentes. Por ello, la protección digital debe considerar la edad, las capacidades evolutivas y las circunstancias diferenciadas de cada persona menor de edad, con atención reforzada a quienes enfrentan discriminación por género, discapacidad, origen étnico, condición socioeconómica, situación de movilidad u otros factores. La participación de niñas, niños y adolescentes en el diseño y evaluación de políticas y servicios digitales no es accesoria, sino parte del cumplimiento de sus derechos.

Las Orientaciones de UNICEF sobre inteligencia artificial y niñez, versión 3.0, publicadas en 2025, actualizan estos deberes frente a la inteligencia artificial generativa. UNICEF formula diez exigencias para una inteligencia artificial centrada en la niñez: marcos regulatorios y supervisión; seguridad; protección de datos y privacidad; no discriminación y equidad; transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas; prácticas responsables respetuosas de los derechos humanos; protección del interés superior, el desarrollo y el bienestar;

inclusión; preparación y formación de niñas, niños y adolescentes; y creación de un entorno institucional que haga posibles estas garantías. La actualización incorpora expresamente los riesgos de material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial, imágenes íntimas no consentidas, sistemas de recomendación y otras aplicaciones capaces de intensificar daños.

La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, adoptada en 2021, refuerza la pertinencia de establecer obligaciones a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas. El instrumento exige que el desarrollo, comercialización, implementación y uso de inteligencia artificial se orienten por la dignidad humana, la proporcionalidad y la prevención del daño, la seguridad, la equidad y no discriminación, la privacidad y gobernanza de datos, la supervisión humana, la transparencia y explicabilidad, la responsabilidad y rendición de cuentas y la alfabetización digital. También demanda evaluaciones de impacto ético y de derechos humanos, con atención especial a niñas, niños y adolescentes y a otros grupos expuestos a riesgos desproporcionados.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 78/265, de 21 de marzo de 2024, llamó a promover sistemas de inteligencia artificial seguros, protegidos y fiables, consistentes con el derecho internacional y los derechos humanos durante todo su ciclo de vida. En la misma dirección, el Pacto Digital Mundial, adoptado en 2024 como anexo del Pacto para el Futuro, compromete a los Estados a construir un espacio digital inclusivo, abierto, seguro y protegido, respetar y promover los derechos humanos en línea, reducir las brechas digitales y desarrollar una gobernanza

responsable de la inteligencia artificial. Ambos instrumentos confirman que la protección de la niñez debe integrarse desde el diseño y no únicamente después de que se produzca el daño.

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos A/HRC/62/33, de 2026, sobre debida diligencia en derechos humanos para la inteligencia artificial, profundiza el deber estatal de regular, supervisar y exigir rendición de cuentas cuando actores públicos o privados diseñan, adquieren o utilizan sistemas capaces de afectar derechos. La debida diligencia implica identificar y evaluar impactos reales y potenciales, prevenirlos y mitigarlos, dar seguimiento a las medidas adoptadas, comunicar sus resultados y asegurar vías de reparación. Este enfoque sustenta que las obligaciones previstas para plataformas, proveedores, desarrolladores y fabricantes sean preventivas, verificables y proporcionales al riesgo.

En el sistema interamericano, el informe Inclusión digital y gobernanza de contenidos en internet, aprobado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2024, advierte que los algoritmos, la moderación de contenidos y las decisiones automatizadas pueden ampliar desigualdades y afectar la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información. El informe recomienda marcos transparentes, previsibles y compatibles con los derechos humanos. A su vez, la Declaración conjunta sobre el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de niñas y niños en la era digital, adoptada en mayo de 2026 por relatorías internacionales y regionales, incluida la Relatoría Especial de la CIDH, establece que el interés superior debe ser primordial en el diseño,

desarrollo, despliegue y gobernanza de plataformas y servicios, y que las empresas deben aplicar seguridad y privacidad desde el diseño.

Estos estándares también ofrecen criterios para la aplicación de las medidas legislativas propuestas. La verificación de edad, los controles parentales, los filtros, la detección y el retiro de contenidos y la identificación de material sintético deben aplicarse con base legal, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad, minimización de datos, supervisión humana, transparencia y mecanismos de revisión. La protección no debe traducirse en vigilancia generalizada, recopilación excesiva de información, discriminación algorítmica, exclusiones indiscriminadas ni restricciones desproporcionadas al acceso de niñas, niños y adolescentes a información, educación, participación y expresión. Con estas salvaguardas, los artículos 101 Bis 4 y 101 Bis 5 se alinean con una protección integral que combina seguridad, privacidad, autonomía progresiva, inclusión y acceso efectivo a remedios.

PROBLEMÁTICA

El marco jurídico mexicano fue diseñado en una etapa en la que la Inteligencia Artificial aún no formaba parte de la vida cotidiana de la población. Como consecuencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes carece de disposiciones específicas que regulen las obligaciones de los proveedores de servicios digitales, plataformas tecnológicas, desarrolladores de aplicaciones y fabricantes de dispositivos frente al uso de sistemas de Inteligencia Artificial que puedan afectar los derechos de las personas menores de edad.

Actualmente, el desarrollo acelerado de tecnologías capaces de generar contenido sintético, automatizar decisiones mediante algoritmos y personalizar información en tiempo real ha transformado profundamente la manera en que niñas, niños y adolescentes interactúan con el entorno digital. Sin embargo, el ordenamiento jurídico nacional no establece deberes claros para prevenir que dichas tecnologías sean utilizadas para facilitar conductas que vulneren derechos fundamentales, como la violencia digital, la manipulación de contenidos, la suplantación de identidad o la explotación de personas menores de edad.

Aun cuando la legislación mexicana reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar, seguridad y desarrollo integral, no existen obligaciones expresas para que quienes diseñan, administran o comercializan servicios digitales implementen mecanismos de verificación de edad, etiqueten contenidos generados mediante Inteligencia Artificial, incorporen herramientas eficaces de protección parental o adopten medidas preventivas frente a los riesgos derivados del uso de tecnologías generativas.

De igual forma, la normativa vigente tampoco contempla principios que orienten el desarrollo responsable de la Inteligencia Artificial cuando ésta interactúa con personas menores de edad. La ausencia de criterios legales sobre transparencia, supervisión humana, seguridad, responsabilidad tecnológica y protección reforzada de la niñez genera incertidumbre jurídica tanto para las autoridades como para los sujetos obligados, dificultando la prevención y atención oportuna de conductas que lesionan derechos fundamentales.

Esta situación adquiere especial relevancia si se considera que los sistemas de Inteligencia Artificial evolucionan a una velocidad superior a la capacidad de actualización de las normas jurídicas. Mientras la tecnología incorpora nuevas funciones de generación de imágenes, voz, video y recomendaciones automatizadas, la legislación continúa regulando únicamente aspectos generales del uso de internet, sin atender los desafíos específicos que plantea la Inteligencia Artificial.

En el ámbito internacional se observa una tendencia creciente hacia la construcción de marcos regulatorios que buscan garantizar un desarrollo ético, transparente y responsable de la Inteligencia Artificial, particularmente cuando su utilización puede incidir en los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. México no puede permanecer ajeno a esta evolución normativa, pues la ausencia de reglas claras puede traducirse en mayores riesgos para la infancia y adolescencia, así como en rezagos frente a los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

Por ello, resulta necesario fortalecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante la incorporación de obligaciones específicas para los prestadores de servicios digitales y demás sujetos involucrados en el desarrollo y operación de tecnologías de Inteligencia Artificial. La presente iniciativa busca establecer un marco preventivo que privilegie el interés superior de la niñez, fomente el uso responsable de la Inteligencia Artificial y garantice que el avance tecnológico se desarrolle bajo parámetros de legalidad, seguridad, transparencia y respeto irrestricto a los derechos humanos.

PROPUESTA LEGISLATIVA

Para mayor comprensión me permito elaborar un cuadro comparativo que expone las adiciones de la presente iniciativa:

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Texto actual	Propuesta de modificación
Sin correlativo	**Artículo 101 Bis 4. Los concesionarios de telecomunicaciones, proveedores de servicios de acceso a internet, plataformas digitales, desarrolladores y administradores de aplicaciones, sistemas operativos, servicios digitales, redes sociales, servicios de alojamiento de contenido, así como cualquier persona física o**

	moral que ofrezca servicios digitales accesibles por niñas, niños y adolescentes, deberán adoptar las medidas técnicas, tecnológicas, organizacionales y de seguridad necesarias para garantizar el interés superior de la niñez, privilegiando en todo momento la protección de sus derechos humanos en los entornos digitales. Para tal efecto estarán obligados a: I. Implementar mecanismos eficaces de verificación de edad, controles parentales y configuraciones de privacidad activadas por defecto para usuarios menores de edad. II. Incorporar herramientas que prevengan el acceso a contenidos que promuevan violencia, explotación, trata de personas, pornografía infantil, autolesiones, conductas suicidas, delitos sexuales, delincuencia organizada o cualquier otro contenido que pueda afectar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

	III. Adoptar mecanismos tecnológicos que permitan detectar, limitar y retirar con prontitud contenidos generados mediante Inteligencia Artificial que constituyan violencia digital, fraude, manipulación, explotación, acoso, hostigamiento, extorsión, suplantación de identidad o cualquier otra conducta que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes. **IV. Identificar de manera clara, visible y accesible los contenidos, imágenes, audios, videos o cualquier otro material generado total o parcialmente mediante sistemas de Inteligencia Artificial, a efecto de evitar engaños, manipulación o confusión respecto de su autenticidad.** **V. Implementar medidas razonables para prevenir la utilización de tecnologías de Inteligencia Artificial destinadas a la creación o difusión de imágenes, voces, videos o cualquier contenido sintético que suplante la identidad de niñas, niños y adolescentes o**

	facilite la comisión de delitos en su contra. VI. Garantizar que los sistemas automatizados o de Inteligencia Artificial utilizados para recomendar contenidos privilegien el interés superior de la niñez, evitando algoritmos que incentiven conductas de riesgo, violencia, explotación o cualquier afectación a su desarrollo físico, psicológico o emocional. Las medidas previstas en este artículo deberán observar, además de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales, los principios de legalidad, transparencia, seguridad, protección reforzada de la niñez, no discriminación, supervisión humana y utilización responsable de la Inteligencia Artificial.
Sin correlativo	Artículo 101 Bis 5. Los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores de equipos, dispositivos y sistemas que permitan el acceso a internet,

	incluyendo computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, consolas de videojuegos, dispositivos de realidad virtual y cualquier otro equipo digital de acceso masivo, deberán garantizar que éstos incorporen gratuitamente herramientas de control parental, filtros de contenido, configuraciones de privacidad para menores de edad y mecanismos que permitan identificar contenidos generados mediante Inteligencia Artificial. Las herramientas señaladas deberán encontrarse disponibles desde la configuración inicial del dispositivo y ser fácilmente accesibles para madres, padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o guarda y custodia. Los equipos digitales utilizados en instituciones públicas y privadas que impartan educación a niñas, niños y adolescentes deberán mantener permanentemente activadas dichas medidas de protección.

	Las autoridades competentes promoverán, en coordinación con instituciones académicas, centros públicos de investigación y los sectores social y privado, el desarrollo de tecnologías nacionales orientadas a fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes, impulsando la investigación científica, la innovación tecnológica y la utilización ética y responsable de la Inteligencia Artificial. **Asimismo, fomentarán programas permanentes de alfabetización digital, formación tecnológica y cultura de la Inteligencia Artificial dirigidos a niñas, niños, adolescentes, madres, padres de familia, docentes y personal educativo, con el objeto de prevenir riesgos derivados del uso de tecnologías digitales.**
Artículo 148. ... I. A VII Bis. ...	Artículo 148. ...

Sin correlativo VIII. A IX. ...	I. A VII Bis. ... **VII Ter. El incumplimiento por parte de los concesionarios de telecomunicaciones, proveedores de servicios de internet, plataformas digitales, desarrolladores de aplicaciones, administradores de sistemas operativos, proveedores de dispositivos digitales y demás sujetos obligados, de las obligaciones previstas en los artículos 101 Bis 4. y 101 Bis 5. de esta Ley, incluyendo la omisión de identificar contenidos generados mediante Inteligencia Artificial, la falta de mecanismos de protección frente a la violencia digital, la ausencia de medidas para prevenir la suplantación de identidad mediante tecnologías sintéticas y el incumplimiento de los deberes de protección reforzada de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.**

Artículo 149. ...	VIII. A IX. ...
	Artículo 149. ...
Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VII Bis del artículo anterior, serán sancionadas con multa de tres mil y hasta treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta.	Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, **VII, VII Bis. y VII Ter.** del artículo anterior, serán sancionadas con multa de tres mil y hasta treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta.
	Cuando las infracciones previstas en la fracción VII Ter. deriven del uso indebido de sistemas de Inteligencia Artificial que generen, reproduzcan, distribuyan o permitan la difusión de contenidos sintéticos destinados a la suplantación de identidad, violencia digital, explotación, fraude, manipulación o cualquier afectación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la autoridad competente podrá imponer la multa en su monto máximo, sin perjuicio de las

En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V, VI y VII del artículo anterior, se impondrá una multa adicional de mil quinientos y hasta siete mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que se difunda o se encuentren disponibles en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso que se trate, la información, datos, imágenes o audios. ... a) A c). ...	**responsabilidades civiles, administrativas o penales que correspondan.** En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V, VI, **VII, VII Bis, y VII Ter.** del artículo anterior, se impondrá una multa adicional de mil quinientos y hasta siete mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que se difunda o se encuentren disponibles en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso que se trate, la información, datos, imágenes o audios. ... a) A c). ...

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. – SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 149; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 101 BIS 4, 101 BIS 5, LA FRACCIÓN VII TER DEL ARTÍCULO 148, Y UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 149, TODOS DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Para quedar como sigue:

Artículo 101 Bis 4. Los concesionarios de telecomunicaciones, proveedores de servicios de acceso a internet, plataformas digitales, desarrolladores y administradores de aplicaciones, sistemas operativos, servicios digitales, redes sociales, servicios de alojamiento de contenido, así como cualquier persona física o moral que ofrezca servicios digitales accesibles por niñas, niños y adolescentes, deberán adoptar las medidas técnicas, tecnológicas, organizacionales y de seguridad necesarias para garantizar el interés superior de la niñez, privilegiando en todo momento la protección de sus derechos humanos en los entornos digitales.
Para tal efecto estarán obligados a:

I. Implementar mecanismos eficaces de verificación de edad, controles parentales y configuraciones de privacidad activadas por defecto para usuarios menores de edad.

II. Incorporar herramientas que prevengan el acceso a contenidos que promuevan violencia, explotación, trata de personas, pornografía infantil, autolesiones, conductas suicidas, delitos

sexuales, delincuencia organizada o cualquier otro contenido que pueda afectar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

III. Adoptar mecanismos tecnológicos que permitan detectar, limitar y retirar con prontitud contenidos generados mediante Inteligencia Artificial que constituyan violencia digital, fraude, manipulación, explotación, acoso, hostigamiento, extorsión, suplantación de identidad o cualquier otra conducta que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes.

IV. Identificar de manera clara, visible y accesible los contenidos, imágenes, audios, videos o cualquier otro material generado total o parcialmente mediante sistemas de Inteligencia Artificial, a efecto de evitar engaños, manipulación o confusión respecto de su autenticidad.

V. Implementar medidas razonables para prevenir la utilización de tecnologías de Inteligencia Artificial destinadas a la creación o difusión de imágenes, voces, videos o cualquier contenido sintético que suplante la identidad de niñas, niños y adolescentes o facilite la comisión de delitos en su contra.

VI. Garantizar que los sistemas automatizados o de Inteligencia Artificial utilizados para recomendar contenidos privilegien el interés superior de la niñez, evitando algoritmos que incentiven conductas de riesgo, violencia, explotación o cualquier afectación a su desarrollo físico, psicológico o emocional.

Las medidas previstas en este artículo deberán observar, además de la legislación aplicable en materia de protección de datos

personales, los principios de legalidad, transparencia, seguridad, protección reforzada de la niñez, no discriminación, supervisión humana y utilización responsable de la Inteligencia Artificial.

Artículo 101 Bis 5. Los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores de equipos, dispositivos y sistemas que permitan el acceso a internet, incluyendo computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, consolas de videojuegos, dispositivos de realidad virtual y cualquier otro equipo digital de acceso masivo, deberán garantizar que éstos incorporen gratuitamente herramientas de control parental, filtros de contenido, configuraciones de privacidad para menores de edad y mecanismos que permitan identificar contenidos generados mediante Inteligencia Artificial.

Las herramientas señaladas deberán encontrarse disponibles desde la configuración inicial del dispositivo y ser fácilmente accesibles para madres, padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o guarda y custodia.

Los equipos digitales utilizados en instituciones públicas y privadas que impartan educación a niñas, niños y adolescentes deberán mantener permanentemente activadas dichas medidas de protección.

Las autoridades competentes promoverán, en coordinación con instituciones académicas, centros públicos de investigación y los sectores social y privado, el desarrollo de tecnologías nacionales orientadas a fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes, impulsando la investigación científica, la innovación

tecnológica y la utilización ética y responsable de la Inteligencia Artificial.

Asimismo, fomentarán programas permanentes de alfabetización digital, formación tecnológica y cultura de la Inteligencia Artificial dirigidos a niñas, niños, adolescentes, madres, padres de familia, docentes y personal educativo, con el objeto de prevenir riesgos derivados del uso de tecnologías digitales.

Artículo 148. ...

I. A VII Bis. ...

VII Ter. Respecto de los concesionarios de telecomunicaciones, proveedores de servicios de internet, plataformas digitales, desarrolladores de aplicaciones, administradores de sistemas operativos, proveedores de dispositivos digitales y demás sujetos obligados, el incumplimiento por parte de las obligaciones previstas en los artículos 101 Bis 4 y 101 Bis 5 de esta Ley, incluyendo la omisión de identificar contenidos generados mediante Inteligencia Artificial, la falta de mecanismos de protección frente a la violencia digital, la ausencia de medidas para prevenir la suplantación de identidad mediante tecnologías sintéticas y el incumplimiento de los deberes de protección reforzada de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

VIII. A IX. ...

Artículo 149. ...

Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, **VII, VII Bis. y VII Ter.** Del artículo anterior, serán sancionadas con multa de tres mil y hasta treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta.

Cuando las infracciones previstas en la fracción VII Ter del artículo anterior deriven del uso indebido de sistemas de Inteligencia Artificial que generen, reproduzcan, distribuyan o permitan la difusión de contenidos sintéticos destinados a la suplantación de identidad, violencia digital, explotación, fraude, manipulación o cualquier afectación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la autoridad competente podrá imponer la multa en su monto máximo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que correspondan.

En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V, VI, **VII, VII Bis. y VII Ter.** del artículo anterior, se impondrá una multa adicional de mil quinientos y hasta siete mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que se difunda o se encuentren disponibles en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso que se trate, la información, datos, imágenes o audios.

...

a) A c). ...

TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. – El Ejecutivo Federal a través de la autoridad competente, tendrá 180 días para realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias que deriven del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Septiembre de 2026.

DIP. TANIA PALACIOS KURI

Fuentes consultadas

1. UNICEF México, ECPAT International e INTERPOL.

Disrupting Harm México: proteger a la niñez frente a la violencia sexual digital.

Estudio que documenta la explotación y el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes facilitados por la tecnología en México. De este documento se obtuvieron, entre otros, los siguientes datos:

Uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet sufrió explotación o abuso sexual facilitados por tecnologías digitales.

Aproximadamente 1.6 millones de adolescentes fueron afectados.

El 67 % de los incidentes ocurrieron exclusivamente en línea.

El 64 % de las víctimas conocían previamente a la persona agresora.

Las víctimas presentan mayores probabilidades de autolesión y conductas suicidas.

Página oficial del estudio:

UNICEF México – Disrupting Harm México

Informe en PDF:

Disrupting Harm México (PDF)

2. UNICEF México.

Cómo proteger a la niñez frente a las violencias en el ámbito digital.

De esta publicación se retomaron los siguientes datos:

Casi ocho de cada diez niñas y niños de entre 6 y 11 años utilizan internet.

Más del 95 % de las y los adolescentes son usuarios de internet.

El tiempo promedio de conexión diaria.

La necesidad de fortalecer la protección en entornos digitales.

Página oficial:

3. UNICEF México – Cómo proteger a la niñez frente a las violencias en el ámbito digital

UNICEF México.

IA y deepfakes: nuevos riesgos de violencia sexual contra la niñez.

De este documento se obtuvo la explicación sobre:

Qué son los deepfakes.

Cómo la Inteligencia Artificial facilita nuevas modalidades de violencia sexual digital.

Los riesgos de la creación de imágenes, audios y videos falsos de niñas, niños y adolescentes mediante IA.

Página oficial:

UNICEF México – IA y deepfakes: nuevos riesgos de violencia sexual contra la niñez

4. UNICEF México.

Nuevo estudio: Uno de cada ocho adolescentes en México sufrió explotación o abuso sexual en línea.

Comunicado oficial mediante el cual se presentaron los principales resultados del estudio Disrupting Harm México. De aquí se retomó el dato relativo a los 1.6 millones de adolescentes afectados, así como la explicación sobre la magnitud del problema en México.

Página oficial:

UNICEF México – Comunicado oficial del estudio Disrupting Harm

5. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
https://www.unodc.org

6. Organización Mundial del Turismo
https://www.unwto.org

7. ECPAT International
https://ecpat.org

8. Organización Internacional para las Migraciones
https://www.iom.int

9. Organización Internacional del Trabajo
https://www.ilo.org

10. Departamento de Estado de los Estados Unidos
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/

11. Interpol
https://www.interpol.int

12. Europol
https://www.europol.europa.eu

13. Organización Mundial de la Salud
https://www.who.int

14. Secretaría de Turismo
https://www.gob.mx/sectur

15. Sistema Nacional DIF
https://www.gob.mx/difnacional

16. Fiscalía General de la República
https://www.gob.mx/fgr

17. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
https://www.gob.mx/sesnsp

18. Instituto Nacional de Estadística y Geografía
https://www.inegi.org.mx

19. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
https://www.cndh.org.mx

20. Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes
https://www.gob.mx/sipinna

21. Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México
https://consejociudadanomx.org

22. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
https://www.gob.mx/sspc

23. Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas
https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/comision-intersecretarial-contra-la-trata-de-personas

24. Walk Free Foundation
https://www.globalslaveryindex.org

25. Polaris Project
https://polarisproject.org

26. Thorn
https://www.thorn.org

27. Save the Children
https://www.savethechildren.org

28. International Justice Mission
https://www.ijm.org

29. Ley General de Turismo
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGT.pdf

30. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf

31. Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

32. UNODC Report on Trafficking in Persons
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html

33. ECPAT Report Mega Sporting Events
https://ecpat.org/resource-category/reports/

34. Comité de los Derechos del Niño. Observación general núm. 25 (2021) sobre los derechos de la niñez en relación con el entorno digital, CRC/C/GC/25.
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation

35. UNICEF Innocenti. Guidance on AI and Children, versión 3.0 (2025).
https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children

36. UNESCO. Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021).
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381133

37. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 78/265, sistemas de inteligencia artificial seguros, protegidos y fiables (2024).
https://digitallibrary.un.org/record/4043244/files/A_RES_78_265-EN.pdf

38. Naciones Unidas. Pacto Digital Mundial, anexo I del Pacto para el Futuro (2024).
https://www.un.org/pact-for-the-future/en/annex-i-global-digital-compact

39. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Debida diligencia en derechos humanos para la inteligencia artificial y obligaciones estatales, A/HRC/62/33 (2026).

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc6233-human-rights-due-diligence-ai-and-state-obligations-under

40. CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Inclusión digital y gobernanza de contenidos en internet, CIDH/RELE/INF. 28/24 (2024).
https://www.oas.org/en/iachr/expression/reports/Digital_inclusion_eng.pdf

41. Relatorías internacionales y regionales para la libertad de expresión. Declaración conjunta sobre el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de niñas y niños en la era digital (2026).
https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/expression/basic_documents/declarations/2026.asp

P.O 7450/66/26

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo y de Igualdad de Género para dictamen.
Septiembre 14 de 2026.

DIP. TANIA PALACIOS KURI
DIPUTADA FEDERAL
Querétaro

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, EN MATERIA DE TURISMO SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIAS CONTRA MUJERES, ADOLESCENTES, NIÑAS Y NIÑOS

La que suscribe, **Diputada Tania Palacios Kuri**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Objeto de la iniciativa y diagnóstico del problema regulatorio

La presente iniciativa tiene por objeto establecer un marco nacional mínimo de prevención, identificación de riesgos, auxilio inmediato, canalización especializada y seguimiento interinstitucional frente a situaciones de violencia, desaparición, trata, explotación o discriminación vinculadas con destinos, servicios, establecimientos, rutas, medios de transporte, plataformas y actividades turísticas. Su finalidad no es trasladar al personal turístico funciones de seguridad pública, investigación criminal, procuración de justicia o protección especializada, sino definir **obligaciones de primer contacto** y rutas claras de coordinación que permitan activar oportunamente a las autoridades competentes.

La Ley General de Turismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009 y su texto vigente registra como última reforma la publicada el 14 de noviembre de 2025. Su artículo 1 reconoce a la actividad turística como una actividad prioritaria nacional y

un factor de desarrollo regional. Sin embargo, el marco vigente aborda la seguridad turística de manera fragmentaria. La fracción IX del artículo 7 limita la intervención de la Secretaría de Turismo a analizar y coadyuvar con una dependencia de seguridad pública cuando se estime necesaria la protección de la integridad física de las personas turistas; los artículos 54 y 58 regulan requisitos y obligaciones generales de los prestadores; el artículo 61 reconoce derechos de las personas turistas; y los artículos 68 a 72 contienen un régimen sancionador que no contempla de manera expresa incumplimientos vinculados con la negativa de auxilio, la revictimización, la divulgación de datos de víctimas o la omisión de activar servicios de emergencia.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias fue publicada el 1 de febrero de 2007. El Decreto publicado el 15 de enero de 2026 modificó su denominación, actualizó su objeto y fortaleció los deberes reforzados de protección del Estado. En su texto vigente, el artículo 16 define la violencia en la comunidad; el artículo 17 obliga al Estado a erradicarla mediante información, monitoreo, bancos de datos y políticas para espacios y transportes públicos; el artículo 20 ordena reforzar las acciones de prevención, atención, investigación, sanción y reparación respecto de mujeres, adolescentes, niñas y niños; y los artículos 35 y 36 regulan el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. No obstante, la política turística no aparece identificada expresamente como una política sectorial del Sistema ni la Secretaría de Turismo forma parte de su integración.

La falta de reglas sectoriales homogéneas produce una brecha operativa. Una persona puede encontrarse lejos de su lugar de residencia, desconocer las autoridades locales, no hablar español, tener una discapacidad, estar acompañada por niñas o niños, carecer de conectividad o depender temporalmente de un establecimiento, una empresa de transporte o una plataforma. En estas circunstancias, la ausencia de protocolos visibles y accesibles, personal capacitado y mecanismos de referencia puede retrasar la activación de servicios de emergencia, búsqueda, salud, atención a víctimas o protección de la niñez. La reforma propone cerrar esa brecha sin sustituir competencias ni crear expedientes paralelos.

II. Fundamento constitucional y competencia legislativa

El artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado el 10 de junio de 2011, reconoce los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales; ordena interpretar las normas favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de las personas; y obliga a todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Estas **obligaciones vinculan a las autoridades turísticas federales, estatales y municipales** cuando diseñan políticas, regulan servicios, realizan verificaciones o reciben solicitudes de auxilio.

El artículo 4o. constitucional fue reformado por el Decreto publicado el 15 de noviembre de 2024 para reconocer expresamente la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho de toda persona a vivir una vida libre de violencias y los deberes reforzados de protección del Estado hacia mujeres, adolescentes, niñas y niños. El propio artículo 4o. mantiene el mandato de que, en todas las decisiones y actuaciones estatales, el interés superior de la niñez sea una consideración primordial. En consecuencia, la política turística debe prever medidas diferenciadas cuando los riesgos se agravan por razón de género, edad, discapacidad, origen étnico, situación migratoria, territorio u otras condiciones concurrentes.

El artículo 21 constitucional dispone que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, y exige que la actuación institucional se rija por la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. La iniciativa respeta esta distribución: el personal turístico no investiga ni determina responsabilidades; únicamente brinda auxilio inicial, evita acciones revictimizantes y activa a las autoridades legalmente competentes.

La competencia del Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Turismo deriva de los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-K, de la Constitución, que faculta al Congreso

para expedir leyes en materia de turismo y establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes. La reforma correlativa a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias desarrolla los mandatos de los artículos 1o. y 4o. constitucionales y fortalece la coordinación del Sistema Nacional dentro de una ley general ya vigente.

Los artículos 6o. y 16 constitucionales también resultan aplicables. La generación de diagnósticos y la evaluación de políticas deben conciliar el principio de máxima publicidad con la protección de datos personales, la vida privada, la seguridad de las víctimas y la reserva de información cuya divulgación pueda incrementar riesgos. Por ello, el Modelo propuesto trabaja con datos agregados y desagregados para fines estadísticos, pero prohíbe publicar información que permita identificar a víctimas, denunciantes, niñas, niños o adolescentes, refugios o medidas de protección.

III. Vinculación con la planeación nacional y la política turística 2025-2030

El **Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025, establece en el Eje General 3, "Economía moral y trabajo", el Objetivo 3.11: fomentar el desarrollo turístico para promover un crecimiento regional y comunitario sostenible y una distribución equitativa de sus beneficios. Las estrategias 3.11.1 a 3.11.4 vinculan dicho objetivo con cadenas de valor, infraestructura, asistencia técnica, uso responsable del territorio y mejora del marco normativo. La seguridad y la protección de las personas son condiciones necesarias para que el desarrollo turístico produzca bienestar y no reproduzca riesgos o exclusiones.

El mismo Plan incorpora el Eje Transversal 1, "Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres". El Objetivo T1.4 y sus estrategias orientan la prevención de las violencias en todos los ámbitos y etapas de la vida y la construcción de entornos seguros para mujeres, niñas, niños y adolescentes. El Objetivo T1.5 exige una política nacional integral y coordinada que brinde respuesta inmediata y máxima protección a las mujeres víctimas mediante mecanismos efectivos, especializados y accesibles. La iniciativa traduce estos mandatos al ámbito turístico mediante protocolos, capacitación, información accesible, coordinación y evaluación.

El **Programa Sectorial de Turismo 2025-2030**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2025, se encuentra alineado con el Objetivo 3.11 del Plan Nacional de Desarrollo e incorpora los ejes transversales de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, innovación pública y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La reforma dota a esa planeación de una base legal específica para integrar la prevención de violencias y la protección de grupos en situación de mayor riesgo dentro de la política sectorial.

IV. Dimensión estructural de las violencias y pertinencia para el sector turístico

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más había experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Este dato no significa que toda violencia ocurra en contextos turísticos, pero confirma que la movilidad, el hospedaje, el transporte, la recreación y los eventos de alta afluencia operan dentro de una realidad estructural que exige prevención y capacidad de respuesta.

Los riesgos no se distribuyen de forma uniforme. Las mujeres, adolescentes y niñas indígenas, afromexicanas, rurales, migrantes, con discapacidad o en situación de pobreza pueden enfrentar barreras simultáneas para solicitar ayuda. Las niñas, niños y adolescentes están expuestos a riesgos específicos de abuso, explotación sexual, trata, desaparición y violencia digital. Las personas turistas extranjeras pueden desconocer el idioma, la ubicación o las instituciones competentes. Las personas trabajadoras y las comunidades anfitrionas también pueden ser afectadas por dinámicas de violencia relacionadas con establecimientos, corredores o eventos turísticos.

Por ello, la **seguridad turística** no debe confundirse con vigilancia indiscriminada ni con acciones orientadas exclusivamente a proteger la reputación de un destino. Un enfoque de derechos humanos exige prevención basada en riesgos, auxilio sin discriminación, canales accesibles, respeto a la autonomía, protección de datos, coordinación institucional y rendición de cuentas. También exige evitar que una solicitud de ayuda sea condicionada a la

contratación de un servicio, al pago, a la acreditación de la situación migratoria o a la presentación inmediata de una denuncia penal.

V. Parámetro convencional aplicable

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, obliga en sus artículos 1, 2 y 3 a eliminar la discriminación directa e indirecta y a adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres. Su artículo 5 exige modificar patrones socioculturales basados en estereotipos. Estas obligaciones alcanzan a las políticas sectoriales y a la regulación de actores privados cuando sus actividades producen impactos diferenciados.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", adoptada el 9 de junio de 1994, reconoce en su artículo 3 el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado. El artículo 7 obliga a actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia y a modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que la toleren. El artículo 8 prevé medidas progresivas de educación, capacitación, servicios especializados, programas de prevención y producción de información, y el artículo 9 exige considerar situaciones de vulnerabilidad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, exige no discriminación y consideración primordial del interés superior en sus artículos 2 y 3; protección de la vida, supervivencia y desarrollo en el artículo 6; participación en el artículo 12; medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas contra toda forma de violencia en el artículo 19; y protección frente a explotación sexual, venta, trata y otras formas de explotación en los artículos 34, 35 y 36.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada el 13 de diciembre de 2006, establece obligaciones de igualdad y no discriminación en el artículo 5, accesibilidad en el artículo 9, acceso a la información en el artículo 21 y participación en la

vida cultural, la recreación, el esparcimiento y el turismo en el artículo 30. La accesibilidad de los canales de auxilio, información y denuncia es, por tanto, una obligación jurídica y no una medida optativa.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente sus artículos 1.1, 2, 4, 5, 7, 19, 24 y 25, obliga a respetar y garantizar los derechos sin discriminación, adecuar el derecho interno, proteger la vida, integridad y libertad personal, adoptar medidas especiales para la niñez, asegurar igualdad ante la ley y ofrecer recursos efectivos. La reforma propuesta constituye una medida de adecuación normativa dirigida a hacer operativos esos deberes en un sector de amplia movilidad y participación privada.

VI. Recomendaciones recientes de los órganos de tratados de las Naciones Unidas

Las **Observaciones finales** del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el décimo informe periódico de México, documento CEDAW/C/MEX/CO/10, de 10 de julio de 2025, ofrecen un fundamento especialmente directo. En los párrafos 27 y 28, el Comité expresó preocupación por la persistencia de desapariciones, violencia sexual y feminicidios; por la insuficiencia de respuestas y datos; por la falta de aplicación uniforme de protocolos; por las barreras de acceso para mujeres con discapacidad y en zonas remotas; y por retrasos en mecanismos de emergencia. Recomendó recopilar datos integrales, realizar revisiones multisectoriales, aplicar enfoques interseccionales, asegurar accesibilidad y coordinar protocolos de respuesta.

La conexión con el turismo es expresa. En el párrafo 31, inciso b), el Comité señaló que los tratantes operan con impunidad en regiones fronterizas, zonas turísticas y corredores migratorios. En el párrafo 32 recomendó reforzar la coordinación, aplicar estrategias integrales de prevención, garantizar servicios inmediatos de refugio, salud, atención psicosocial y asistencia jurídica, y evaluar las intervenciones con datos desagregados. La iniciativa no pretende sustituir la legislación especializada en trata, sino garantizar que los servicios turísticos cuenten con mecanismos de detección de riesgos y canalización oportuna.

El Comité de los Derechos del Niño, en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de México, documento CRC/C/MEX/CO/6-7, de 8 de octubre de 2024, recomendó en el párrafo 15 establecer regulaciones claras para que las empresas respeten los derechos humanos y los derechos del niño, realicen evaluaciones y actúen con debida diligencia en sus operaciones y cadenas de suministro. En el párrafo 18 exigió que el interés superior sea consideración primordial en decisiones legislativas, administrativas, políticas, programas y proyectos.

En los párrafos 26 y 27, el Comité manifestó seria preocupación por la prevalencia de violencia, abuso y explotación sexuales y por el conocimiento insuficiente de los canales de denuncia. Recomendó canales accesibles, confidenciales, eficaces y adaptados a la niñez, detección y derivación oportuna, investigación adecuada y asistencia multidisciplinaria. Estas recomendaciones justifican que los prestadores de servicios turísticos conozcan sus límites, activen servicios especializados y no interroguen, confronten ni revictimicen a niñas, niños o adolescentes.

La **Observación general núm. 2** del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 22 de mayo de 2014, precisó que la accesibilidad es una condición previa para la participación plena y que los Estados deben establecer y supervisar normas mínimas, incluso respecto de entidades privadas que ofrecen instalaciones y servicios al público. Por ello, los protocolos y canales del Modelo deberán ser accesibles desde su diseño.

VII. Jurisprudencia interamericana y nacional

En el Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculó la violencia contra las mujeres con patrones estructurales de discriminación y estableció obligaciones de prevención cuando las autoridades conocen o deben conocer un riesgo real e inmediato, así como deberes de respuesta diligente, investigación libre de estereotipos y garantías de no repetición. Este estándar respalda la identificación de riesgos territoriales y la activación inmediata de mecanismos de búsqueda y protección.

En el Caso Véliz Franco y otros vs. Guatemala, sentencia de 19 de mayo de 2014, la Corte examinó la desaparición y muerte de una adolescente y articuló el deber de garantía de la vida e integridad con las medidas especiales de protección de la niñez y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. El precedente demuestra que género y edad generan obligaciones reforzadas y exige evitar respuestas tardías o basadas en prejuicios.

En el Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2020, la Corte reiteró que los Estados deben prevenir, regular y supervisar los entornos institucionales en los que niñas y adolescentes pueden quedar expuestas a violencia sexual y relaciones asimétricas de poder. Aunque los hechos ocurrieron en el ámbito educativo, el estándar de regulación y supervisión resulta pertinente para sectores en los que actores públicos y privados prestan servicios a niñas, niños y adolescentes.

En el Caso Digna Ochoa y familiares vs. México, sentencia de 25 de noviembre de 2021, la Corte insistió en que las actuaciones estatales deben incorporar perspectiva de género y excluir razonamientos estereotipados. En el ámbito nacional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 554/2013 el 25 de marzo de 2015, estableció estándares para investigar muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y debida diligencia. La iniciativa traslada esos aprendizajes a la fase preventiva y de primer contacto, sin atribuir funciones de investigación al personal turístico.

VIII. Responsabilidad empresarial, límites de actuación y protección de datos

Los **Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos**, contenidos en el informe A/HRC/17/31, de 21 de marzo de 2011, y respaldados por el Consejo de Derechos Humanos mediante la resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, distinguen el deber estatal de proteger frente a abusos cometidos por terceros y la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos mediante políticas, debida diligencia y mecanismos de reclamación. Las obligaciones propuestas se ajustan al tipo, tamaño y nivel de riesgo del servicio y prevén

asistencia técnica para micro y pequeñas empresas, sin reducir los estándares esenciales de protección.

La iniciativa delimita expresamente la actuación del personal turístico. No podrá realizar interrogatorios o investigaciones, confrontar a la persona afectada con quien sea señalado como agresor, promover conciliaciones en situaciones de violencia, retener documentos o condicionar el auxilio. Su deber consiste en activar servicios de emergencia, procurar un espacio seguro sin exponerse ni exponer a terceros, facilitar comunicación, dar aviso a las autoridades de protección cuando se trate de niñas, niños o adolescentes y preservar, sin manipular, objetos, registros o información que pudieran constituir indicios.

La preservación de información no autoriza la integración de expedientes privados ni la recopilación indiscriminada de testimonios, imágenes o documentos. Las autoridades y los prestadores deberán aplicar los principios de finalidad, proporcionalidad, minimización, seguridad y confidencialidad previstos en la legislación de protección de datos personales. Los informes públicos utilizarán datos agregados y desagregados con fines estadísticos y de evaluación, sin identificar víctimas ni revelar refugios, domicilios o medidas de protección.

El Código **Ético Mundial para el Turismo**, adoptado por la Asamblea General de la entonces Organización Mundial del Turismo mediante resolución A/RES/406(XIII), de 1 de octubre de 1999, y reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 56/212, de 21 de diciembre de 2001, vincula el turismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Aunque no sustituye las obligaciones constitucionales y convencionales, constituye un referente sectorial para la conducta responsable de autoridades y empresas.

IX. Contenido y alcance de la reforma

La propuesta se articula mediante decisiones normativas concretas:

- Actualizar la atribución de coordinación de la Secretaría de Turismo y vincularla con seguridad pública, procuración de justicia, salud, protección civil, búsqueda de personas, atención a víctimas, protección de la niñez y adelanto de las mujeres.
- Crear el Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias como instrumento de coordinación sectorial, con diagnósticos, protocolos, capacitación, información accesible, canales de auxilio, medidas para eventos de alta afluencia e indicadores de evaluación.
- Definir con precisión las actuaciones permitidas y prohibidas al personal turístico, a fin de proteger a las personas y evitar invasiones a competencias ministeriales, policiales, periciales o jurisdiccionales.
- Incorporar obligaciones verificables para prestadores: protocolo proporcional al riesgo, capacitación, información visible y accesible, auxilio, confidencialidad, activación de emergencias y colaboración con las autoridades.
- Reconocer derechos de las personas turistas a recibir información, auxilio, orientación y canalización sin discriminación, revictimización o condicionamientos indebidos.
- Establecer sanciones determinadas y medidas temporales de seguridad sujetas a legalidad, proporcionalidad, motivación, revisión y audiencia.
- Reconocer expresamente los contextos turísticos dentro de la prevención de la violencia en la comunidad e incorporar a la Secretaría de Turismo al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres.
- Crear atribuciones sectoriales específicas para la Secretaría de Turismo dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, evitando que su participación dependa de acuerdos informales.

X. Impacto presupuestario y administrativo

La iniciativa no crea una dependencia, fiscalía, comisión, registro de víctimas ni sistema informático paralelo. El Modelo se apoyará en las competencias, sistemas de emergencia, comisiones de búsqueda, procuradurías de protección, centros de justicia para las mujeres, servicios de salud, refugios, comisiones de víctimas y mecanismos de verificación ya existentes. Los transitorios establecen plazos para adecuaciones reglamentarias, emisión de lineamientos y cumplimiento gradual de obligaciones de protocolo, capacitación e información.

La implementación se realizará con cargo a los presupuestos aprobados, sin perjuicio de las asignaciones progresivas que correspondan. La gradualidad no exime de los deberes inmediatos de no discriminar, no revictimizar, proteger la confidencialidad, activar servicios de emergencia ante riesgo real e inminente y dar aviso a las autoridades competentes cuando se requieran medidas urgentes de protección.

Cuadro Comparativo

Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría:	**Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría:**
I. a VIII. ...	I. a VIII. ...
IX. Analizar y coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública, en los casos en que se determine que sea necesaria la protección de la integridad física de los turistas;	**IX. Coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con las demás autoridades competentes en materia de seguridad pública, procuración de justicia, salud, protección civil, atención a víctimas, búsqueda de personas, protección de niñas, niños y adolescentes y adelanto de las mujeres, para prevenir riesgos, atender emergencias, activar los mecanismos de búsqueda y protección que correspondan, canalizar casos y proteger la vida, integridad, libertad, seguridad y dignidad de turistas, personas trabajadoras y comunidades anfitrionas, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interés superior de la niñez, accesibilidad, interculturalidad e interseccionalidad;**
X. a XVIII. ...	X. a XVIII. ...
SIN CORRELATIVO.	**CAPÍTULO V BIS** **DEL TURISMO SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIAS**

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
SIN CORRELATIVO.	**Artículo 21 Bis. La Secretaría establecerá y coordinará, con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, el Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias, como instrumento de política pública y coordinación sectorial. El Modelo tendrá por objeto fijar estándares mínimos para prevenir e identificar riesgos, brindar auxilio inicial, canalizar a las autoridades competentes y dar seguimiento interinstitucional, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, a situaciones de violencia, desaparición, trata, explotación sexual o laboral y discriminación vinculadas con destinos, servicios, establecimientos, rutas, medios de transporte, plataformas y actividades turísticas.** **El Modelo observará los principios de debida diligencia, perspectiva de género, interés superior de la niñez, autonomía progresiva, accesibilidad, interculturalidad, interseccionalidad, confidencialidad, no discriminación, no criminalización y no revictimización.**

SIN CORRELATIVO.	Artículo 21 Ter. El Modelo comprenderá, por lo menos: I. Diagnósticos y mapas de riesgo territoriales y por tipo de servicio, elaborados con datos agregados y desagregados para fines estadísticos, sin estigmatizar comunidades ni divulgar información que incremente riesgos; II. Protocolos nacionales mínimos de prevención, auxilio, actuación inicial, canalización y seguimiento, diferenciados según el tipo de servicio, las características de las personas involucradas y el nivel de riesgo; III. Estándares mínimos de capacitación inicial y periódica para el personal de primer contacto; IV. Información pública, visible, accesible y, cuando proceda, multilingüe sobre derechos, servicios de emergencia, búsqueda, denuncia, atención a víctimas y protección especializada; V. Rutas de acceso a canales confidenciales, accesibles y disponibles de manera continua para solicitar auxilio o reportar hechos; VI. Mecanismos de coordinación y referencia con fiscalías, comisiones de búsqueda, procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, centros de justicia para las mujeres, servicios de salud, refugios y comisiones de víctimas; VII. Medidas específicas para eventos de alta afluencia, temporadas vacacionales, corredores de movilidad y zonas con alertas o riesgos identificados; VIII. Mecanismos para asegurar la continuidad de la atención cuando la persona se encuentre fuera de su lugar de residencia, y

SIN CORRELATIVO.	IX. Indicadores de evaluación sobre cobertura, oportunidad, calidad, canalización, seguimiento y accesibilidad. Artículo 21 Quáter. Los protocolos deberán distinguir entre la actuación de auxilio del personal turístico y las funciones exclusivas de las autoridades. En ningún caso los prestadores de servicios turísticos o su personal podrán: I. Realizar interrogatorios, diligencias de investigación o valoraciones sobre la veracidad de los hechos posiblemente delictivos; II. Confrontar a la persona afectada con quien sea señalado como agresor; III. Condicionar el auxilio a la presentación de una denuncia, acreditación de situación migratoria, pago, consumo o entrega de datos no indispensables; IV. Promover conciliaciones, mediaciones o acuerdos entre la persona afectada y quien sea señalado como agresor en situaciones de violencia; V. Difundir, comercializar o utilizar imágenes, datos o relatos de víctimas, denunciantes, niñas, niños o adolescentes, o VI. Retener documentos, pertenencias o dispositivos de la persona que solicita ayuda.

SIN CORRELATIVO.	Artículo 21 Quinquies. Cuando exista un riesgo real e inminente, el personal de primer contacto deberá, conforme al protocolo aplicable y sin ponerse ni poner a otras personas en riesgo, activar de inmediato los servicios de emergencia; procurar un espacio seguro; evitar, cuando sea posible, el contacto con la persona señalada como agresora; facilitar la comunicación con una persona de confianza y con autoridades especializadas; y limitar la recopilación de datos a lo estrictamente necesario para la protección y canalización. Tratándose de niñas, niños o adolescentes, deberá darse aviso inmediato a los servicios de emergencia y a la Procuraduría de Protección competente, sin perjuicio de las obligaciones de denuncia previstas en otras leyes. La actuación respetará la voluntad, dignidad y autonomía de la persona, salvo los deberes legales y las medidas urgentes indispensables para proteger la vida o la integridad.
SIN CORRELATIVO.	Artículo 21 Sexies. La Secretaría emitirá lineamientos nacionales y modelos de protocolo diferenciados para hospedaje, alimentos y bebidas, agencias, operadores, guías, transportación turística, plataformas digitales, parques, recintos, eventos y demás servicios. Podrá reconocer protocolos equivalentes cuando acrediten un nivel de protección igual o superior. Los lineamientos observarán los principios de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y certeza jurídica. Las micro y pequeñas empresas recibirán herramientas simplificadas y asistencia técnica, sin reducir los estándares esenciales de protección.

SIN CORRELATIVO.	**Artículo 21 Septies. La Secretaría publicará anualmente un informe de implementación del Modelo con datos agregados y desagregados, indicadores, recomendaciones y avances. Queda prohibida la publicación de información que permita identificar a víctimas, denunciantes, niñas, niños o adolescentes, o que revele la ubicación de refugios, domicilios o medidas de protección.** **El Modelo no dará lugar a la creación de expedientes privados de víctimas ni de bases paralelas de datos personales. La canalización y el seguimiento se realizarán mediante los sistemas y autoridades legalmente competentes.**
Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos, deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades.	**Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y los lineamientos y protocolos emitidos para la implementación del Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias, de conformidad con el tipo, tamaño, capacidad y nivel de riesgo del servicio, sin perjuicio de las obligaciones que les impongan otras autoridades.**

Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:	**Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:**
I. Anunciar visiblemente en los lugares de acceso al establecimiento la dirección, teléfono o correo electrónico, tanto del responsable del establecimiento, como de la autoridad competente, ante la que puede presentar sus quejas;	I. a VII. ...
II. Informar al turista los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, de los servicios y productos que éste requiera;	**VIII. Profesionalizar y capacitar periódicamente a sus personas trabajadoras y empleadas, especialmente al personal de primer contacto, en derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, accesibilidad, prevención de violencias, auxilio inicial y no revictimización, en los términos de las leyes respectivas y de los lineamientos emitidos por la Secretaría;**
III. Implementar los procedimientos alternativos que determine la Secretaría, para la atención de quejas;	IX. ...
IV. Participar en el manejo responsable de los recursos naturales, arqueológicos, históricos y culturales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;	**X. Cumplir con las características y requisitos exigidos de acuerdo con su clasificación, así como con los lineamientos y protocolos del Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias que resulten aplicables;**
V. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y actualizar los datos oportunamente;	XI. ...
VI. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o pactados;	**XII. Contar con un protocolo de prevención y actuación inicial acorde con el tipo, tamaño, capacidad y nivel de riesgo del servicio;**
VII. Expedir, aún sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal que ampare los cobros realizados por la prestación del servicio turístico proporcionado;	**XIII. Exhibir información visible y accesible sobre derechos, servicios de emergencia, canales de denuncia, búsqueda, atención a víctimas y protección especializada;**
VIII. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación con la Secretaría;	**XIV. Atender y canalizar de manera inmediata, respetuosa y sin discriminación las solicitudes de auxilio y los reportes relacionados con riesgo, violencia, desaparición, trata, explotación o discriminación;**
IX. Disponer de lo necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos incluyan las especificaciones que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier condición;	**XV. Proteger la confidencialidad y los datos personales de quienes soliciten auxilio, reporten hechos o sean víctimas, y abstenerse de utilizar dicha información con fines comerciales, publicitarios, disciplinarios o migratorios;**
	XVI. Activar los servicios de emergencia y procurar, conforme al protocolo aplicable y sin generar riesgos adicionales, un espacio seguro cuando exista peligro real e inminente para la vida, integridad, libertad o seguridad de una persona;
	XVII. Colaborar con las autoridades competentes y preservar, sin manipular, los objetos, registros o información que pudieran

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
X. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los términos de la presente Ley; XI. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide que se puedan prestar los servicios en otros idiomas o lenguas, y XII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.	**constituir indicios, poniéndolos a disposición de la autoridad conforme a los protocolos aplicables, y** **XVIII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.**

Artículo 61. Los turistas, con independencia de los derechos que les asisten como consumidores, tendrán en los términos previstos en esta Ley, los siguientes derechos:	**Artículo 61. Los turistas,** con independencia de su nacionalidad o situación migratoria y **de los derechos que les asisten como consumidores, tendrán en los términos previstos en esta Ley, los siguientes derechos:**
I. Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, sobre todas y cada una de las condiciones de prestación de los servicios turísticos;	I. ...
II. Obtener los bienes y servicios turísticos en las condiciones contratadas;	**II. Obtener los bienes y servicios turísticos en las condiciones contratadas y en condiciones de seguridad, accesibilidad, igualdad, dignidad, calidad y no discriminación;**
III. Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación, y en cualquier caso, las correspondientes facturas o comprobantes fiscales legalmente emitidas;	III. y IV. ...
IV. Recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y servicios de calidad, acordes con la naturaleza y cantidad de la categoría que ostente el establecimiento elegido;	**V. Recibir los servicios sin discriminación, trato degradante, criminalización o revictimización;**
V. Recibir los servicios sin ser discriminados en los términos del artículo 59 de esta Ley;	VI. ...
VI. Disfrutar el libre acceso y goce de todo el patrimonio turístico, así como su permanencia en las instalaciones de dichos servicios, sin más limitaciones que las derivadas de los reglamentos específicos de cada actividad, y	**VII. Contar con condiciones de higiene y seguridad para sus personas y bienes y recibir información suficiente, veraz, accesible y oportuna sobre riesgos previsibles, medidas de seguridad, servicios de emergencia, canales de auxilio y mecanismos de queja, y**
VII. Contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus personas y bienes en las instalaciones y servicios turísticos, en los términos establecidos en la legislación correspondiente.	**VIII. Recibir auxilio, orientación y canalización frente a situaciones de riesgo, violencia, desaparición, trata, explotación o discriminación, sin condicionamiento a la presentación de denuncia, acreditación de situación migratoria, pago o consumo, y con respeto a su dignidad, autonomía, privacidad y derecho a no ser revictimizada.**

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 68. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, así como las derivadas de las quejas de los turistas, serán sancionadas por la Secretaría, para lo cual deberá iniciar y resolver el procedimiento administrativo de infracción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, su reglamento y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. ...	**Artículo 68. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, los lineamientos y protocolos del Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias y demás disposiciones derivadas serán sancionadas por la Secretaría, previo procedimiento administrativo en el que se garantice el derecho de audiencia. Para individualizar la sanción se considerarán la gravedad de la conducta, el riesgo generado, el daño causado, la reincidencia, la capacidad económica de la persona infractora y las acciones de corrección y reparación adoptadas.** ...

SIN CORRELATIVO.	**Artículo 70 Bis. El incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones XII a XVII del artículo 58 será sancionado con multa de doscientas a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la infracción.** **Cuando la conducta consista en negar auxilio ante un riesgo real e inminente, obstaculizar la activación de servicios de emergencia, divulgar indebidamente datos o imágenes de víctimas, o genere un riesgo grave para la vida, integridad, libertad o seguridad, la multa será de quinientas a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que correspondan.** **En caso de reincidencia, la Secretaría podrá suspender hasta por treinta días el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Turismo o la actividad específica relacionada con la infracción, previo procedimiento y mediante resolución fundada, motivada y proporcional. Se considerará reincidencia la comisión de una nueva infracción a las fracciones XII a XVII del artículo 58 dentro del año siguiente a que haya quedado firme la resolución anterior.**

SIN CORRELATIVO.	**Artículo 70 Ter. Cuando, con motivo de una visita de verificación, queja o reporte, la autoridad turística competente advierta un riesgo real e inminente para la vida, integridad, libertad o seguridad de las personas, podrá ordenar medidas temporales de seguridad estrictamente necesarias y proporcionales, incluida la suspensión de una actividad específica, la habilitación inmediata de mecanismos de auxilio o la preservación de registros vinculados con el riesgo.** **Las medidas deberán constar en resolución fundada y motivada, no constituirán sanción, permanecerán únicamente durante el tiempo indispensable y serán revisadas en un plazo máximo de setenta y dos horas. La autoridad garantizará audiencia a la persona afectada tan pronto como la urgencia lo permita.**
ARTÍCULO 16.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.	**ARTÍCULO 16.-** Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. **Comprende los hechos ocurridos en espacios, rutas, medios de transporte, servicios, establecimientos, plataformas y destinos turísticos, con independencia de que la víctima sea residente, visitante, trabajadora o integrante de la comunidad anfitriona.**

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:	**ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:**
I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria;	I. a III. ...
II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres;	**IV. El diseño de políticas públicas dirigidas al desarrollo de espacios y transportes públicos libres de todo tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, incluidos los destinos turísticos, corredores de movilidad, establecimientos, plataformas, eventos y servicios de alta afluencia;**
III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias, y	**V. La adopción de mecanismos y protocolos accesibles de prevención, auxilio, canalización y continuidad de la atención en espacios públicos y contextos turísticos, sin discriminación ni revictimización, y**
IV. El diseño de políticas públicas dirigidas al desarrollo de espacios y transportes públicos libres de todo tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.	**VI. La coordinación con las autoridades turísticas para incorporar criterios de prevención y protección en la regulación, promoción, capacitación, verificación y evaluación del sector.**
ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, los tres órdenes de gobierno deben reforzar las acciones de prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño respecto a mujeres, adolescentes, niñas y niños.	**ARTÍCULO 20.-** Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, los tres órdenes de gobierno deben reforzar las acciones de prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño respecto a mujeres, adolescentes, niñas y niños. **En la planeación y ejecución de estas acciones deberán considerarse los riesgos específicos presentes en espacios públicos, territorios y destinos turísticos, rutas de movilidad, establecimientos, plataformas, eventos y servicios de alta afluencia, y asegurarse la coordinación con las autoridades turísticas competentes.**

ARTÍCULO 35.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. El Sistema Nacional, ante la situación de emergencia identificada a partir de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, constituirá una Comisión Especial con el objetivo de verificar y promover que existan en las entidades federativas los elementos institucionales, normativos y estructurales de prevención, atención, sanción y erradicación con el fin de prever la posible contingencia generada por la violencia feminicida o el agravio comparado. Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna. Por ello, considerará la etnia, el idioma, edad, condición social, de salud, de discapacidad, preferencia sexual, o cualquier otra condición, para que puedan acceder a las políticas públicas en la materia.	**ARTÍCULO 35.-** La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. ... **El Sistema incorporará políticas sectoriales en materia turística para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en destinos, establecimientos, servicios, rutas, plataformas, eventos y contextos de movilidad, y para asegurar la coordinación con las autoridades competentes en seguridad, salud, procuración de justicia, búsqueda de personas, atención a víctimas y protección de niñas, niños y adolescentes.**

ARTÍCULO 36.- El Sistema Nacional se conformará por las personas titulares de:	**ARTÍCULO 36.- El Sistema Nacional se conformará por las personas titulares de:**
I. El Ejecutivo Federal, quien lo presidirá;	I. a XV. ...
II. La Secretaría de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional;	**XV Bis. La Secretaría de Turismo;**
III. La Secretaría de Gobernación;	XVI. Los Gobiernos de las entidades federativas, y
IV. La Secretaría de Bienestar;	XVII. El Instituto Nacional Electoral.
V. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;	...
VI. La Fiscalía General de la República;	
VII. La Secretaría de Educación Pública;	
VIII. La Secretaría de Cultura;	
IX. La Secretaría de Salud;	
X. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;	
XI. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;	
XII. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;	
XIII. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;	
XIV. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas;	
XV. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones;	
XVI. Los Gobiernos de las entidades federativas, y	
XVII. El Instituto Nacional Electoral.	
...	

SIN CORRELATIVO.	Sección Décima Ter. De la Secretaría de Turismo ARTÍCULO 48 Ter.- Corresponde a la Secretaría de Turismo: I. Incorporar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, el interés superior de la niñez, la accesibilidad y la interseccionalidad en la política, regulación, promoción, capacitación, verificación y evaluación de la actividad turística; II. Coordinar, en el ámbito de su competencia, el Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias y participar en las acciones del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; III. Emitir lineamientos y modelos de protocolo sectoriales para prevenir riesgos, brindar auxilio inicial y canalizar situaciones de violencia, desaparición, trata, explotación o discriminación; IV. Promover la capacitación del personal de primer contacto y la difusión de información visible, accesible y, cuando proceda, multilingüe sobre derechos y servicios de protección; V. Coordinar mecanismos de referencia y continuidad de la atención con autoridades de seguridad, salud, procuración de justicia, búsqueda de personas, atención a víctimas, protección de la niñez y adelanto de las mujeres; VI. Generar y remitir al Sistema Nacional información agregada y desagregada para fines estadísticos y de evaluación, sin crear bases paralelas de datos personales de víctimas ni divulgar información que incremente riesgos; VII. Informar anualmente al Sistema Nacional sobre la implementación de las políticas de turismo seguro y libre de violencias, y VIII. Las demás previstas en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción IX del artículo 7; el artículo 54; las fracciones VIII y X del artículo 58; el primer párrafo y las fracciones II, V y VII del artículo 61; el primer párrafo del artículo 68; y se adicionan un Capítulo V Bis al Título Tercero, denominado "Del Turismo Seguro y Libre de Violencias", con los artículos 21 Bis, 21 Ter, 21 Quáter, 21 Quinquies, 21 Sexies y 21 Septies; las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al artículo 58, recorriéndose la actual fracción XII para quedar como XVIII; una fracción VIII al artículo 61; y los artículos 70 Bis y 70 Ter, todos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría:

I. a VIII. ...

IX. Coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con las demás autoridades competentes en materia de seguridad pública, procuración de justicia, salud, protección civil, atención a víctimas, búsqueda de personas, protección de niñas, niños y adolescentes y adelanto de las mujeres, para prevenir riesgos, atender emergencias, activar los mecanismos de búsqueda y protección que correspondan, canalizar casos y proteger la vida, integridad, libertad, seguridad y dignidad de turistas, personas trabajadoras y comunidades anfitrionas, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interés superior de la niñez, accesibilidad, interculturalidad e interseccionalidad;

X. a XVIII. ...

CAPÍTULO V BIS
DEL TURISMO SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIAS

Artículo 21 Bis. La Secretaría establecerá y coordinará, con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, el Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias, como instrumento de política pública y coordinación sectorial. El Modelo tendrá por objeto fijar estándares mínimos para prevenir e identificar riesgos, brindar auxilio inicial, canalizar a las autoridades competentes y dar seguimiento interinstitucional, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, a situaciones de violencia, desaparición, trata, explotación sexual o laboral y discriminación vinculadas con destinos, servicios, establecimientos, rutas, medios de transporte, plataformas y actividades turísticas.

El Modelo observará los principios de debida diligencia, perspectiva de género, interés superior de la niñez, autonomía progresiva, accesibilidad, interculturalidad, interseccionalidad, confidencialidad, no discriminación, no criminalización y no revictimización.

Artículo 21 Ter. El Modelo comprenderá:

I. Diagnósticos y mapas de riesgo territoriales y por tipo de servicio, elaborados con datos agregados y desagregados para fines estadísticos, sin estigmatizar comunidades ni divulgar información que incremente riesgos;

II. Protocolos nacionales mínimos de prevención, auxilio, actuación inicial, canalización y seguimiento, diferenciados según el tipo de servicio, las características de las personas involucradas y el nivel de riesgo;

III. Estándares mínimos de capacitación inicial y periódica para el personal de primer contacto;

IV. Información pública, visible, accesible y, cuando proceda, multilingüe sobre derechos, servicios de emergencia, búsqueda, denuncia, atención a víctimas y protección especializada;

V. Rutas de acceso a canales confidenciales, accesibles y disponibles de manera continua para solicitar auxilio o reportar hechos;

VI. Mecanismos de coordinación y referencia con fiscalías, comisiones de búsqueda, procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, centros de justicia para las mujeres, servicios de salud, refugios y comisiones de víctimas;

VII. Medidas específicas para eventos de alta afluencia, temporadas vacacionales, corredores de movilidad y zonas con alertas o riesgos identificados;

VIII. Mecanismos para asegurar la continuidad de la atención cuando la persona se encuentre fuera de su lugar de residencia, y

IX. Indicadores de evaluación sobre cobertura, oportunidad, calidad, canalización, seguimiento y accesibilidad.

Artículo 21 Quáter. Los protocolos deberán distinguir entre la actuación de auxilio del personal turístico y las funciones exclusivas de las autoridades. En ningún caso los prestadores de servicios turísticos o su personal podrán:
I. Realizar interrogatorios, diligencias de investigación o valoraciones sobre la veracidad de los hechos posiblemente delictivos;

II. Confrontar a la persona afectada con quien sea señalado como agresor;

III. Condicionar el auxilio a la presentación de una denuncia, acreditación de situación migratoria, pago, consumo o entrega de datos no indispensables;

IV. Promover conciliaciones, mediaciones o acuerdos entre la persona afectada y quien sea señalado como agresor en situaciones de violencia;

V. Difundir, comercializar o utilizar imágenes, datos o relatos de víctimas, denunciantes, niñas, niños o adolescentes, o

VI. Retener documentos, pertenencias o dispositivos de la persona que solicita ayuda.

Artículo 21 Quinquies. Cuando exista un riesgo real e inminente, el personal de primer contacto deberá, conforme al protocolo aplicable y sin ponerse ni poner a otras personas en riesgo, activar de inmediato los servicios de emergencia; procurar un espacio seguro; evitar, cuando sea posible, el contacto con la persona señalada como agresora; facilitar la comunicación con una persona de confianza y con autoridades especializadas; y limitar la recopilación de datos a lo estrictamente necesario para la protección y canalización.

Tratándose de niñas, niños o adolescentes, deberá darse aviso inmediato a los servicios de emergencia y a la Procuraduría de Protección competente, sin perjuicio de las obligaciones de denuncia previstas en otras leyes. La actuación respetará la voluntad, dignidad y autonomía de la persona, salvo los deberes legales y las medidas urgentes indispensables para proteger la vida o la integridad.

Artículo 21 Sexies. La Secretaría emitirá lineamientos nacionales y modelos de protocolo diferenciados para hospedaje, alimentos y bebidas, agencias, operadores, guías, transportación turística, plataformas digitales, parques, recintos, eventos y demás servicios. Podrá reconocer protocolos equivalentes cuando acrediten un nivel de protección igual o superior.

Los lineamientos observarán los principios de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y certeza jurídica. Las micro y pequeñas empresas recibirán herramientas simplificadas y asistencia técnica, sin reducir los estándares esenciales de protección.

Artículo 21 Septies. La Secretaría publicará anualmente un informe de implementación del Modelo con datos agregados y desagregados, indicadores, recomendaciones y avances. Queda prohibida la publicación de información que permita identificar a víctimas,

denunciantes, niñas, niños o adolescentes, o que revele la ubicación de refugios, domicilios o medidas de protección.

El Modelo no dará lugar a la creación de expedientes privados de víctimas ni de bases paralelas de datos personales. La canalización y el seguimiento se realizarán mediante los sistemas y autoridades legalmente competentes.

Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas **y los lineamientos y protocolos emitidos para la implementación del Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias, de conformidad con el tipo, tamaño, capacidad y nivel de riesgo del servicio**, sin perjuicio de las obligaciones que les impongan otras autoridades.

Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
I. a VII. ...

VIII. Profesionalizar **y capacitar periódicamente a sus personas trabajadoras y empleadas, especialmente al personal de primer contacto, en derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, accesibilidad, prevención de violencias, auxilio inicial y no revictimización, en los términos de las leyes respectivas y de los lineamientos emitidos por la Secretaría;**

IX. ...

X. Cumplir con las características y requisitos exigidos de acuerdo con su clasificación, **así como con los lineamientos y protocolos del Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias que resulten aplicables;**

XI. ...

XII. Contar con un protocolo de prevención y actuación inicial acorde con el tipo, tamaño, capacidad y nivel de riesgo del servicio;

XIII. Exhibir información visible y accesible sobre derechos, servicios de emergencia, canales de denuncia, búsqueda, atención a víctimas y protección especializada;

XIV. Atender y canalizar de manera inmediata, respetuosa y sin discriminación las solicitudes de auxilio y los reportes relacionados con riesgo, violencia, desaparición, trata, explotación o discriminación;

XV. Proteger la confidencialidad y los datos personales de quienes soliciten auxilio, reporten hechos o sean víctimas, y abstenerse de utilizar dicha información con fines comerciales, publicitarios, disciplinarios o migratorios;

XVI. Activar los servicios de emergencia y procurar, conforme al protocolo aplicable y sin generar riesgos adicionales, un espacio seguro cuando exista peligro real e inminente para la vida, integridad, libertad o seguridad de una persona;

XVII. Colaborar con las autoridades competentes y preservar, sin manipular, los objetos, registros o información que pudieran constituir indicios, poniéndolos a disposición de la autoridad conforme a los protocolos aplicables, y

XVIII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.

Artículo 61. Los turistas, con independencia **de su nacionalidad o situación migratoria y** de los derechos que les asisten como consumidores, tendrán en los términos previstos en esta Ley, los siguientes derechos:

I. ...

II. Obtener los bienes y servicios turísticos en las condiciones contratadas **y en condiciones de seguridad, accesibilidad, igualdad, dignidad, calidad y no discriminación;**

III. y IV. ...

V. Recibir los servicios **sin discriminación, trato degradante, criminalización o revictimización;**

VI. ...

VII. Contar con condiciones de higiene y seguridad **para** sus personas y bienes **y recibir información suficiente, veraz, accesible y oportuna sobre riesgos previsibles, medidas de seguridad, servicios de emergencia, canales de auxilio y mecanismos de queja, y**

VIII. Recibir auxilio, orientación y canalización frente a situaciones de riesgo, violencia, desaparición, trata, explotación o discriminación, sin condicionamiento a la presentación de denuncia, acreditación de situación migratoria, pago o consumo, y con respeto a su dignidad, autonomía, privacidad y derecho a no ser revictimizada.

Artículo 68. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, **los lineamientos y protocolos del Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias y demás disposiciones derivadas** serán sancionadas por la Secretaría, **previo procedimiento administrativo en el que se garantice el derecho de audiencia. Para individualizar la sanción se considerarán la gravedad de la conducta, el riesgo generado, el daño causado, la reincidencia, la capacidad económica de la persona infractora y las acciones de corrección y reparación adoptadas.**

...

Artículo 70 Bis. El incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones XII a XVII del artículo 58 será sancionado con multa de doscientas a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la infracción.

Cuando la conducta consista en negar auxilio ante un riesgo real e inminente, obstaculizar la activación de servicios de emergencia, divulgar indebidamente datos o imágenes de víctimas, o genere un riesgo grave para la vida, integridad, libertad o seguridad, la multa será de quinientas a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que correspondan.

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá suspender hasta por treinta días el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Turismo o la actividad específica relacionada con la infracción, previo procedimiento y mediante resolución fundada, motivada y proporcional. Se considerará reincidencia la comisión de una nueva infracción a las fracciones XII a XVII del artículo 58 dentro del año siguiente a que haya quedado firme la resolución anterior.

Artículo 70 Ter. Cuando, con motivo de una visita de verificación, queja o reporte, la autoridad turística competente advierta un riesgo real e inminente para la vida, integridad, libertad o seguridad de las personas, podrá ordenar medidas temporales de seguridad estrictamente necesarias y proporcionales, incluida la suspensión de una actividad específica, la habilitación inmediata de mecanismos de auxilio o la preservación de registros vinculados con el riesgo.

Las medidas deberán constar en resolución fundada y motivada, no constituirán sanción, permanecerán únicamente durante el tiempo indispensable y serán revisadas en un plazo máximo de setenta y dos horas. La autoridad garantizará audiencia a la persona afectada tan pronto como la urgencia lo permita.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 16 y la fracción IV del artículo 17; y se adicionan las fracciones V y VI al artículo 17; un segundo párrafo al artículo 20; un cuarto párrafo al artículo 35; una fracción XV Bis al artículo 36; y una Sección Décima Ter, denominada "De la Secretaría de Turismo", con un artículo 48 Ter, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 16.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. **Comprende los hechos ocurridos en espacios, rutas, medios de transporte, servicios, establecimientos, plataformas y destinos turísticos, con independencia de que la víctima sea residente, visitante, trabajadora o integrante de la comunidad anfitriona.**

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:
I. a III. ...

IV. El diseño de políticas públicas dirigidas al desarrollo de espacios y transportes públicos libres de todo tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, **incluidos los destinos turísticos, corredores de movilidad, establecimientos, plataformas, eventos y servicios de alta afluencia;**

V. La adopción de mecanismos y protocolos accesibles de prevención, auxilio, canalización y continuidad de la atención en espacios públicos y contextos turísticos, sin discriminación ni revictimización, y

VI. La coordinación con las autoridades turísticas para incorporar criterios de prevención y protección en la regulación, promoción, capacitación, verificación y evaluación del sector.

ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, los tres órdenes de gobierno deben reforzar las acciones de prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño respecto a mujeres, adolescentes, niñas y niños.

En la planeación y ejecución de estas acciones deberán considerarse los riesgos específicos presentes en espacios públicos, territorios y destinos turísticos, rutas de movilidad, establecimientos, plataformas, eventos y servicios de alta afluencia, y asegurarse la coordinación con las autoridades turísticas competentes.

ARTÍCULO 35.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

...

El Sistema **incorporará políticas sectoriales en materia turística para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en destinos, establecimientos, servicios, rutas, plataformas, eventos y contextos de movilidad, y para asegurar la coordinación con las autoridades competentes en seguridad, salud, procuración de justicia, búsqueda de personas, atención a víctimas y protección de niñas, niños y adolescentes.**

ARTÍCULO 36.- El Sistema Nacional se conformará por las personas titulares de:
I. a XV. ...

XV Bis. La Secretaría de Turismo;

XVI. Los Gobiernos de las entidades federativas, y

XVII. El Instituto Nacional Electoral.

Sección Décima Ter. De la Secretaría de Turismo

ARTÍCULO 48 Ter.- Corresponde a la Secretaría de Turismo:

I. Incorporar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, el interés superior de la niñez, la accesibilidad y la interseccionalidad en la política, regulación, promoción, capacitación, verificación y evaluación de la actividad turística;

II. Coordinar, en el ámbito de su competencia, el Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias y participar en las acciones del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;

III. Emitir lineamientos y modelos de protocolo sectoriales para prevenir riesgos, brindar auxilio inicial y canalizar situaciones de violencia, desaparición, trata, explotación o discriminación;

IV. Promover la capacitación del personal de primer contacto y la difusión de información visible, accesible y, cuando proceda, multilingüe sobre derechos y servicios de protección;

V. Coordinar mecanismos de referencia y continuidad de la atención con autoridades de seguridad, salud, procuración de justicia, búsqueda de personas, atención a víctimas, protección de la niñez y adelanto de las mujeres;

VI. Generar y remitir al Sistema Nacional información agregada y desagregada para fines estadísticos y de evaluación, sin crear bases paralelas de datos personales de víctimas ni divulgar información que incremente riesgos;

VII. Informar anualmente al Sistema Nacional sobre la implementación de las políticas de turismo seguro y libre de violencias, y

VIII. Las demás previstas en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones reglamentarias necesarias dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. La Secretaría de Turismo, con participación de las autoridades integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, emitirá el Modelo Nacional de Turismo Seguro y Libre de Violencias, sus lineamientos y los modelos de protocolo dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO. Los prestadores de servicios turísticos contarán con doce meses, contados a partir de la publicación de los lineamientos, para adecuar sus protocolos, capacitar a su personal y exhibir la información prevista en las fracciones VIII, XII y XIII del artículo 58 de la Ley General de Turismo. Durante ese plazo no se impondrán sanciones por el incumplimiento de dichas obligaciones, sin perjuicio de los deberes inmediatos de no discriminación, no revictimización, confidencialidad, auxilio y activación de servicios de emergencia.

QUINTO. Las autoridades deberán coordinar e interoperar los mecanismos de canalización y seguimiento mediante los sistemas legalmente competentes, sin crear expedientes privados de víctimas ni bases paralelas de datos personales.

SEXTO. La implementación del presente Decreto se realizará con cargo a los presupuestos aprobados de las autoridades competentes, sin perjuicio de las asignaciones progresivas que correspondan en ejercicios subsecuentes.

SÉPTIMO. Las referencias a dependencias cuya denominación haya sido modificada se entenderán hechas a la autoridad que ejerza las atribuciones correspondientes.

DIP. TANIA PALACIOS KURI

Palacio Legislativo de San Lázaro. Septiembre de 2026.

Fuentes documentales y normativas

Las referencias siguientes sustentan la exposición de motivos y permiten verificar públicamente las fechas, disposiciones, recomendaciones y estándares utilizados:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917; texto vigente con últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026; artículos 1o., 2o., 4o., 6o., 16, 21, 25, 26, 71, 73, fracción XXIX-K, 133 y demás aplicables.
2. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos.
3. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024.
4. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de diecisiete ordenamientos federales en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026.
5. Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009; texto vigente con última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025; artículos 1, 7, 18 a 22, 46 a 61 y 68 a 72.
6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007; texto vigente con última reforma publicada el 15 de enero de 2026; artículos 1, 2, 4, 5, 16, 16 Bis, 17, 20, 21, 35, 36, 38 y 42 a 50.

7. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014; texto vigente con última reforma publicada el 15 de enero de 2026; artículos 2, 3, 6, 10, 12, 13, 46, 47, 103, 104 y 125.

8. Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013; disposiciones relativas a ayuda inmediata, asistencia, atención, protección, trato digno, privacidad y reparación integral.

9. Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014; artículos 109, 132, 227, 228 y demás disposiciones aplicables a derechos de las víctimas, obligaciones de primer respondiente y cadena de custodia.

10. Legislación general y federal vigente en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y de particulares, especialmente los principios de finalidad, proporcionalidad, seguridad, confidencialidad y responsabilidad.

11. Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, el 15 de abril de 2025; Eje General 3, Objetivo 3.11 y estrategias 3.11.1 a 3.11.4; Eje Transversal 1, objetivos T1.4 y T1.5.

12. Programa Sectorial de Turismo 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2025.

13. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, resultados nacionales publicados en 2022.

14. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979; artículos 1, 2, 3, 5 y 14.

15. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", adoptada el 9 de junio de 1994; artículos 3, 4, 7, 8 y 9.

16. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989; artículos 2, 3, 6, 12, 19, 34, 35 y 36.

17. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 61/106, de 13 de diciembre de 2006; artículos 5, 9, 21 y 30.

18. Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969; artículos 1.1, 2, 4, 5, 7, 19, 24 y 25.

19. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el décimo informe periódico de México, CEDAW/C/MEX/CO/10, 10 de julio de 2025; párrafos 12, 27, 28, 31, 32, 53, 54, 63 y 64.

20. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general núm. 33 (2015), sobre el acceso de las mujeres a la justicia; Recomendación general núm. 35 (2017), sobre violencia por razón de género; y Recomendación general núm. 38 (2020), sobre trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial.

21. Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de México, CRC/C/MEX/CO/6-7, 8 de octubre de 2024; párrafos 6, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 26 y 27.

22. Comité de los Derechos del Niño, Observación general núm. 14 (2013), sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial; y Observación general núm. 16 (2013), sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño.

23. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación general núm. 2 (2014), artículo 9: Accesibilidad, CRPD/C/GC/2, 22 de mayo de 2014.

24. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, A/HRC/17/31, 21 de marzo de 2011; resolución 17/4, de 16 de junio de 2011.

25. Organización Mundial del Turismo, Código Ético Mundial para el Turismo, adoptado mediante resolución A/RES/406(XIII), de 1 de octubre de 1999; Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 56/212, de 21 de diciembre de 2001.

26. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C núm. 205.

27. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Véliz Franco y otros vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 19 de mayo de 2014, Serie C núm. 277.

28. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 24 de junio de 2020, Serie C núm. 405.

29. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Digna Ochoa y familiares vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de noviembre de 2021, Serie C núm. 447.

30. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Amparo en Revisión 554/2013, resuelto el 25 de marzo de 2015.

P.O 7451/66/26

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

DIP. TANIA PALACIOS KURI
DIPUTADA FEDERAL
Querétaro

Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Turismo, para dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.
Septiembre 14 de 2026.

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN EN CONTEXTOS TURÍSTICOS

La que suscribe, **Diputada Tania Palacios Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,** con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN EN CONTEXTOS TURÍSTICOS**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Objeto de la iniciativa y brecha regulatoria

La presente iniciativa tiene por objeto incorporar a la **política turística nacional** un marco sectorial de prevención, debida diligencia y actuación inicial frente a la **trata de personas**, la **explotación sexual, la explotación laboral y otras formas de explotación** que puedan ser cometidas o facilitadas mediante servicios, establecimientos, rutas, medios de transporte, plataformas digitales, eventos o destinos turísticos. La propuesta no atribuye funciones de investigación penal a las autoridades turísticas ni a los prestadores de servicios; establece obligaciones preventivas, canales de aviso y reglas de coordinación con las autoridades competentes.

La Ley General de Turismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009 y su última reforma fue publicada el 14 de noviembre de 2025. Sus artículos 54, 58, 63 y 66 regulan, respectivamente, los requisitos para operar, las obligaciones de los prestadores, la

profesionalización del sector y las facultades de verificación. No obstante, el texto vigente carece de obligaciones expresas de evaluación de riesgos, protocolos diferenciados, capacitación especializada, reporte oportuno, protección frente a represalias, conservación limitada de información y salvaguardas contra la discriminación y la revictimización en casos vinculados con trata o explotación.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos fue publicada el 14 de junio de 2012 y registra como última reforma la publicada el 14 de noviembre de 2025. Su artículo 89, fracción IX, ya impone a la Secretaría de Turismo el deber de diseñar programas y políticas para desalentar el denominado "turismo sexual", capacitar al personal del sector y realizar campañas. Ese mandato constituye un antecedente sectorial directo, pero su formulación resulta limitada frente a las modalidades contemporáneas de captación, intermediación, alojamiento y explotación, incluidas las que operan mediante plataformas digitales, cadenas comerciales, corredores de movilidad y eventos de alta afluencia.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014 y reformada por última vez el 15 de enero de 2026, reconoce en sus artículos 46 y 47 el derecho a una vida libre de violencia y obliga a las autoridades a prevenir, atender y sancionar la trata, el abuso y la explotación sexual o laboral de personas menores de dieciocho años. El artículo 12 impone a toda persona que conozca una vulneración el deber de hacerlo del conocimiento inmediato de la autoridad competente, mientras que el artículo 105 exige medidas de protección a quienes, por sus funciones o actividades, tengan bajo su cuidado, supervisión o contacto a niñas, niños y adolescentes. La legislación turística debe traducir estos deberes generales en obligaciones operativas claras y verificables.

II. Fundamento constitucional y legal

El artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado el 10 de junio de 2011, reconoce los derechos humanos de fuente constitucional y convencional, establece la interpretación conforme y el principio pro persona, y obliga a todas las autoridades a promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Estas obligaciones vinculan a las autoridades turísticas en el ámbito de sus competencias y exigen que la regulación sectorial incorpore medidas razonables de prevención frente a riesgos previsibles.

El artículo 4o. constitucional dispone, desde la reforma publicada el 12 de octubre de 2011, que el interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en todas las decisiones y actuaciones del Estado y debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. La reforma publicada el 15 de noviembre de 2024 adicionó, además, el derecho de toda persona a vivir una vida libre de violencias y reconoció deberes reforzados de protección respecto de mujeres, adolescentes, niñas y niños. La prevención de la explotación en entornos turísticos debe interpretarse a la luz de ambos mandatos.

La reforma constitucional publicada el 14 de julio de 2011 incorporó la materia de trata de personas a la fracción XXI del artículo 73 y ordenó expedir una ley general. En su texto vigente, el inciso a) faculta al Congreso de la Unión para establecer los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. La presente iniciativa no modifica tipos penales: articula las obligaciones administrativas y preventivas de tres leyes generales dentro del sistema constitucional de competencias.

El **Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030**, publicado el 15 de abril de 2025, establece en el Objetivo 3.11 el mandato de fomentar un desarrollo turístico regional y comunitario sostenible y, en su Estrategia 3.11.4, mejorar el marco normativo aplicable al sector. La prevención de la trata y la explotación forma parte de esa mejora regulatoria, pues protege a las personas y fortalece la integridad de las cadenas de valor y de los destinos.

III. Obligaciones internacionales en materia de trata y explotación

El **Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas**, Especialmente Mujeres y Niños, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000, obliga a adoptar un enfoque integral que combine prevención, sanción, protección y cooperación. Sus artículos 2, 6, 9 y 10 exigen proteger y asistir a las víctimas con pleno respeto a sus derechos humanos, adoptar políticas y programas de prevención, reducir los factores de vulnerabilidad y capacitar a las autoridades y actores pertinentes.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979, obliga en su artículo 6 a adoptar todas las medidas apropiadas para suprimir la trata de mujeres y la explotación de la prostitución. La Recomendación general núm. 38 del Comité CEDAW, de 5 de noviembre de 2020, precisó que las respuestas estatales deben atender las causas estructurales, la discriminación interseccional, la participación de actores privados, las cadenas de suministro y el riesgo de criminalizar a las propias víctimas.

Las **Observaciones finales** sobre el décimo informe periódico de México, documento CEDAW/C/MEX/CO/10, de 10 de julio de 2025, ofrecen un fundamento directo y actual. En el párrafo 31, inciso b), el Comité advirtió que las redes de trata operan con impunidad en regiones fronterizas, zonas turísticas y corredores migratorios. En el párrafo 32 recomendó fortalecer la coordinación, implementar estrategias integrales de prevención, asegurar servicios inmediatos para mujeres y niñas víctimas y evaluar las intervenciones mediante datos desagregados. La reforma propuesta traduce esas recomendaciones al ámbito específico de los servicios turísticos.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, obliga a garantizar el interés superior y la no discriminación y, en sus artículos 19, 32, 34, 35 y 36, exige proteger a niñas, niños y adolescentes frente a toda forma de violencia, explotación

económica, explotación sexual, venta, trata y cualquier otra práctica perjudicial. El Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, adoptado mediante la resolución 54/263, de 25 de mayo de 2000, refuerza las obligaciones de prohibición, prevención, investigación, protección y asistencia.

El Comité de los Derechos del Niño, en sus **Observaciones finales** sobre los informes sexto y séptimo combinados de México, documento CRC/C/MEX/CO/6-7, de 8 de octubre de 2024, recomendó en el párrafo 15 establecer regulaciones claras para que las empresas respeten los derechos de la niñez, evalúen sus impactos y apliquen debida diligencia en sus operaciones y cadenas de suministro. En los párrafos 26 y 27 calificó como urgente la prevención del abuso y la explotación sexual infantil, la existencia de canales accesibles, confidenciales y adaptados a la niñez, el reporte obligatorio y la atención multidisciplinaria de las víctimas.

IV. Empresas, plataformas y actividad turística

La **Observación general** núm. 16 del Comité de los Derechos del Niño, de 17 de abril de 2013, establece que los Estados deben adoptar medidas legislativas y regulatorias para prevenir impactos empresariales adversos sobre los derechos de la niñez, exigir procesos de debida diligencia y asegurar mecanismos de denuncia y reparación. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, contenidos en el informe A/HRC/17/31, de 21 de marzo de 2011, y respaldados por el Consejo de Derechos Humanos mediante la resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, articulan el deber estatal de proteger, la responsabilidad empresarial de respetar y el acceso a mecanismos de reparación.

El **Código Ético Mundial para el Turismo**, adoptado por la Asamblea General de la entonces Organización Mundial del Turismo mediante la resolución A/RES/406(XIII), de 1 de octubre de 1999, y reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 56/212, de 21 de diciembre de 2001, dispone en su artículo 2, numeral 3, que la explotación de seres humanos en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual y en particular cuando afecta a niñas y niños, contradice los objetivos fundamentales del turismo y debe ser combatida con la cooperación de los Estados y de los actores del sector.

La debida diligencia sectorial no equivale a vigilancia generalizada. Las obligaciones deben ser proporcionales al tamaño, naturaleza, capacidad y nivel de riesgo del prestador; basarse en indicadores objetivos y acumulativos; limitar la recopilación de datos a lo estrictamente necesario; y diferenciar con claridad la actuación inicial de auxilio de las funciones exclusivas de las autoridades. Las plataformas digitales deben contar con canales para reportar contenidos u operaciones vinculadas con posibles formas de explotación y preservar información únicamente conforme a requerimiento legal, con respeto a la privacidad, la libertad de expresión, la transparencia y el debido proceso.

V. Jurisprudencia interamericana y salvaguardas

En el Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, sentencia de 20 de octubre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó situaciones de trata, esclavitud contemporánea, servidumbre por deudas y trabajo forzoso, y destacó la obligación estatal de actuar frente a contextos de vulnerabilidad y patrones de explotación. El precedente confirma que la prevención debe abarcar no sólo la explotación sexual, sino también la explotación laboral y otras formas de sometimiento.

En el Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009, y en el Caso Véliz Franco y otros vs. Guatemala, sentencia de 19 de mayo de 2014, la Corte desarrolló el deber de debida diligencia reforzada frente a riesgos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, la obligación de actuar sin estereotipos y la necesidad de respuestas inmediatas y coordinadas. La Opinión Consultiva OC-21/14, de 19 de agosto de 2014, reiteró que la condición migratoria no puede reducir la protección de niñas y niños ni justificar respuestas discriminatorias o punitivas.

Por ello, la iniciativa prohíbe que una característica personal —como apariencia, vestimenta, origen, color de piel, discapacidad, condición socioeconómica, situación migratoria, orientación sexual, identidad de género, composición familiar o actividad laboral— sea utilizada de manera aislada para reportar a una persona, restringirle un servicio o someterla

a interrogatorios. También impide condicionar el auxilio a la denuncia, al pago o a la acreditación migratoria, y prohíbe represalias contra quienes reporten hechos de buena fe.

VI. Diseño normativo y proporcionalidad

La iniciativa articula tres leyes generales mediante responsabilidades diferenciadas:

- La Ley General de Turismo establece deberes preventivos y de actuación inicial para prestadores y plataformas, incorpora capacitación especializada, criterios objetivos de verificación, obligaciones de reporte y un régimen administrativo proporcional.
- La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes hace explícita la aplicación de los deberes de protección y debida diligencia a los servicios turísticos cuando sus operaciones puedan afectar a personas menores de edad, sin trasladar a particulares funciones de investigación.
- La Ley General en materia de Trata actualiza la atribución ya existente de la Secretaría de Turismo y exige que el Programa Nacional incorpore los contextos turísticos, digitales, laborales, migratorios y de movilidad, con indicadores basados en evidencia y sin estigmatización.

La propuesta utiliza estructuras existentes: la Secretaría de Turismo, el Registro Nacional de Turismo, las facultades de verificación, la Comisión Intersecretarial y las Procuradurías de Protección. No crea un nuevo órgano ni una base paralela de datos personales. Los artículos transitorios prevén lineamientos nacionales, gradualidad para los prestadores, instrumentos simplificados para micro y pequeñas empresas, actualización de programas y evaluación interinstitucional.

VII. Impacto presupuestario y administrativo.

La iniciativa no crea órganos administrativos ni plazas. Las obligaciones se incorporan a las atribuciones existentes de la Secretaría de Turismo, la Comisión Intersecretarial, las Procuradurías de Protección y las autoridades de verificación. Los lineamientos y modelos de protocolo

deberán prever gradualidad, herramientas simplificadas y asistencia técnica para micro y pequeñas empresas, sin reducir los estándares esenciales de protección. La implementación se sujetará a los presupuestos aprobados y al principio de progresividad.

Cuadro comparativo

Ley General de Turismo **Artículo 54.** Para operar, los prestadores de servicios turísticos, deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades.	**Artículo 54.** Para operar, los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades, **y deberán observar las obligaciones de prevención, debida diligencia y actuación inicial previstas en esta Ley, así como las disposiciones aplicables en materia de trata de personas, protección integral de niñas, niños y adolescentes, protección de datos personales, igualdad y no discriminación.**

Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:	**Artículo 58.** Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
I. a VII. ...	I. a VII. ...
VIII. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación con la Secretaría;	VIII. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación con la Secretaría, **incluida la capacitación inicial y periódica en derechos humanos, prevención de la trata y la explotación, protección integral de niñas, niños y adolescentes, indicadores objetivos de riesgo, actuación inicial, no revictimización y protección de datos personales;**
IX. a XI. ...	IX. a XI. ...
XII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.	**XII. Adoptar medidas de debida diligencia proporcionales a la naturaleza, tamaño, capacidad y nivel de riesgo de su actividad, que incluyan evaluación de riesgos, protocolos, mecanismos de reporte y salvaguardas de confidencialidad;**
	XIII. Comunicar de inmediato a la autoridad competente los hechos o indicadores objetivos y acumulativos que hagan presumir una situación de trata de personas, explotación sexual o laboral, o una vulneración grave de los derechos de niñas, niños o adolescentes, y adoptar medidas razonables para preservar la seguridad de la persona;
	XIV. Preservar y entregar a la autoridad competente, cuando exista requerimiento legal o riesgo inminente, únicamente la información necesaria y disponible relacionada con el hecho, de conformidad con la legislación en materia de protección de datos personales y, cuando resulte aplicable, con las reglas de cadena de custodia;
	XV. Abstenerse de ejercer represalias contra personas trabajadoras, usuarias o terceras que soliciten auxilio o reporten hechos de buena fe;

	XVI. Abstenerse de realizar interrogatorios, entrevistas forenses, retenciones, revisiones corporales, confrontaciones, traslados contra la voluntad de la persona o cualquier actuación reservada a las autoridades, y XVII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.
SIN CORRELATIVO. La Ley vigente no contiene un capítulo especializado sobre prevención de la trata y la explotación en la actividad turística.	CAPÍTULO III BIS DE LA PREVENCIÓN DE LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Artículo 60 Bis. La política turística incorporará la prevención de la trata de personas, la explotación sexual y laboral y cualquier otra forma de explotación que afecte a mujeres, adolescentes, niñas y niños, mediante debida diligencia, coordinación interinstitucional, diseño seguro de servicios, capacitación, información, verificación y evaluación. Las medidas deberán ser proporcionales al riesgo y respetar la dignidad, privacidad, autonomía, igualdad, no discriminación, presunción de inocencia y no revictimización. Artículo 60 Ter. La Secretaría emitirá lineamientos y modelos de protocolo diferenciados por tipo de servicio, con participación de autoridades especializadas, organizaciones de víctimas, sociedad civil, sector privado, academia y, en los asuntos que les afecten, niñas, niños y adolescentes. Los lineamientos establecerán indicadores objetivos, acumulativos y revisables. Ningún indicador basado exclusivamente en edad aparente, vestimenta, origen, color de piel, discapacidad, condición socioeconómica, situación migratoria, orientación sexual, identidad de género, composición familiar o actividad

	laboral será suficiente para reportar a una persona o restringirle derechos. Artículo 60 Quáter. Los establecimientos de hospedaje, servicios de transportación turística, agencias, operadores, guías, recintos, plataformas y demás prestadores deberán incorporar medidas razonables de prevención desde el diseño y operación de sus servicios, incluidas: I. Una política pública y visible de cero tolerancia a la trata y la explotación; II. Evaluación periódica de riesgos vinculados con su actividad, ubicación, canales de venta y relaciones comerciales; III. Capacitación para personal directivo y de primer contacto; IV. Mecanismos confidenciales de reporte y protección frente a represalias; V. Procedimientos de actuación inicial y canalización, y VI. Revisión de publicidad, contratación, intermediarios y relaciones comerciales para evitar que faciliten explotación. Artículo 60 Quinquies. Ante una posible situación de trata o explotación, el prestador deberá priorizar la seguridad de la persona y comunicar el hecho de inmediato a la autoridad competente. No podrá exigir narraciones detalladas o pruebas; informar a la persona presuntamente responsable; condicionar el auxilio a denuncia, pago, consumo o acreditación migratoria; ni divulgar información. Cuando exista duda razonable sobre la edad, se presumirá que la persona es menor de dieciocho años exclusivamente para efectos de protección inmediata, sin perjuicio de la determinación especializada posterior. Artículo 60 Sexies. Las plataformas digitales que intermedien o comercialicen servicios turísticos en territorio nacional deberán

	contar con mecanismos accesibles para reportar contenidos, perfiles u operaciones vinculadas con posible trata o explotación; preservar información conforme a requerimiento legal; responder oportunamente y colaborar con las autoridades competentes. Las medidas deberán respetar la libertad de expresión, la privacidad, la transparencia y el debido proceso. Artículo 60 Septies. La Secretaría coordinará acciones especiales en corredores de movilidad, destinos fronterizos, eventos de alta afluencia, temporadas vacacionales y servicios o zonas con riesgos identificados. Estas acciones no podrán utilizarse para realizar controles migratorios indiscriminados ni operativos que criminalicen a víctimas o grupos históricamente discriminados. Artículo 60 Octies. La Secretaría publicará anualmente información agregada sobre cumplimiento, capacitación, verificaciones, canalizaciones y sanciones. Queda prohibida la publicación de datos que permitan identificar a víctimas, denunciantes o personas menores de edad, o que comprometan investigaciones o medidas de protección.

Artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, y en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentar: I. ... II. La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad, orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la especialización del capital humano; III. a VI. ...	**Artículo 63.** Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, y en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentar: I. ... II. La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad, orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la especialización del capital humano, **incluyendo formación en derechos humanos, prevención de la trata y la explotación, protección integral de niñas, niños y adolescentes, indicadores objetivos de riesgo, actuación inicial, no revictimización, accesibilidad, interculturalidad y protección de datos personales;** III. a VI. ...

Artículo 66. Corresponde a la Secretaría verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Turismo. La Secretaría por sí o a través de los gobiernos locales y municipales, en términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan, ejecutará las órdenes de verificación a que haya lugar. Las visitas de verificación que efectúe la Secretaría, se regirán por esta Ley, su reglamento, así como por lo previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Las autoridades de turismo de los Estados, Municipios y de la Ciudad de México, deberán brindar apoyo a la Secretaría para que ejerza sus facultades de verificación en las demarcaciones territoriales que les correspondan. SIN CORRELATIVO.	**Artículo 66.** Corresponde a la Secretaría verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Turismo. La Secretaría por sí o a través de los gobiernos locales y municipales, en términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan, ejecutará las órdenes de verificación a que haya lugar. Las visitas de verificación que efectúe la Secretaría, se regirán por esta Ley, su reglamento, así como por lo previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Las autoridades de turismo de los Estados, Municipios y de la Ciudad de México, deberán brindar apoyo a la Secretaría para que ejerza sus facultades de verificación en las demarcaciones territoriales que les correspondan. **Para verificar las obligaciones previstas en el Capítulo III Bis, la Secretaría podrá utilizar modelos de riesgo objetivos, transparentes y revisables, vinculados con las características del servicio, antecedentes de incumplimiento, quejas, temporalidad y condiciones territoriales, sin emplear criterios discriminatorios ni perfiles basados exclusivamente en características personales.** **Cuando existan indicios objetivos de una posible situación de trata o explotación, la Secretaría coordinará la actuación con las autoridades competentes en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, trabajo, migración, seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y sin realizar funciones de investigación penal.**

Artículo 68. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, así como las derivadas de las quejas de los turistas, serán sancionadas por la Secretaría, para lo cual deberá iniciar y resolver el procedimiento administrativo de infracción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, su reglamento y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Tratándose de quejas que se deriven del incumplimiento de disposiciones establecidas en otras leyes de las que conozca la Secretaría, deberá turnarlas a la autoridad competente. Cuando derivado de una queja presentada por un turista ante la Procuraduría Federal del Consumidor, se detecte el probable incumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las disposiciones que de ella emanen, la Secretaría, podrá iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, así como requerir al prestador de servicios turísticos información que estime para esclarecer los hechos. SIN CORRELATIVO.	**Artículo 68.** Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, así como las derivadas de las quejas de los turistas, serán sancionadas por la Secretaría, para lo cual deberá iniciar y resolver el procedimiento administrativo de infracción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, su reglamento y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Tratándose de quejas que se deriven del incumplimiento de disposiciones establecidas en otras leyes de las que conozca la Secretaría, deberá turnarlas a la autoridad competente. Cuando derivado de una queja presentada por un turista ante la Procuraduría Federal del Consumidor, se detecte el probable incumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las disposiciones que de ella emanen, la Secretaría, podrá iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, así como requerir al prestador de servicios turísticos información que estime para esclarecer los hechos. **Cuando la Secretaría advierta hechos que pudieran constituir delito, dará vista inmediata al Ministerio Público y a las autoridades especializadas competentes, sin prejuzgar sobre responsabilidad y preservando la confidencialidad, los derechos de las víctimas y el debido proceso.**

SIN CORRELATIVO.	Artículo 70 Bis. Las infracciones a lo dispuesto en las fracciones VIII y XII a XVI del artículo 58 y en los artículos 60 Quáter, 60 Quinquies y 60 Sexies se sancionarán con multa de doscientas a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la infracción. Para su individualización se considerarán la gravedad, el riesgo creado, el daño causado, la intencionalidad, el beneficio obtenido, la reincidencia, la capacidad económica, el tamaño del prestador y las acciones de corrección adoptadas. Constituyen infracciones graves obstruir el auxilio; ocultar o destruir deliberadamente información requerida legalmente; advertir a la persona presuntamente responsable cuando ello ponga en riesgo a la posible víctima; ejercer represalias; divulgar datos de víctimas; o incumplir de manera reiterada las medidas correctivas ordenadas. En estos casos podrá imponerse, previo procedimiento con garantía de audiencia, la suspensión temporal del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Turismo o la clausura temporal hasta por treinta días. Las sanciones administrativas serán independientes de las responsabilidades civiles, penales o de otra naturaleza.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes **Artículo 47.** Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: I. y II. ... III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables; IV. a VIII. ...	**Artículo 47.** Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: I. y II. ... III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables, **incluidos los casos que ocurran o sean facilitados mediante servicios, establecimientos, plataformas, rutas, medios de transporte o destinos turísticos;** IV. a VIII. ...

SIN CORRELATIVO.	**Artículo 47 Bis. Quienes presten, intermedien o comercialicen servicios turísticos que, por su naturaleza, impliquen alojamiento, transportación, recreación, intermediación digital o contacto habitual con niñas, niños y adolescentes deberán adoptar medidas razonables y proporcionales de debida diligencia para prevenir impactos adversos en sus derechos. Estas medidas comprenderán evaluación de riesgos, protocolos, capacitación, mecanismos accesibles de aviso, protección de datos personales y cooperación con las Procuradurías de Protección y demás autoridades competentes.** **La obligación de aviso inmediato prevista en esta Ley no autoriza a los particulares a realizar investigaciones, retenciones, entrevistas forenses, confrontaciones ni actuaciones que puedan revictimizar. El auxilio no podrá condicionarse a la presentación de denuncia, a la identificación de responsables, al pago o a la acreditación de nacionalidad o situación migratoria.**
Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes: I. a IV. ... SIN CORRELATIVO.	**Artículo 105.** Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes: I. a IV. ... **Las personas físicas o morales que presten, intermedien o comercialicen servicios turísticos deberán, atendiendo a su tamaño, capacidad y nivel de riesgo, designar a una persona o unidad responsable del cumplimiento de las medidas de protección; establecer canales adaptados a la edad y accesibles; y conservar únicamente la información indispensable para proteger y canalizar a niñas, niños y adolescentes, de conformidad con la legislación en materia de protección de datos personales.**

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos	**Artículo 89.** Las instituciones integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones:
Artículo 89. Las instituciones integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones:	I. a VIII. ...
I. a VIII. ...	**IX. La Secretaría de Turismo diseñará y ejecutará, en coordinación con las autoridades competentes, políticas de prevención de los delitos previstos en esta Ley en destinos, corredores de movilidad, servicios, establecimientos, eventos y plataformas turísticas; emitirá lineamientos sectoriales de debida diligencia; promoverá modelos de riesgo objetivos y no discriminatorios; capacitará y verificará a los prestadores dentro del ámbito de sus atribuciones; incorporará mecanismos de cumplimiento vinculados con el Registro Nacional de Turismo; realizará campañas dentro y fuera del país; y generará información agregada para la evaluación de la política nacional;**
IX. La Secretaría de Turismo diseñará programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual, capacitando al personal de las áreas de servicio de dicho sector, así como diseñará e implementará campañas dentro y fuera del país para prevenir y desalentar la proliferación del delito previsto en esta Ley, en cualquier actividad relacionada a su ámbito de competencia;	X. a XV. ...
X. a XV. ...	

Artículo 92. La Comisión diseñará el proyecto del Programa Nacional, que definirá la Política del Estado Mexicano frente a los delitos previstos en esta Ley, que deberá contemplar, como mínimo, los siguientes rubros: I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y consecuencias y su comportamiento delictivo, así como los grupos afectados o en mayor grado de vulnerabilidad, así como las rutas y sitios más usuales para captar, trasladar y explotar a las personas; II. a X. ...	**Artículo 92.** La Comisión diseñará el proyecto del Programa Nacional, que definirá la Política del Estado Mexicano frente a los delitos previstos en esta Ley, que deberá contemplar, como mínimo, los siguientes rubros: **I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas, consecuencias y comportamiento de los delitos, de los grupos afectados o en mayor grado de vulnerabilidad y de las rutas y sitios más utilizados para captar, trasladar, alojar o explotar a las personas, considerando los contextos territoriales, digitales, laborales, turísticos, migratorios y de movilidad, con datos desagregados e indicadores basados en evidencia que no criminalicen la pobreza, la migración, el trabajo sexual, la adolescencia ni la diversidad familiar;** II. a X. ...

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 54; las fracciones VIII y XII del artículo 58; la fracción II del artículo 63; y se adicionan un Capítulo III Bis al Título Quinto, denominado "De la Prevención de la Trata y la Explotación en la Actividad Turística", con los artículos 60 Bis, 60 Ter, 60 Quáter, 60 Quinquies, 60 Sexies, 60 Septies y 60 Octies; las fracciones XIII, XIV, XV, XVI y XVII al artículo 58; los párrafos cuarto y quinto al artículo 66; un cuarto párrafo al artículo 68; y un artículo 70 Bis, todos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades, **y deberán observar las obligaciones de prevención, debida diligencia y actuación inicial previstas en esta Ley, así como las disposiciones aplicables en materia de trata de personas, protección integral de niñas, niños y adolescentes, protección de datos personales, igualdad y no discriminación.**

Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

I. a VII. ...

VIII. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación con la Secretaría, **incluida la capacitación inicial y periódica en derechos humanos, prevención de la trata y la explotación, protección integral de niñas, niños y adolescentes, indicadores objetivos de riesgo, actuación inicial, no revictimización y protección de datos personales;**

IX. a XI. ...

XII. Adoptar medidas de debida diligencia proporcionales a la naturaleza, tamaño, capacidad y nivel de riesgo de su actividad, que incluyan evaluación de riesgos, protocolos, mecanismos de reporte y salvaguardas de confidencialidad;

XIII. Comunicar de inmediato a la autoridad competente los hechos o indicadores objetivos y acumulativos que hagan presumir una situación de trata de personas, explotación sexual o laboral, o una vulneración grave de los derechos de niñas, niños o adolescentes, y adoptar medidas razonables para preservar la seguridad de la persona;

XIV. Preservar y entregar a la autoridad competente, cuando exista requerimiento legal o riesgo inminente, únicamente la información necesaria y disponible relacionada con el hecho, de conformidad con la legislación en materia de protección de datos personales y, cuando resulte aplicable, con las reglas de cadena de custodia;

XV. Abstenerse de ejercer represalias contra personas trabajadoras, usuarias o terceras que soliciten auxilio o reporten hechos de buena fe;

XVI. Abstenerse de realizar interrogatorios, entrevistas forenses, retenciones, revisiones corporales, confrontaciones, traslados contra la voluntad de la persona o cualquier actuación reservada a las autoridades, y

XVII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.

CAPÍTULO III BIS
DE LA PREVENCIÓN DE LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Artículo 60 Bis. La política turística incorporará la prevención de la trata de personas, la explotación sexual y laboral y cualquier otra forma de explotación que afecte a mujeres, adolescentes, niñas y niños, mediante debida diligencia, coordinación interinstitucional, diseño seguro de servicios, capacitación, información, verificación y evaluación.

Las medidas deberán ser proporcionales al riesgo y respetar la dignidad, privacidad, autonomía, igualdad, no discriminación, presunción de inocencia y no revictimización.

Artículo 60 Ter. La Secretaría emitirá lineamientos y modelos de protocolo diferenciados por tipo de servicio, con participación de autoridades especializadas, organizaciones de víctimas, sociedad civil, sector privado, academia y, en los asuntos que les afecten, niñas, niños y adolescentes.

Los lineamientos establecerán indicadores objetivos, acumulativos y revisables. Ningún indicador basado exclusivamente en edad aparente, vestimenta, origen, color de piel, discapacidad, condición socioeconómica, situación migratoria, orientación sexual, identidad de género, composición familiar o actividad laboral será suficiente para reportar a una persona o restringirle derechos.

Artículo 60 Quáter. Los establecimientos de hospedaje, servicios de transportación turística, agencias, operadores, guías, recintos, plataformas y demás prestadores deberán incorporar medidas razonables de prevención desde el diseño y operación de sus servicios, incluidas:

I. Una política pública y visible de cero tolerancia a la trata y la explotación;
II. Evaluación periódica de riesgos vinculados con su actividad, ubicación, canales de venta y relaciones comerciales;
III. Capacitación para personal directivo y de primer contacto;
IV. Mecanismos confidenciales de reporte y protección frente a represalias;
V. Procedimientos de actuación inicial y canalización, y
VI. Revisión de publicidad, contratación, intermediarios y relaciones comerciales para evitar que faciliten explotación.

Artículo 60 Quinquies. Ante una posible situación de trata o explotación, el prestador deberá priorizar la seguridad de la persona y comunicar el hecho de inmediato a la autoridad competente. No podrá exigir narraciones detalladas o pruebas; informar a la persona presuntamente responsable; condicionar el auxilio a denuncia, pago, consumo o acreditación migratoria; ni divulgar información.

Cuando exista duda razonable sobre la edad, se presumirá que la persona es menor de dieciocho años exclusivamente para efectos de protección inmediata, sin perjuicio de la determinación especializada posterior.

Artículo 60 Sexies. Las plataformas digitales que intermedien o comercialicen servicios turísticos en territorio nacional deberán contar con mecanismos accesibles para reportar contenidos, perfiles u operaciones vinculadas con posible trata o explotación; preservar información conforme a requerimiento legal; responder oportunamente y colaborar con las autoridades competentes. Las medidas deberán respetar la libertad de expresión, la privacidad, la transparencia y el debido proceso.

Artículo 60 Septies. La Secretaría coordinará acciones especiales en corredores de movilidad, destinos fronterizos, eventos de alta afluencia, temporadas vacacionales y servicios o zonas con riesgos identificados. Estas acciones no podrán utilizarse para realizar controles migratorios indiscriminados ni operativos que criminalicen a víctimas o grupos históricamente discriminados.

Artículo 60 Octies. La Secretaría publicará anualmente información agregada sobre cumplimiento, capacitación, verificaciones, canalizaciones y sanciones. Queda prohibida la publicación de datos que permitan identificar a víctimas, denunciantes o personas menores de edad, o que comprometan investigaciones o medidas de protección.

Artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, y en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentar:

I. ...

II. La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad, orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la especialización del capital humano, **incluyendo formación en derechos humanos, prevención de la trata y la explotación, protección integral de niñas, niños y adolescentes, indicadores objetivos de riesgo, actuación inicial, no revictimización, accesibilidad, interculturalidad y protección de datos personales;**

III. a VI. ...

Artículo 66. ...

Para verificar las obligaciones previstas en el Capítulo III Bis, la Secretaría podrá utilizar modelos de riesgo objetivos, transparentes y revisables, vinculados con las características del servicio, antecedentes de incumplimiento, quejas, temporalidad y condiciones territoriales, sin emplear criterios discriminatorios ni perfiles basados exclusivamente en características personales.

Cuando existan indicios objetivos de una posible situación de trata o explotación, la Secretaría coordinará la actuación con las autoridades competentes en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, trabajo, migración, seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y sin realizar funciones de investigación penal.

Artículo 68. ...

Cuando la Secretaría advierta hechos que pudieran constituir delito, dará vista inmediata al Ministerio Público y a las autoridades especializadas competentes, sin prejuzgar sobre responsabilidad y preservando la confidencialidad, los derechos de las víctimas y el debido proceso.

Artículo 70 Bis. Las infracciones a lo dispuesto en las fracciones VIII y XII a XVI del artículo 58 y en los artículos 60 Quáter, 60 Quinquies y 60 Sexies se sancionarán con multa de doscientas a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la infracción. Para su individualización se considerarán la gravedad, el riesgo creado, el daño causado, la intencionalidad, el beneficio obtenido, la reincidencia, la capacidad económica, el tamaño del prestador y las acciones de corrección adoptadas.

Constituyen infracciones graves obstruir el auxilio; ocultar o destruir deliberadamente información requerida legalmente; advertir a la persona presuntamente responsable cuando ello ponga en riesgo a la posible víctima; ejercer represalias; divulgar datos de víctimas; o

incumplir de manera reiterada las medidas correctivas ordenadas. En estos casos podrá imponerse, previo procedimiento con garantía de audiencia, la suspensión temporal del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Turismo o la clausura temporal hasta por treinta días.

Las sanciones administrativas serán independientes de las responsabilidades civiles, penales o de otra naturaleza.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción III del artículo 47; y se adicionan un artículo 47 Bis y un último párrafo al artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 47. ...

I. y II. ...

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables, **incluidos los casos que ocurran o sean facilitados mediante servicios, establecimientos, plataformas, rutas, medios de transporte o destinos turísticos;**

IV. a VIII. ...

Artículo 47 Bis. Quienes presten, intermedien o comercialicen servicios turísticos que, por su naturaleza, impliquen alojamiento, transportación, recreación, intermediación digital o contacto habitual con niñas, niños y adolescentes deberán adoptar medidas razonables y proporcionales de debida diligencia para prevenir impactos adversos en sus derechos. Estas medidas comprenderán evaluación de riesgos, protocolos, capacitación, mecanismos accesibles de aviso, protección de datos personales y cooperación con las Procuradurías de Protección y demás autoridades competentes.

La obligación de aviso inmediato prevista en esta Ley no autoriza a los particulares a realizar investigaciones, retenciones, entrevistas forenses, confrontaciones ni actuaciones que puedan revictimizar. El auxilio no podrá condicionarse a la presentación de denuncia, a la identificación de responsables, al pago o a la acreditación de nacionalidad o situación migratoria.

Artículo 105. ...

Las personas físicas o morales que presten, intermedien o comercialicen servicios turísticos deberán, atendiendo a su tamaño, capacidad y nivel de riesgo, designar a una persona o unidad responsable del cumplimiento de las medidas de protección; establecer canales adaptados a la edad y accesibles; y conservar únicamente la información indispensable para proteger y canalizar a niñas, niños y adolescentes, de conformidad con la legislación en materia de protección de datos personales.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman la fracción IX del artículo 89 y la fracción I del artículo 92 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:

Artículo 89. Las instituciones integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones:
I. a VIII. ...
IX. La Secretaría de Turismo diseñará **y ejecutará, en coordinación con las autoridades competentes, políticas de prevención de los delitos previstos en esta Ley en destinos, corredores de movilidad, servicios, establecimientos, eventos y plataformas turísticas; emitirá lineamientos sectoriales de debida diligencia; promoverá modelos de riesgo objetivos y no discriminatorios; capacitará y verificará a los prestadores dentro del ámbito de sus atribuciones; incorporará mecanismos de cumplimiento vinculados con el Registro Nacional de Turismo; realizará campañas dentro y fuera del país; y generará información agregada para la evaluación de la política nacional;**
X. a XV. ...

Artículo 92. La Comisión diseñará el proyecto del Programa Nacional, que definirá la Política del Estado Mexicano frente a los delitos previstos en esta Ley, que deberá contemplar, como mínimo, los siguientes rubros:

I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas, **consecuencias y comportamiento de los delitos, de los grupos afectados o en mayor grado de vulnerabilidad y de las rutas y sitios más utilizados para captar, trasladar, alojar o explotar a las personas, considerando los contextos territoriales, digitales, laborales, turísticos, migratorios y de movilidad, con datos desagregados e indicadores basados en evidencia que no criminalicen la pobreza, la migración, el trabajo sexual, la adolescencia ni la diversidad familiar;**

II. a X. ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría de Turismo, con participación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de las autoridades especializadas competentes, emitirá los lineamientos y modelos de protocolo previstos en este Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

TERCERO. El Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones reglamentarias y, en su caso, de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO. Los prestadores de servicios turísticos contarán con doce meses, contados a partir de la publicación de los lineamientos, para implementar las obligaciones previstas. La Secretaría expedirá instrumentos simplificados y programas gratuitos de capacitación para micro y pequeñas empresas.

QUINTO. La Comisión Intersecretarial y la Secretaría de Turismo incorporarán las disposiciones del presente Decreto en la siguiente actualización del Programa Nacional en materia de trata de personas, del Programa Sectorial de Turismo y de los instrumentos de coordinación correspondientes.

SEXTO. Las autoridades adecuarán sus mecanismos de información, canalización y seguimiento evitando la creación o duplicación de bases paralelas de datos personales de víctimas y observando los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad y confidencialidad.

SÉPTIMO. La Secretaría de Turismo y la Comisión Intersecretarial evaluarán la implementación del presente Decreto a los dieciocho meses de la emisión de los lineamientos y publicarán recomendaciones de mejora con datos agregados y salvaguardas de privacidad.

OCTAVO. La implementación se realizará con cargo a los presupuestos aprobados de las autoridades competentes, sin perjuicio de las previsiones progresivas que correspondan en ejercicios subsecuentes.

NOVENO. Las obligaciones administrativas previstas en este Decreto no podrán interpretarse como autorización para que particulares o autoridades turísticas ejerzan funciones de investigación penal, búsqueda, identificación de víctimas o persecución de delitos reservadas a las autoridades competentes, ni en perjuicio de los derechos y garantías de las personas imputadas.

DIP. TANIA PALACIOS KURI

Palacio Legislativo de San Lázaro. Septiembre de 2026.

Fuentes documentales y normativas

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917; texto vigente con últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026; artículos 1o., 4o., 20, 21, 73, fracción XXI, inciso a), y 133.

2. Decreto en materia de derechos humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

3. Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 constitucionales en materia de trata de personas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011.

4. Decreto en materia de interés superior de la niñez, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011.

5. Decreto constitucional en materia de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024.

6. Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009; texto vigente con última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025; artículos 54, 58, 59, 63, 66, 68, 69 y 70.

7. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014; texto vigente con última reforma publicada el 15 de enero de 2026; artículos 12, 46, 47, 103 y 105.

8. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012; texto vigente con última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025; artículos 2, 3, 4, 62, 65, 89, 90 y 92.

9. Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, el 15 de abril de 2025; Eje General 3, Objetivo 3.11 y Estrategia 3.11.4.

10. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada mediante resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 1979; especialmente artículos 2, 3, 5, 6 y 14.

11. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general núm. 38, CEDAW/C/GC/38, de 5 de noviembre de 2020.

12. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el décimo informe periódico de México, CEDAW/C/MEX/CO/10, de 10 de julio de 2025; párrafos 31 y 32.

13. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada mediante resolución 44/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989; artículos 2, 3, 12, 19, 32, 34, 35 y 36.

14. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, adoptado mediante resolución 54/263, de 25 de mayo de 2000.

15. Comité de los Derechos del Niño, Observación general núm. 14, CRC/C/GC/14, de 29 de mayo de 2013, y Observación general núm. 16, CRC/C/GC/16, de 17 de abril de 2013.

16. Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de México, CRC/C/MEX/CO/6-7, de 8 de octubre de 2024; párrafos 15, 18, 26 y 27.

17. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, adoptado mediante resolución 55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de noviembre de 2000; artículos 2, 3, 6, 9 y 10.

18. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, A/HRC/17/31, de 21 de marzo de 2011; resolución 17/4, de 16 de junio de 2011.

19. Organización Mundial del Turismo, Código Ético Mundial para el Turismo, resolución A/RES/406(XIII), de 1 de octubre de 1999; Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 56/212, de 21 de diciembre de 2001; artículo 2, numeral 3.

20. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C núm. 205.

21. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Véliz Franco y otros vs. Guatemala, sentencia de 19 de mayo de 2014, Serie C núm. 277.

22. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-21/14, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, de 19 de agosto de 2014.

23. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, sentencia de 20 de octubre de 2016, Serie C núm. 318.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VENTURA
DIPUTADO FEDERAL | DTTO 32

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE DETECCIÓN TEMPRANA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA PERMANENCIA ESCOLAR

El que suscribe, Luis Enrique Martínez Ventura, diputado a la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente **iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de detección temprana, acompañamiento y seguimiento para la permanencia escolar**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación constituye el principal instrumento de movilidad social, desarrollo humano y fortalecimiento democrático de una nación. A través de ella, el Estado no sólo transmite conocimientos, sino que forma ciudadanos capaces de ejercer plenamente sus derechos, participar en la vida pública, incorporarse al desarrollo económico y contribuir a la construcción de comunidades más seguras, productivas y cohesionadas. Por ello, el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la educación como un derecho humano que debe impartirse con base en los principios de universalidad, inclusión, equidad y excelencia.

Sin embargo, el verdadero cumplimiento de este derecho no se agota con abrir las puertas de una escuela o garantizar un espacio en un aula. El derecho a la educación sólo puede considerarse plenamente protegido cuando las niñas, niños,

Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.
Septiembre 14 de 2026.

adolescentes y jóvenes tienen condiciones reales para ingresar, permanecer, aprender y concluir oportunamente sus estudios.

En este contexto, uno de los mayores desafíos que enfrenta el Sistema Educativo Nacional continúa siendo el abandono escolar, fenómeno que representa una de las expresiones más graves de desigualdad social, ya que rompe las trayectorias educativas, limita las oportunidades de desarrollo individual, incrementa la vulnerabilidad económica y profundiza los ciclos intergeneracionales de pobreza y exclusión.

El abandono escolar no constituye únicamente una estadística educativa. Detrás de cada estudiante que deja la escuela existe una historia marcada por dificultades económicas, problemas familiares, rezago académico, violencia, trabajo infantil, problemas de salud física o mental, embarazo adolescente, discapacidad, adicciones o múltiples factores sociales que, al acumularse, terminan por excluir al estudiante del sistema educativo.

Diversos organismos nacionales e internacionales coinciden en que el abandono escolar no ocurre de manera repentina. Por el contrario, representa un proceso gradual que suele estar precedido por señales claramente identificables, tales como ausencias reiteradas, disminución del rendimiento académico, cambios en el comportamiento, pérdida de interés por las actividades escolares o dificultades familiares y económicas. (UNICEF)

Precisamente por ello, las políticas públicas más exitosas en materia educativa han dejado de concentrarse exclusivamente en atender a quienes ya abandonaron la escuela y han evolucionado hacia modelos preventivos de identificación temprana y acompañamiento permanente.

México ha realizado importantes esfuerzos para ampliar la cobertura educativa durante las últimas décadas. La expansión de la infraestructura escolar, la gratuidad de la educación obligatoria, la implementación de diversos programas de becas y la creación de nuevos modelos educativos han permitido incrementar significativamente el acceso a los distintos niveles de enseñanza.

Asimismo, es justo reconocer que durante los últimos años se han impulsado acciones relevantes para reducir el abandono escolar, particularmente en la educación media superior. De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, el índice de abandono en ese nivel disminuyó de 14.5 % en 2018 a 8.7 % en el ciclo escolar 2022-2023 como resultado de diversas políticas educativas y de apoyo económico dirigidas a la población estudiantil.

No obstante, las cifras más recientes del propio Sistema Educativo Nacional muestran que el abandono escolar continúa representando uno de los principales retos estructurales del país. Los indicadores oficiales de la SEP reportan una tasa de abandono cercana al 11 % en la educación media superior durante el ciclo escolar 2023-2024, manteniéndose como el nivel educativo con mayor riesgo de deserción.

Más allá de las variaciones metodológicas entre ciclos escolares, los datos reflejan una realidad incuestionable: miles de jóvenes continúan abandonando sus estudios cada año antes de concluir su formación media superior.

La magnitud del problema adquiere una dimensión aún más preocupante cuando se analizan las trayectorias educativas completas. UNICEF señala que solamente 56 de cada 100 niñas y niños que ingresan a la educación primaria logran concluir la educación media superior sin repetir grados ni abandonar la escuela, lo que evidencia importantes pérdidas acumuladas a lo largo del sistema educativo.

De igual manera, este organismo internacional estima que más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes en México actualmente no asisten a la escuela, mientras que aproximadamente 600 mil se encuentran en riesgo de abandonarla, situación que compromete seriamente el desarrollo del capital humano del país.

El abandono escolar tampoco afecta por igual a toda la población. Las probabilidades de abandonar los estudios aumentan considerablemente entre quienes viven en condiciones de pobreza, pertenecen a comunidades indígenas, habitan zonas rurales, presentan alguna discapacidad, enfrentan contextos de

violencia o requieren incorporarse tempranamente al mercado laboral para contribuir al ingreso familiar.

UNICEF advierte que apenas cuatro de cada diez adolescentes que viven en pobreza extrema continúan estudiando después de concluir la secundaria, lo que demuestra que la desigualdad económica continúa siendo uno de los principales determinantes de la permanencia escolar.

No obstante, reducir el abandono escolar exclusivamente a una causa económica implicaría simplificar un fenómeno considerablemente más complejo.

Las investigaciones desarrolladas por organismos especializados coinciden en que el abandono escolar responde a una combinación de factores personales, familiares, escolares, económicos y comunitarios que interactúan entre sí. En muchos casos, el problema inicia con rezagos académicos, dificultades emocionales o conflictos familiares que posteriormente derivan en ausencias recurrentes, pérdida de motivación y, finalmente, en la desvinculación definitiva del sistema educativo.

Esta realidad obliga a replantear el enfoque tradicional mediante el cual se ha intentado atender el fenómeno.

Durante años, la respuesta institucional se ha concentrado principalmente en ampliar la cobertura educativa y fortalecer programas de apoyo económico, particularmente mediante becas. Sin embargo, aun reconociendo la importancia de estas políticas, la evidencia demuestra que los incentivos económicos, por sí solos, no son suficientes para atender todas las causas que originan el abandono escolar.

Un estudiante que deja de asistir debido a violencia familiar difícilmente resolverá su situación únicamente mediante un apoyo económico. Lo mismo ocurre con quien presenta depresión, enfrenta acoso escolar, desarrolla rezagos importantes de aprendizaje o necesita trabajar para sostener a su familia.

Cada una de estas circunstancias requiere respuestas diferenciadas, oportunas y coordinadas.

Es precisamente aquí donde la presente iniciativa identifica un vacío normativo que aún persiste dentro de la Ley General de Educación.

La legislación vigente establece obligaciones generales para garantizar el derecho a la educación, promover la equidad, favorecer la inclusión y reducir el abandono escolar. Sin embargo, no existe una disposición expresa que obligue a cada institución educativa a identificar oportunamente a los estudiantes en riesgo, intervenir de manera preventiva, documentar las acciones realizadas y dar seguimiento institucional hasta verificar su permanencia o, en su caso, gestionar su reincorporación.

En términos prácticos, ello significa que, aunque muchas escuelas desarrollan buenas prácticas de acompañamiento gracias al compromiso de sus directivos y docentes, tales acciones dependen en gran medida de la voluntad institucional, de la experiencia del personal o de los recursos disponibles, más que de un mandato legal uniforme y obligatorio.

En consecuencia, dos estudiantes con condiciones de riesgo similares pueden recibir respuestas completamente distintas dependiendo del plantel en el que estudien.

Ese vacío normativo genera desigualdad en la protección del derecho a la educación y limita la capacidad preventiva del propio sistema educativo.

La presente iniciativa parte de una premisa sencilla pero profundamente transformadora: el abandono escolar rara vez ocurre de un día para otro; generalmente anuncia su llegada mediante señales que la escuela observa antes que cualquier otra institución del Estado.

Por ello, si la escuela es el primer espacio donde esas señales aparecen, también debe convertirse en el primer espacio donde el Estado actúe de manera obligatoria, organizada y documentada para evitar que esas trayectorias educativas se interrumpan.

La presente iniciativa no parte de la premisa de que el Estado mexicano carezca de políticas públicas para combatir el abandono escolar. Por el contrario, reconoce los avances logrados mediante la ampliación de la cobertura educativa, la implementación de programas de becas, los esquemas de tutoría académica, la educación inclusiva y las diversas estrategias impulsadas por la Federación y las entidades federativas para favorecer la permanencia de las y los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional.

Sin embargo, el análisis de la evidencia demuestra que el problema no radica exclusivamente en la existencia o inexistencia de programas públicos, sino en la ausencia de un deber jurídico específico de actuación para las instituciones educativas cuando comienzan a manifestarse los primeros indicadores de riesgo.

Actualmente, una escuela puede advertir que un estudiante acumula inasistencias, disminuye significativamente su rendimiento académico, presenta cambios de conducta, enfrenta problemas familiares o expresa la intención de abandonar sus estudios y, aun así, la legislación no establece un procedimiento mínimo obligatorio que determine qué acciones institucionales deben realizarse, quién debe ejecutarlas, en qué plazo deben efectuarse y cómo debe verificarse su seguimiento.

Esta omisión normativa provoca que la atención dependa, en gran medida, de la sensibilidad, experiencia o capacidad organizativa de cada plantel educativo. Mientras algunas escuelas implementan mecanismos ejemplares de acompañamiento, otras carecen de procedimientos definidos, generando una protección desigual del derecho humano a la educación.

Desde la perspectiva constitucional, esta situación resulta particularmente relevante. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no solamente reconoce el acceso a la educación, sino que impone al Estado la obligación de garantizar una educación obligatoria, inclusiva, equitativa y de excelencia. Dicho mandato constitucional debe interpretarse conforme al artículo 1° de la propia Constitución, que incorpora el principio de progresividad de los

derechos humanos y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos utilizando el máximo de los recursos disponibles.

En ese sentido, el derecho a la educación no puede entenderse como un acto administrativo consistente únicamente en permitir la inscripción de un estudiante. Su contenido esencial comprende la permanencia efectiva dentro del sistema educativo y la posibilidad real de concluir oportunamente los estudios.

Esta interpretación ha sido sostenida de manera consistente por organismos internacionales especializados. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, mediante la Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación, establece que este derecho comprende cuatro elementos fundamentales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Este último exige que los sistemas educativos respondan oportunamente a las necesidades cambiantes de los estudiantes y adopten medidas que eviten su exclusión. Asimismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, compromete a los Estados a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. La permanencia escolar constituye un componente indispensable para alcanzar esa meta.

Bajo esta lógica, la iniciativa propone transitar de un modelo predominantemente reactivo hacia un modelo preventivo de protección del derecho a la educación.

Actualmente, buena parte de las acciones institucionales se activan una vez que el estudiante ha abandonado la escuela. En ese momento, las posibilidades de reincorporación disminuyen considerablemente y el costo económico y social para el Estado aumenta de forma significativa. La evidencia internacional demuestra que las intervenciones preventivas, realizadas durante las primeras manifestaciones de riesgo, son considerablemente más eficaces y menos costosas que las estrategias de recuperación posteriores.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que incrementar la permanencia escolar genera beneficios económicos

sostenidos al elevar la productividad, fortalecer la empleabilidad, aumentar la recaudación fiscal y reducir los costos asociados al desempleo, la dependencia de programas asistenciales y diversos fenómenos de exclusión social. Paralelamente, la UNESCO ha documentado que cada año adicional de escolaridad incrementa las oportunidades de inserción laboral formal y mejora las condiciones generales de bienestar de las personas y sus familias.

Los beneficios sociales son igualmente significativos. Diversas investigaciones internacionales han identificado una estrecha relación entre la permanencia educativa y la reducción de factores asociados con violencia, delincuencia juvenil, embarazos adolescentes, trabajo infantil, consumo de sustancias psicoactivas y pobreza intergeneracional. La escuela representa, para millones de niñas, niños y adolescentes, el principal espacio de protección institucional fuera del ámbito familiar. Cada estudiante que permanece en las aulas fortalece no solamente su proyecto de vida, sino también el tejido social de su comunidad.

Por ello, la presente reforma incorpora un principio rector de enorme trascendencia: la obligación institucional de actuar antes de que ocurra el abandono escolar.

Esta obligación no pretende trasladar a las escuelas responsabilidades que corresponden exclusivamente a otras autoridades. Tampoco busca convertir a las instituciones educativas en centros de atención médica, psicológica o asistencial. Por el contrario, reconoce que la función primordial del plantel consiste en identificar oportunamente las señales de riesgo, generar un primer acercamiento con el estudiante, establecer comunicación con su familia cuando corresponda, elaborar un plan básico de acompañamiento, canalizar el caso hacia las instancias competentes cuando exceda sus capacidades y realizar un seguimiento razonable hasta verificar la continuidad de la trayectoria educativa.

En consecuencia, la obligación propuesta constituye una obligación de debida diligencia institucional, no una obligación de resultado absoluto. Ninguna escuela puede garantizar, por sí sola, que todos los estudiantes permanezcan en el sistema educativo frente a circunstancias tan complejas como la pobreza extrema, la

violencia familiar, la migración, el desplazamiento forzado o enfermedades graves. Lo que sí puede y debe garantizar el Estado es que ninguna institución permanezca pasiva frente a señales evidentes de riesgo.

Este enfoque resulta jurídicamente equilibrado, financieramente responsable y administrativamente viable.

A diferencia de otras propuestas legislativas que implican la creación de nuevas estructuras burocráticas, organismos especializados o sistemas nacionales con elevados requerimientos presupuestales, la presente iniciativa aprovecha la estructura institucional ya existente. Directores, subdirectores, docentes, tutores, orientadores educativos y trabajadores sociales constituyen recursos humanos que actualmente desarrollan funciones de acompañamiento en numerosos planteles. La reforma únicamente dota de certeza jurídica, uniformidad y obligatoriedad a esas prácticas, respetando las capacidades organizacionales de cada institución.

Por ello, el impacto presupuestario esperado resulta limitado y razonable, ya que la propuesta no crea plazas obligatorias, no establece nuevas dependencias administrativas ni genera programas federales adicionales. Su principal objetivo consiste en fortalecer la capacidad preventiva del Sistema Educativo Nacional mediante la incorporación de procedimientos mínimos de actuación que permitan una intervención temprana y coordinada.

Desde la perspectiva legislativa, la propuesta también fortalece el principio de seguridad jurídica. Al establecer expresamente las etapas mínimas de identificación, intervención, acompañamiento, canalización y seguimiento, se proporciona certeza tanto a las autoridades educativas como a las familias y a los propios estudiantes respecto de las acciones que deben emprenderse cuando exista riesgo de abandono escolar.

Adicionalmente, la iniciativa contribuye al fortalecimiento de la rendición de cuentas. El seguimiento documentado permitirá generar información objetiva sobre las principales causas del abandono escolar en cada contexto educativo, evaluar la eficacia de las estrategias implementadas y orientar con mayor precisión la

formulación de futuras políticas públicas basadas en evidencia. La producción sistemática de información fortalecerá la capacidad del Estado para diseñar intervenciones focalizadas, optimizar la asignación de recursos públicos y medir los resultados obtenidos.

Debe enfatizarse que la presente reforma tampoco pretende sustituir los programas de becas, alimentación escolar, apoyo socioemocional o inclusión educativa actualmente existentes. Por el contrario, busca articularlos de manera más eficiente. Una intervención temprana permitirá identificar con mayor oportunidad qué estudiantes requieren acceder a esos apoyos y facilitará su vinculación con los programas gubernamentales correspondientes. De esta manera, la iniciativa fortalece las políticas públicas vigentes sin duplicarlas ni generar nuevas cargas administrativas innecesarias.

En términos políticos, esta reforma representa una respuesta responsable a una de las principales preocupaciones de millones de familias mexicanas: asegurar que sus hijas e hijos no abandonen la escuela por causas que pudieron identificarse y atenderse oportunamente. Constituye una propuesta que trasciende diferencias ideológicas, pues coloca en el centro el interés superior de la niñez y de la juventud, fortalece el derecho humano a la educación y contribuye a consolidar un sistema educativo más cercano, más sensible y más comprometido con las trayectorias escolares de cada estudiante.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no requieren únicamente escuelas abiertas; requieren instituciones que permanezcan atentas a sus necesidades, que detecten oportunamente las señales de riesgo y que actúen con responsabilidad antes de que el abandono escolar se convierta en una realidad irreversible.

En una nación que aspira a construir mayores niveles de bienestar, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible, la permanencia escolar no puede depender del esfuerzo aislado de un docente comprometido o de la buena voluntad de un director. Debe convertirse en una obligación institucional claramente definida por la ley.

Porque cada estudiante que permanece en las aulas representa una oportunidad para transformar su vida, fortalecer a su familia, impulsar el desarrollo económico y consolidar una sociedad más justa; pero también porque cada estudiante que abandona la escuela constituye un llamado de atención para el Estado mexicano y un recordatorio de que aún existen desafíos pendientes para hacer plenamente efectivo el derecho constitucional a la educación.

Por las razones anteriormente expuestas, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, convencidos de que fortalecer la permanencia escolar mediante mecanismos institucionales de detección temprana, acompañamiento y seguimiento representa una reforma viable, jurídicamente sólida, socialmente necesaria y profundamente congruente con el compromiso del Estado mexicano de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de excelencia para todas y todos.

Para el Partido del Trabajo, garantizar el derecho a la educación significa no solamente asegurar que niñas, niños y adolescentes ingresen a una escuela, sino generar las condiciones necesarias para que puedan permanecer, aprender y concluir sus estudios.

El abandono escolar profundiza la desigualdad, limita las oportunidades de desarrollo y afecta con mayor intensidad a quienes enfrentan pobreza, violencia, rezago académico, problemas familiares y otras condiciones de vulnerabilidad. Por ello, el Estado no puede esperar a que una estudiante o un estudiante abandone definitivamente las aulas para intervenir.

Desde el Partido del Trabajo respaldamos una política educativa preventiva, cercana y socialmente responsable, que permita identificar oportunamente las señales de riesgo y obligue a las instituciones educativas a acompañar, canalizar y dar seguimiento a quienes puedan interrumpir su trayectoria escolar.

Esta reforma no crea nueva burocracia ni sustituye las políticas de becas y apoyos existentes; las fortalece mediante mecanismos institucionales que permiten actuar antes de que el abandono ocurra.

Para el Partido del Trabajo, la permanencia escolar es una condición indispensable para construir igualdad de oportunidades y hacer efectivo el derecho constitucional a la educación. Ninguna niña, niño o adolescente debe quedar fuera de la escuela cuando el Estado pudo identificar oportunamente el riesgo y actuar para evitarlo.

En congruencia con los argumentos expuestos y con el propósito de traducir este planteamiento en disposiciones jurídicas claras, operativas y coordinadas, la presente iniciativa propone reformas puntuales a la Ley General de Educación y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las modificaciones planteadas buscan fortalecer la detección temprana, el acompañamiento, la canalización y el seguimiento de estudiantes en riesgo de abandono escolar, aprovechando las estructuras institucionales existentes y evitando duplicidades normativas o cargas administrativas innecesarias. Para apreciar con claridad el alcance de cada modificación, a continuación, se presenta el cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, favoreciendo la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones: I. a XII. ... XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Sin correlativo. Sin correlativo.	**Artículo 9.** Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, favoreciendo la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones: I. a XII. ... XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia; **XIV. Establecer, en los planteles de educación básica y media superior, mecanismos institucionales para la detección temprana de educandos en riesgo de abandono escolar, así como para su acompañamiento, canalización y seguimiento, con el objeto de favorecer su permanencia y continuidad educativa.**

	Los mecanismos a que se refiere la fracción anterior se implementarán conforme a los lineamientos que emita la autoridad educativa competente, atendiendo a las características y capacidades de cada plantel y procurando el aprovechamiento de las estructuras y recursos institucionales existentes.
Artículo 107. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán una Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, el cual será un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios educativos. Su elaboración se apegará a las disposiciones y lineamientos de carácter general que emita la Secretaría. En dicha Guía se establecerán los elementos de normalidad mínima de la operación escolar, cuyo objetivo es dar a conocer las normas y los procedimientos institucionales y, con ello, facilitar la toma de decisiones para fortalecer la mejora escolar.	**Artículo 107.** Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán una Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, el cual será un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios educativos. Su elaboración se apegará a las disposiciones y lineamientos de carácter general que emita la Secretaría. En dicha Guía se establecerán los elementos de normalidad mínima de la operación escolar, **así como los procedimientos para la detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de educandos en riesgo de abandono escolar**, con el objeto de dar a conocer las normas y los procedimientos institucionales y, con ello, facilitar la toma de decisiones para fortalecer la mejora escolar **y favorecer la permanencia y continuidad educativa**.
Artículo 109. Cada Consejo Técnico Escolar contará con un Comité de Planeación y Evaluación, el cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dicho programa tendrá un carácter plurianual, definirá objetivos y metas, los cuales serán evaluados por el referido Comité.	**Artículo 109.** Cada Consejo Técnico Escolar contará con un Comité de Planeación y Evaluación, el cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, **las acciones para favorecer la permanencia y continuidad educativa**, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dicho programa tendrá un carácter plurianual, definirá objetivos y metas, los cuales serán evaluados por el referido Comité. **En materia de permanencia escolar, el Comité evaluará los resultados de las acciones implementadas por el plantel, a partir de la información disponible sobre asistencia, aprovechamiento académico y abandono escolar, con el objeto de identificar áreas de mejora.**

	... ...
Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: **I. a XIV. ...** XV. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica y media superior para el fortalecimiento de las capacidades de administración escolar; **Sin correlativo.** **XVI. a XXI. ...** XXII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.	**Artículo 113.** Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: **I. a XIV. ...** **XV.** Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica y media superior para el fortalecimiento de las capacidades de administración escolar; **XVI. Emitir los lineamientos generales de carácter nacional para la implementación de los mecanismos institucionales de detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de educandos en riesgo de abandono escolar en la educación básica y media superior;** **XVII. a XXII. ...** **XXIII.** Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: **I.** ... **II.** Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar que emita la Secretaría; **III. a XIV.** ... XV. Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación que prestan en términos de esta Ley; **XVI. y XVII.** ...	**Artículo 114.** Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: **I.** ... **II.** Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar **y con los lineamientos generales de carácter nacional para la implementación de los mecanismos institucionales de detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de educandos en riesgo de abandono escolar que emita la Secretaría;** **III. a XIV.** ... **XV.** Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación que prestan en términos de esta Ley, **incorporando los procedimientos para la implementación de los mecanismos institucionales de detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de educandos en riesgo de abandono escolar, de conformidad con los lineamientos generales que emita la Secretaría;** **XVI. y XVII.** ...

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	
TEXTO VIGENTE	**PROPUESTA DE MODIFICACIÓN**
Artículo 57. ... ... **I. a XXII.** ... **XXIII.** Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos. Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de la Ley, con independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos conforme a la normatividad en la materia. Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	**Artículo 57.** ... ... **I. a XXII.** ... **XXIII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen las acciones previstas en la legislación educativa para la detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de niñas, niños y adolescentes en riesgo de abandono escolar, y notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente cuando se advierta una posible restricción o vulneración de sus derechos, cuando la situación identificada exceda el ámbito de actuación del centro educativo o cuando, pese a las acciones implementadas, persista el riesgo de abandono escolar.** **Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la presente Ley y, en su caso, la activación de las instancias competentes necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.** **Cuando de los hechos se advierta un riesgo para la vida, integridad, seguridad o cualquier otra posible vulneración grave de derechos de niñas, niños o adolescentes, la notificación a la autoridad competente deberá realizarse de manera inmediata, sin que sea necesario agotar previamente las acciones de carácter educativo previstas en esta fracción, con independencia de las responsabilidades que resulten procedentes conforme a las disposiciones aplicables.** Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente: **DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE DETECCIÓN TEMPRANA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA PERMANENCIA ESCOLAR**

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma la fracción XIII y se adicionan una fracción XIV y un último párrafo al artículo 9; se reforma el segundo párrafo del artículo 107; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 109; se adiciona una fracción XVI al artículo 113, recorriéndose en su orden las actuales fracciones XVI a XXII para quedar como fracciones XVII a XXIII; y se reforman las fracciones II y XV del artículo 114, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. a XII. ...

XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia;

XIV. Establecer, en los planteles de educación básica y media superior, mecanismos institucionales para la detección temprana de educandos en riesgo de abandono escolar, así como para su acompañamiento, canalización y seguimiento, con el objeto de favorecer su permanencia y continuidad educativa.

Los mecanismos a que se refiere la fracción anterior se implementarán conforme a los lineamientos que emita la autoridad educativa competente, atendiendo a las características y capacidades de cada plantel y procurando el aprovechamiento de las estructuras y recursos institucionales existentes.

Artículo 107. ...

Su elaboración se apegará a las disposiciones y lineamientos de carácter general que emita la Secretaría. En dicha Guía se establecerán los elementos de normalidad mínima de la operación escolar, ***así como los procedimientos para la detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de educandos en riesgo de abandono escolar,*** *con el objeto de dar a conocer las normas y los procedimientos institucionales y, con ello, facilitar la toma de decisiones para fortalecer la mejora escolar* ***y favorecer la permanencia y continuidad educativa.***

Artículo 109. *Cada Consejo Técnico Escolar contará con un Comité de Planeación y Evaluación, el cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico,* ***las acciones para favorecer la permanencia y continuidad educativa,*** *el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales.*

Dicho programa tendrá un carácter plurianual, definirá objetivos y metas, los cuales serán evaluados por el referido Comité. ***En materia de permanencia escolar, el Comité evaluará los resultados de las acciones implementadas por el plantel, a partir de la información disponible sobre asistencia, aprovechamiento académico y abandono escolar, con el objeto de identificar áreas de mejora.***

...

...

Artículo 113. *Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:*

I. a XV. ...

XVI. Emitir los lineamientos generales de carácter nacional para la implementación de los mecanismos institucionales de detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de educandos en riesgo de abandono escolar en la educación básica y media superior;

XVII. a XXII. ...

XXIII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 114. *Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:*

I. ...

II. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar ***y con los lineamientos generales de carácter nacional para la implementación de los mecanismos institucionales de detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de educandos en riesgo de abandono escolar que emita la Secretaría;***

III. a XIV. ...

XV. Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación que prestan en términos de esta Ley, ***incorporando los procedimientos para la implementación de los mecanismos institucionales de detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de educandos en riesgo de abandono escolar, de conformidad con los lineamientos generales que emita la Secretaría;***

XVI. y XVII. ...

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma la fracción XXIII del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 57. ...

...

...

I. a XXII. ...

XXIII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, ***en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen las acciones previstas en la legislación educativa para la detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de niñas, niños y adolescentes en riesgo de abandono escolar, y notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente cuando se advierta una posible restricción o vulneración de sus derechos, cuando la situación identificada exceda el ámbito de actuación del centro educativo o cuando, pese a las acciones implementadas, persista el riesgo de abandono escolar.***

Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la presente Ley y, en su caso, la activación de las instancias ***competentes necesarias*** *para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.*

Cuando de los hechos se advierta un riesgo para la vida, integridad, seguridad o cualquier otra posible vulneración grave de derechos de niñas, niños o adolescentes, la notificación a la autoridad competente deberá realizarse de manera inmediata, sin que sea necesario agotar previamente las acciones de carácter educativo previstas en esta fracción, con independencia de las responsabilidades que resulten procedentes conforme a las disposiciones aplicables.

Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública deberá emitir o, en su caso, adecuar los lineamientos generales de carácter nacional necesarios para la implementación de los mecanismos institucionales de detección temprana, acompañamiento, canalización y seguimiento de educandos en riesgo de abandono escolar, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Las autoridades educativas de las entidades federativas y de la Ciudad de México deberán realizar las adecuaciones correspondientes a sus Guías Operativas para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la emisión de los lineamientos a que se refiere el artículo transitorio anterior.

Cuarto. La implementación de las disposiciones previstas en el presente Decreto se realizará con cargo a los recursos humanos, materiales y presupuestarios aprobados para las autoridades educativas correspondientes, procurando el aprovechamiento de las estructuras institucionales existentes y sin que implique, por sí misma, la creación obligatoria de nuevas plazas, unidades administrativas u órganos especializados.

Quinto. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para garantizar que los mecanismos previstos en el presente Decreto se implementen con respeto a los principios de interés superior de la niñez, igualdad sustantiva, inclusión, no discriminación y protección de datos personales, conforme a las disposiciones aplicables.

Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al decimocuarto día del mes de septiembre del año dos mil veintiséis.

ATENTAMENTE

Diputado Luis Enrique Martínez Ventura

P.O. 7497/CC/26

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VENTURA
DIPUTADO FEDERAL | DTTO 32

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA REINCIDENCIA DELICTIVA.

El que suscribe, Luis Enrique Martínez Ventura, diputado a la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente **iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de prevención de la reincidencia delictiva**, al tenor de la siguiente:

Turnese a la Comisión de Justicia para dictamen. Septiembre 14 de 2026.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La seguridad pública constituye uno de los fines esenciales del Estado mexicano y una condición indispensable para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la paz social y el desarrollo económico. En un Estado democrático de derecho, la política criminal no puede limitarse exclusivamente a la investigación de los delitos, la persecución de los responsables y la imposición de sanciones penales. Su eficacia debe medirse por su capacidad para prevenir nuevas conductas delictivas, reducir los factores que favorecen su repetición y proteger de manera permanente a la sociedad. Cada delito que logra evitarse representa una víctima menos, una familia que no sufre las consecuencias de la violencia y recursos públicos que pueden destinarse a fortalecer otras funciones prioritarias del Estado. Por ello, el verdadero éxito del sistema de justicia penal no radica únicamente en castigar al responsable, sino en impedir que vuelva a delinquir.

Desde esta perspectiva, la ejecución de las penas privativas de la libertad no constituye el punto final del sistema de justicia penal, sino una etapa decisiva para alcanzar los objetivos constitucionales de seguridad pública. El encarcelamiento

cumple una función de sanción, pero por sí mismo no garantiza que una persona abandone los factores que originaron su conducta delictiva ni que, al recuperar su libertad, cuente con las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto de vida dentro de la legalidad. Si el Estado concentra todos sus esfuerzos en la imposición de la pena y desatiende el proceso de reincorporación a la sociedad, existe el riesgo de que la privación de la libertad se convierta únicamente en una medida temporal de contención, sin incidir de manera efectiva en la prevención de futuros delitos.

Esta visión responde directamente al mandato previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. El texto constitucional es claro al establecer que la reinserción social no constituye una medida asistencial ni un beneficio discrecional otorgado por el Estado, sino una finalidad esencial del sistema penitenciario orientada a fortalecer la seguridad pública mediante la disminución de la reincidencia delictiva.

En consecuencia, la reinserción social no debe analizarse desde una perspectiva centrada exclusivamente en la persona sentenciada. Su principal beneficiaria es la sociedad. Cada persona que logra reincorporarse exitosamente a la vida comunitaria representa una menor probabilidad de que se produzca un nuevo delito; cada persona que encuentra una alternativa lícita de desarrollo reduce el riesgo de generar nuevas víctimas; y cada proceso exitoso de reintegración fortalece la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Por el contrario, cuando una persona recupera su libertad sin haber consolidado un proceso efectivo de reinserción, aumenta la posibilidad de que persistan los factores que favorecieron la conducta delictiva y, con ello, los riesgos para la seguridad colectiva.

La magnitud del sistema penitenciario mexicano demuestra que este desafío trasciende el ámbito de la ejecución penal. De acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios Estatales y Federal 2025, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2024 existían 236,773 personas privadas de la libertad o internadas en los centros penitenciarios y especializados del país, de las cuales 235,312 correspondían a personas adultas. Estas cifras reflejan que el sistema penitenciario administra una población considerable cuya reincorporación a la sociedad representa un desafío permanente para las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia.

Cada una de estas personas representa una importante inversión de recursos públicos destinados a la investigación del delito, la procuración e impartición de justicia, la defensa pública, la operación del sistema penitenciario y la ejecución de la pena. Cuando una persona vuelve a delinquir después de recuperar su libertad, el Estado enfrenta nuevamente el costo económico y humano que implica investigar un nuevo delito, procesar judicialmente al responsable y atender a nuevas víctimas. La reincidencia, por tanto, no solo constituye un problema de seguridad pública, sino también un problema de eficiencia institucional y de sostenibilidad del gasto público. Diversos estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han señalado que los programas de reintegración social bien estructurados generan beneficios públicos superiores a su costo al disminuir la probabilidad de reincidencia y reducir la presión sobre los sistemas policial, judicial y penitenciario.

No obstante, la recuperación de la libertad no implica, por sí misma, una integración efectiva a la vida comunitaria. La libertad jurídica pone fin a la ejecución de la pena, pero no elimina automáticamente los factores personales, familiares, sociales y económicos que dificultan la reincorporación a la legalidad. Muchas personas egresan de los centros penitenciarios enfrentando obstáculos para acceder al empleo formal, recuperar documentos de identidad, acreditar las capacidades adquiridas durante el internamiento, continuar tratamientos médicos o psicológicos, reconstruir vínculos familiares o incorporarse nuevamente a procesos educativos.

Estas circunstancias no justifican la comisión de un nuevo delito ni disminuyen la responsabilidad individual de quien lo cometa; sin embargo, ignorarlas significa desconocer factores ampliamente identificados por la evidencia criminológica como elementos que pueden influir en la reincidencia.

La realidad de la población penitenciaria mexicana confirma esta situación. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, elaborada por el INEGI, muestra que la mayoría de las personas privadas de la libertad pertenece a población en edad económicamente activa y presenta niveles de escolaridad predominantemente de educación básica, así como trayectorias laborales marcadas por la informalidad y la precariedad económica antes de su ingreso a prisión. Asimismo, la encuesta revela que 20.5 % de las personas privadas de la libertad declaró haber sido juzgada anteriormente por algún delito, mientras que 17.4 % manifestó haber estado recluida previamente en un centro penitenciario. Aunque estas cifras no constituyen una tasa oficial de reincidencia, sí evidencian que una proporción significativa de la población penitenciaria ya había tenido contacto previo con el sistema penal, lo que confirma la necesidad de fortalecer las políticas orientadas a evitar la repetición delictiva.

La información disponible también permite advertir que la reincidencia no puede explicarse mediante una sola causa. Las investigaciones desarrolladas por la UNODC y la evidencia internacional coinciden en que este fenómeno responde a la interacción de múltiples factores, entre ellos el nivel educativo, la estabilidad laboral, el entorno familiar, la salud mental, el consumo problemático de sustancias, las habilidades para la resolución de conflictos y la existencia de redes sociales de apoyo. Ello significa que la prevención de la reincidencia no puede depender exclusivamente del tiempo que una persona permanezca privada de la libertad, sino de la capacidad del Estado para identificar, atender y reducir aquellos factores dinámicos que incrementan el riesgo de que vuelva a cometer un delito.

Precisamente por ello, el objetivo de la presente iniciativa no consiste en crear un régimen de beneficios especiales para las personas que han cumplido una condena.

Por el contrario, parte de un principio de responsabilidad institucional y de igualdad jurídica. La reinserción social no puede convertirse en un mecanismo que otorgue ventajas preferenciales frente a otros sectores vulnerables de la población. Las personas liberadas no deben recibir prioridad en el acceso a programas sociales, empleo, vivienda o cualquier otro beneficio público por el solo hecho de haber estado privadas de la libertad. Lo que corresponde al Estado es establecer mecanismos técnicos que permitan valorar la trayectoria observada durante el internamiento, los avances alcanzados, las necesidades particulares de intervención y los factores de riesgo y de protección presentes en cada caso. Estos elementos no constituirán requisitos automáticos de acceso ni criterios de exclusión, sino insumos para determinar la modalidad, intensidad y duración del acompañamiento postpenitenciario que, en su caso, resulte necesario para favorecer la continuidad de la reinserción social y prevenir la reincidencia.

Bajo esta lógica, la reinserción social deja de concebirse como una política dirigida a favorecer exclusivamente a quien cumplió una pena y se convierte en una herramienta estratégica para prevenir nuevos delitos, optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la seguridad de la población. La discusión legislativa ya no debe centrarse en si el Estado debe o no intervenir después de la liberación de una persona sentenciada; la verdadera cuestión consiste en determinar cómo debe hacerlo, bajo qué criterios, mediante qué mecanismos de evaluación y con qué límites, para garantizar que esa intervención contribuya efectivamente a reducir la reincidencia sin generar privilegios indebidos ni afectar los derechos de las víctimas.

La evolución del sistema penitenciario mexicano demuestra que la concepción de la ejecución penal ha transitado de un modelo orientado exclusivamente al cumplimiento de la sanción hacia uno que reconoce la necesidad de preparar el retorno de la persona sentenciada a la vida en sociedad. Este cambio quedó plasmado en la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008, mediante la cual el Constituyente Permanente sustituyó el concepto de readaptación social

por el de reinserción social, modificando de manera sustancial la finalidad del sistema penitenciario.

Dicha transformación no respondió únicamente a un cambio terminológico. Representó el abandono de un paradigma que concebía al Estado como responsable de modificar la personalidad de las personas privadas de la libertad, para adoptar un modelo compatible con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos, en el que la función estatal consiste en generar condiciones que favorezcan una reincorporación responsable a la sociedad mediante el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. El propósito de este modelo no es conceder beneficios extraordinarios, sino disminuir la probabilidad de que quienes han cumplido una sentencia vuelvan a delinquir y, con ello, fortalecer la seguridad pública.

Este enfoque encuentra respaldo en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), las cuales establecen que la finalidad de la prisión consiste en proteger a la sociedad mediante la reducción de la reincidencia y la preparación de las personas privadas de la libertad para su reintegración social. En el mismo sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha sostenido que los programas de reintegración obtienen mejores resultados cuando inician durante el internamiento y continúan después de la liberación mediante procesos de seguimiento, evaluación y acompañamiento individualizados. La evidencia internacional coincide en que las estrategias más eficaces son aquellas que identifican los factores de riesgo y las necesidades específicas de cada persona, en lugar de aplicar mecanismos generales o uniformes.

El orden jurídico mexicano ha incorporado parcialmente esta visión. La Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente desde 2016, reconoce la importancia de los servicios postpenales y establece, en su artículo 207, que las autoridades corresponsables deberán promover centros de atención y redes de apoyo para las personas liberadas y sus familias, con el propósito de facilitar su reinserción social, procurar

una vida digna y prevenir la reincidencia. Este reconocimiento constituye un avance significativo, pues admite que el proceso de reinserción no concluye con la liberación de la persona sentenciada, sino que requiere mecanismos de continuidad para consolidar los resultados obtenidos durante la ejecución de la pena.

No obstante, la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de dicha legislación evidencia que el marco jurídico vigente resulta insuficiente para garantizar una política nacional de reinserción social eficaz y homogénea. Si bien la Ley establece objetivos generales, no desarrolla los instrumentos técnicos indispensables para hacerlos efectivos. La legislación no determina criterios uniformes para evaluar la buena conducta, valorar los cambios positivos observados durante el internamiento, identificar factores de riesgo de reincidencia, integrar equipos interdisciplinarios de evaluación o medir los resultados obtenidos por los programas postpenitenciarios.

Como consecuencia, la aplicación de estos servicios depende, en gran medida, de las capacidades institucionales de cada entidad federativa, de la disponibilidad presupuestaria, de la infraestructura existente y de los criterios administrativos adoptados por las autoridades responsables. Esta situación genera diferencias importantes entre los sistemas penitenciarios del país y provoca que las oportunidades de reinserción social varíen de manera considerable, aun cuando el mandato constitucional sea el mismo para toda la República.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de sus Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, ha documentado reiteradamente que persisten diferencias relevantes entre las entidades federativas respecto a las condiciones materiales, la oferta educativa, las oportunidades laborales, la atención médica, los programas de capacitación y las acciones orientadas a favorecer la reinserción social. Estas disparidades reflejan que el acceso a procesos efectivos de preparación para la vida en libertad continúa dependiendo, en buena medida, de la capacidad operativa de cada centro penitenciario y no de estándares nacionales homogéneos.

Esta realidad también pone de manifiesto otra limitación estructural: actualmente el Estado mexicano carece de un sistema nacional que permita evaluar objetivamente la eficacia de las acciones de reinserción social. Las instituciones conocen el número de personas que participan en determinadas actividades educativas, laborales, deportivas o culturales; sin embargo, existe escasa información sobre los resultados concretos que dichas intervenciones producen una vez que la persona recupera su libertad. No es posible determinar con precisión cuáles programas generan mayores probabilidades de inserción laboral, continuidad educativa, estabilidad familiar o disminución del riesgo de reincidencia, ni identificar qué factores explican el éxito o fracaso de las distintas estrategias implementadas.

Esta ausencia de indicadores limita la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Ninguna política de seguridad pública puede mejorar si carece de mecanismos que permitan medir sus resultados, corregir sus deficiencias y orientar los recursos hacia las intervenciones que demuestren mayor eficacia. La reinserción social no debe ser la excepción. Por el contrario, al tratarse de un componente esencial de la política criminal, requiere instrumentos de evaluación objetivos, verificables y técnicamente sustentados.

En este contexto, resulta indispensable distinguir entre la existencia de programas de reinserción y la eficacia de dichos programas. El problema que enfrenta actualmente el sistema penitenciario mexicano no radica en la ausencia absoluta de servicios postpenales, sino en la falta de un modelo nacional que establezca criterios homogéneos para determinar quiénes pueden acceder a un acompañamiento especializado, bajo qué condiciones debe realizarse la evaluación, qué autoridades serán responsables de emitir los dictámenes correspondientes y cuáles serán los indicadores mediante los cuales deberá medirse el impacto de las intervenciones implementadas.

a presente iniciativa parte precisamente de esa necesidad. Su propósito no es sustituir el modelo constitucional vigente, crear una estructura burocrática adicional ni ampliar indiscriminadamente los beneficios para las personas que han cumplido

una condena. Busca dotar al sistema de ejecución penal de herramientas técnicas que permitan identificar las necesidades particulares de intervención, valorar los factores de riesgo modificables y fortalecer los factores de protección relacionados con la continuidad de la reinserción social.

La conducta observada durante el internamiento, el cumplimiento y aprovechamiento del Plan de Actividades, los cambios positivos verificables y los resultados de la evaluación interdisciplinaria constituirán elementos de valoración integral. No serán requisitos para recuperar la libertad ni criterios automáticos para excluir a una persona de los servicios postpenitenciarios. Su función será orientar la modalidad, intensidad, contenido y duración del acompañamiento individualizado que resulte pertinente en cada caso.

La identificación de factores de riesgo tampoco implicará una declaración de peligrosidad ni justificará restricciones adicionales o la prolongación de la pena. Por el contrario, permitirá dirigir las acciones institucionales hacia aquellos factores susceptibles de atención que puedan incidir en la reincidencia, al tiempo que se fortalecen las capacidades personales, familiares y comunitarias de la persona.

Los servicios generales de orientación, información y canalización institucional estarán disponibles para las personas egresadas y externadas que los soliciten, conforme a las capacidades institucionales. El acompañamiento individualizado se implementará cuando la evaluación interdisciplinaria determine una necesidad concreta de intervención especializada.

La participación en los servicios postpenitenciarios no generará beneficios preferenciales frente a otros sectores de la población. La admisión, permanencia y conclusión en programas públicos de empleo, educación, salud, capacitación o desarrollo social se sujetará a la legislación aplicable, a sus reglas de operación, a la disponibilidad institucional y presupuestaria y a los criterios ordinarios establecidos para la población destinataria.

Asimismo, la propuesta incorpora como principio rector la protección integral de las víctimas. Ninguna acción derivada de los programas postpenitenciarios podrá

traducirse en la disminución de las obligaciones impuestas por la sentencia, en la afectación de medidas de protección o en la vulneración de los derechos reconocidos por la legislación vigente. La reinserción social y la protección de las víctimas no son objetivos contrapuestos; por el contrario, constituyen componentes complementarios de una política de seguridad pública orientada a prevenir nuevos delitos y evitar que otras personas resulten afectadas.

En consecuencia, la intervención legislativa que se propone encuentra plena justificación en la necesidad de fortalecer el cumplimiento del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando al sistema penitenciario de mecanismos de evaluación, seguimiento y medición de resultados que actualmente no existen de manera uniforme. La reforma permitirá transitar de un modelo centrado principalmente en la prestación de servicios hacia un sistema basado en evidencia, en el que las decisiones se sustenten en criterios objetivos, la actuación institucional pueda ser evaluada y los recursos públicos se orienten a las intervenciones con mayor capacidad para reducir la reincidencia.

En síntesis, el reto que enfrenta el Estado mexicano ya no consiste en decidir si debe existir una política de reinserción social, pues tanto la Constitución como la Ley Nacional de Ejecución Penal reconocen expresamente esa obligación. El verdadero desafío consiste en construir un modelo capaz de demostrar resultados, garantizar la igualdad, proteger a las víctimas y fortalecer la seguridad pública mediante procesos de reinserción técnicamente evaluados, transparentes y eficaces.

Por ello, la presente iniciativa propone perfeccionar el marco jurídico vigente mediante la incorporación de criterios nacionales de evaluación, seguimiento y coordinación institucional que permitan consolidar una política de reinserción social postpenitenciaria compatible con los principios constitucionales, sustentada en evidencia científica y orientada, por encima de cualquier otra consideración, a reducir la reincidencia delictiva y proteger de manera efectiva a la sociedad mexicana.

Precisamente porque el problema identificado no radica en la inexistencia de programas de reinserción social, sino en la ausencia de mecanismos técnicos que permitan evaluar objetivamente su eficacia, homologar su aplicación y orientar los recursos públicos hacia las intervenciones con mayor capacidad preventiva, la presente iniciativa propone fortalecer el marco jurídico vigente mediante un modelo nacional de reinserción social postpenitenciaria sustentado en criterios de objetividad, responsabilidad institucional, igualdad jurídica y protección de la sociedad.

La reforma parte de una premisa elemental: no todas las personas que cumplen una pena privativa de la libertad se encuentran en las mismas condiciones para iniciar un proceso exitoso de reincorporación social. Las trayectorias personales, el comportamiento observado durante el internamiento, el aprovechamiento de las oportunidades de capacitación, la participación en actividades educativas, laborales o terapéuticas, la existencia de redes familiares de apoyo y las condiciones psicológicas y sociales de cada individuo son factores que difieren sustancialmente entre una persona y otra. En consecuencia, un sistema que pretenda otorgar el mismo tratamiento a todos los casos, sin distinguir circunstancias ni niveles de riesgo, difícilmente podrá cumplir de manera eficiente la finalidad preventiva prevista por el artículo 18 constitucional.

Por esa razón, la iniciativa propone sustituir un modelo basado principalmente en criterios generales por un esquema sustentado en evaluaciones técnicas, integrales e individualizadas. El propósito no consiste en restringir derechos, establecer nuevos requisitos para recuperar la libertad ni seleccionar a las personas con base en apreciaciones morales o subjetivas. Se busca contar con información objetiva que permita determinar las necesidades, características y nivel de intervención requerido en cada caso.

Dentro de esta valoración, la conducta observada durante el internamiento constituirá uno de los elementos que permitan conocer la trayectoria institucional de la persona. Su análisis no se limitará a la ausencia de sanciones disciplinarias, sino

que considerará el respeto a las normas de convivencia, el cumplimiento de las obligaciones institucionales y la participación en las actividades efectivamente disponibles.

La conducta institucional no se entenderá como un requisito para obtener la libertad, como una certificación de rehabilitación ni como una condición automática para acceder a los servicios generales postpenitenciarios. Será únicamente un insumo técnico que deberá interpretarse conjuntamente con las demás circunstancias personales, familiares, sociales y comunitarias.

De igual manera, podrán valorarse los cambios positivos verificables durante el internamiento, reflejados en el aprovechamiento de actividades educativas, laborales, de capacitación, atención psicológica, tratamiento de adicciones u otras acciones dirigidas a fortalecer las capacidades personales y sociales. Lo relevante no será la participación formal por sí misma, sino la existencia de avances objetivos que permitan identificar capacidades adquiridas, necesidades pendientes y factores susceptibles de atención.

La reforma reconoce que el Estado no puede atribuir a la persona el incumplimiento de actividades o la ausencia de avances cuando éstos deriven de programas inexistentes, insuficientes o inaccesibles dentro del Centro Penitenciario. En consecuencia, toda valoración deberá considerar las oportunidades efectivamente brindadas, evitando que las diferencias de infraestructura, presupuesto o capacidad operativa entre los centros generen condiciones desiguales.

Como complemento de estos elementos, la iniciativa incorpora una evaluación interdisciplinaria orientada a identificar necesidades de intervención, factores de riesgo modificables y factores de protección. Su finalidad no será predecir de manera absoluta la conducta futura, declarar la peligrosidad de la persona ni determinar si merece recibir apoyo, sino proporcionar información técnica para definir la modalidad, intensidad y duración del acompañamiento individualizado.

La evaluación será realizada por personal profesional de las áreas pertinentes, conforme a las necesidades y circunstancias de cada caso. Cuando la autoridad no

disponga del personal especializado requerido, podrá solicitar la colaboración de instituciones públicas, académicas u organizaciones de la sociedad civil, a través de los mecanismos de coordinación y convenios aplicables.

Las evaluaciones psicométricas, criminológicas o de cualquier otra naturaleza constituirán elementos de apoyo, pero no podrán utilizarse de manera aislada. Sus resultados deberán interpretarse conjuntamente con la trayectoria institucional, las condiciones personales, familiares y sociales, los factores de protección y las oportunidades efectivamente brindadas durante el internamiento.

La identificación de un mayor número de factores de riesgo no será motivo automático para negar los servicios generales ni para imponer restricciones posteriores al cumplimiento de la pena. Podrá justificar, cuando exista consentimiento de la persona egresada, una intervención de mayor intensidad orientada a atender los factores modificables identificados y fortalecer las condiciones que favorezcan su integración social.

La función del Estado consistirá exclusivamente en facilitar la coordinación institucional, proporcionar orientación, canalización institucional y seguimiento, orientar a las personas respecto de los servicios disponibles y brindar acompañamiento técnico cuando ello resulte necesario para consolidar un proceso efectivo de reinserción. De esta manera, la reforma evita generar privilegios indebidos y preserva el principio de igualdad frente a otros grupos que también enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, la iniciativa incorpora la protección de las víctimas como un eje transversal del modelo propuesto. Ninguna medida derivada de los programas postpenitenciarios podrá modificar las obligaciones impuestas por la sentencia, afectar la reparación del daño, alterar medidas de protección o disminuir los derechos reconocidos a las víctimas por el orden jurídico mexicano. Toda actuación institucional deberá observar el principio de no revictimización y privilegiar, en todo momento, la protección de la integridad y la seguridad de quienes fueron afectados por la conducta delictiva.

Otro aspecto esencial de la reforma consiste en fortalecer la capacidad del Estado para evaluar el desempeño de sus propias políticas públicas. Actualmente resulta posible conocer cuántas personas participan en determinadas actividades penitenciarias; sin embargo, existe escasa información respecto de los resultados obtenidos una vez que recuperan su libertad. Esta iniciativa propone incorporar mecanismos permanentes de seguimiento e indicadores homogéneos que permitan medir la eficacia de las intervenciones implementadas, identificar buenas prácticas, corregir deficiencias y orientar los recursos públicos hacia aquellas estrategias que acrediten mejores resultados.

La generación de información confiable permitirá que la política de reinserción social evolucione de manera permanente, dejando de depender de percepciones o decisiones aisladas para sustentarse en evidencia verificable. Ello fortalecerá la transparencia, facilitará la rendición de cuentas y contribuirá a una mejor planeación de las acciones institucionales.

Desde la perspectiva presupuestaria, la propuesta tampoco implica la creación de una estructura administrativa paralela ni la implementación de programas extraordinarios que representen una carga desproporcionada para las finanzas públicas. La iniciativa aprovecha las instituciones existentes y fortalece los mecanismos de coordinación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Su principal innovación consiste en incorporar procedimientos homogéneos de evaluación, seguimiento y medición de resultados, optimizando las capacidades institucionales ya disponibles.

La reforma fortalece igualmente la seguridad jurídica al establecer criterios claros para la actuación de las autoridades competentes. La definición de requisitos objetivos, procedimientos de evaluación y responsabilidades institucionales reduce significativamente los espacios de discrecionalidad y brinda mayor certeza tanto a las personas sujetas a los programas como a las autoridades encargadas de su aplicación.

En consecuencia, la presente iniciativa no modifica la esencia del sistema de reinserción social previsto por la Constitución; lo perfecciona. Sustituye un modelo predominantemente orientado a la prestación de servicios por otro basado en evidencia, evaluación técnica y mejora continua. Al hacerlo, fortalece la capacidad preventiva del Estado, optimiza el uso de los recursos públicos, protege los derechos de las víctimas y garantiza que la intervención institucional responda a criterios objetivos, transparentes y verificables.

Por todo lo anterior, se considera plenamente justificada la reforma propuesta, al dotar al sistema nacional de ejecución penal de herramientas que permitan hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, el Estado mexicano avanzará hacia un modelo de reinserción social más objetivo, responsable y eficiente, cuyo propósito central no será otorgar beneficios a quienes han cumplido una condena, sino reducir la reincidencia delictiva, fortalecer la seguridad pública y proteger de manera permanente a la sociedad.

Para el Partido del Trabajo, una política de seguridad eficaz debe prevenir la reincidencia y proteger a la comunidad, no limitarse al cumplimiento de la pena. Esta iniciativa no crea privilegios ni apoyos preferentes. Fortalece la coordinación institucional para dar continuidad a la reinserción social mediante intervenciones temporales, individualizadas y evaluables, respetando los derechos de las víctimas y las reglas ordinarias de los programas públicos.

La reinserción social efectiva es una responsabilidad del Estado y una herramienta para evitar nuevos delitos, reducir riesgos y construir comunidades más seguras. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Con el propósito de exponer con claridad el alcance de la presente iniciativa, las disposiciones vigentes y las modificaciones propuestas se presentan en la siguiente

tabla comparativa, en la que se identifican puntualmente las reformas y adiciones planteadas a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: **I a XXVII.- ...** **No existe.** **No existe.** **No existe.** **No existe.** **No existe.**	**Artículo 3.** Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: I. a XXVII. ... **XXVIII. Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado: Al conjunto temporal, voluntario y coordinado de acciones de orientación, canalización, vinculación y seguimiento, diseñado conforme a las necesidades, capacidades y circunstancias particulares de la persona egresada, con la finalidad de favorecer la continuidad de su proceso de reinserción social y contribuir a la prevención de la reincidencia delictiva, sin que constituya una prolongación de la pena, una medida de seguridad o un régimen de beneficios preferenciales;** **XXIX. Evaluación Interdisciplinaria: Al proceso técnico e individualizado realizado por un equipo interdisciplinario, mediante el cual se valoran integralmente la trayectoria institucional, la conducta observada durante el internamiento, el cumplimiento y aprovechamiento del Plan de Actividades, las condiciones personales, familiares, sociales,**

	laborales, educativas y de salud, así como los factores de riesgo y de protección, con el propósito de determinar las necesidades y el nivel de intervención requerido para favorecer la reinserción social; XXX. Factores de Protección: A las condiciones personales, familiares, sociales, educativas, laborales, comunitarias o institucionales que fortalecen la integración de la persona a la vida en sociedad y contribuyen a disminuir el riesgo de reincidencia delictiva; XXXI. Factores de Riesgo: A las condiciones personales, familiares, sociales, educativas, laborales, económicas, de salud o comunitarias que, conforme a una evaluación interdisciplinaria sustentada en instrumentos técnicamente validados, se asocian con una mayor probabilidad de reincidencia delictiva y son susceptibles de modificación o atención mediante intervenciones individualizadas; XXXII. Persona Externada: A la persona sentenciada que continúa el cumplimiento de una pena, beneficio, condición o medida de ejecución penal fuera de un Centro Penitenciario, conforme a resolución emitida por autoridad competente, y

	XXXIII. Persona Egresada: A la persona que ha recuperado su libertad por cumplimiento o extinción de la pena privativa de libertad y que ya no se encuentra sujeta a condiciones de ejecución penal, en los términos previstos por esta Ley.
Artículo 7. Articulación interinstitucional. ... Son autoridades corresponsables para el cumplimiento de esta Ley, las Secretarías de Gobernación, de **Desarrollo Social**, de Economía, de Educación Pública, de Cultura, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas y la Ciudad de México, así como las demás que por la naturaleza de sus atribuciones deban intervenir en el cumplimiento de la presente Ley. Encabezada por la Secretaría de Gobernación o su equivalente en las entidades federativas, se establecerán comisiones intersecretariales que incluirán a todas las autoridades corresponsables establecidas en esta Ley a nivel federal y en cada entidad federativa. Adicionalmente serán las encargadas de diseñar e implementar los distintos programas de servicios para la reinserción al interior de los Centros Penitenciarios y de servicios post-penales a nivel federal y estatal. Las autoridades corresponsables en las entidades federativas establecerán su propia comisión a fin de cumplir con los mismos fines a nivel local.	Artículo 7. Articulación interinstitucional ... Son autoridades corresponsables para el cumplimiento de esta Ley, las Secretarías de Gobernación, de **Bienestar**, de Economía, de Educación Pública, de Cultura, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas y la Ciudad de México, así como las demás **autoridades** que, por la naturaleza de sus atribuciones, deban intervenir en el cumplimiento de la presente Ley. Encabezada**s** por la Secretaría de Gobernación o su equivalente en las entidades federativas, se establecerán **Comisiones Intersecretariales integradas** por todas las autoridades corresponsables **previstas** en esta Ley, las cuales tendrán por objeto coordinar, planear, articular y dar seguimiento a las acciones institucionales necesarias para el cumplimiento de la política de reinserción social y de los servicios postpenitenciarios. **Asimismo, las Comisiones Intersecretariales serán responsables de promover la coordinación entre las**

La Autoridad Penitenciaria y las autoridades corresponsables podrán implementar mecanismos de participación y firmar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de diseñar, implementar o brindar servicios en internamiento o de naturaleza post-penal. **No existe.**	**autoridades competentes para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de** los programas de **reinserción social desarrollados** al interior de los Centros Penitenciarios y de los servicios **postpenitenciarios previstos** en esta Ley. **Para tal efecto, podrán promover mecanismos homologados de coordinación institucional, impulsar esquemas de colaboración interinstitucional y proponer indicadores para la evaluación de resultados, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a cada autoridad conforme a la legislación aplicable.** Las autoridades corresponsables en las entidades federativas establecerán **sus respectivas Comisiones para el cumplimiento de estos fines en el ámbito de su competencia.** La Autoridad Penitenciaria y las autoridades corresponsables podrán implementar mecanismos de participación y **celebrar** convenios de colaboración con **instituciones públicas,** organizaciones de la sociedad civil, **instituciones académicas, organismos internacionales y los sectores social y privado, para diseñar, fortalecer, implementar o evaluar programas de reinserción social y servicios postpenitenciarios, observando los límites y salvaguardas establecidos en el artículo 214 de esta Ley.** **Las Comisiones Intersecretariales promoverán la coordinación técnica entre las autoridades corresponsables para fortalecer la continuidad de los procesos de reinserción social de las personas**

	egresadas, impulsar la mejora continua de los servicios postpenitenciarios, promover la evaluación periódica de sus resultados y elaborar un informe anual sobre el desempeño general de las acciones implementadas, conforme a los indicadores previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Articulo 18.- Funciones del Comité **El Comité tendrá las funciones siguientes:** **I. a II.** ... **III.** Diseñar con participación de la persona interna, autorizar y evaluar los planes de actividades; **IV. a V.** ... **VI.** Informar a la persona sentenciada de la posibilidad de acceder a las medidas de libertad condicional y de libertad anticipada en cuanto dicha circunstancia se verifique. **No existe.** Las formalidades para la celebración de sesiones del Comité Técnico se regirán por las disposiciones aplicables de los Centros Penitenciarios.	**Artículo 18.** Funciones del Comité El Comité tendrá las funciones siguientes: I. a II. ... III. Diseñar con participación de la persona **privada de la libertad**, autorizar, **dar seguimiento y evaluar periódicamente el Plan de Actividades, documentando los avances, el cumplimiento de sus objetivos, los cambios positivos observados durante el internamiento y las oportunidades efectivamente brindadas por el Centro Penitenciario para el desarrollo del proceso de reinserción social**; IV. a V. ... VI. Informar a la persona sentenciada de la posibilidad de acceder a las medidas de libertad condicional y de libertad anticipada en cuanto dicha circunstancia se verifique; **VII. Integrar, previo al egreso de la persona sentenciada, un Informe Integral de Evolución para la Reinserción Social, en el que se documenten la trayectoria observada durante el internamiento, el grado de cumplimiento del Plan de Actividades, la participación en programas educativos, laborales, deportivos, culturales, de salud o de atención especializada, así como los**

	demás elementos objetivos que resulten relevantes para la continuidad del proceso de reinserción social. Dicho informe constituirá un insumo técnico para la elaboración del Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado, en los términos previstos por esta Ley. ...
Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad ... **I. a II.** ... **III. El expediente de ejecución contendrá, al menos:** **A. a Q.** ... **R.** Sanciones y beneficios obtenidos; **S.** Información sobre cónyuge, o pareja, familiares directos, así como dependientes económicos, incluyendo su lugar de residencia, origen y/o arraigo, y **T.** Plan de actividades; **No existe.** **No existe.** **No existe.** **No existe.** **No existe.** **No existe.** **IV. a V. ...** **No existe.**	Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad ... **I. a II.** ... **III. El expediente de ejecución contendrá, al menos:** **A. a Q.** ... **R.** Sanciones y beneficios obtenidos; **S.** Información sobre cónyuge o pareja, familiares directos, así como dependientes económicos, incluyendo su lugar de residencia, origen o arraigo; **T. Plan de Actividades y sus evaluaciones periódicas, incluyendo los objetivos establecidos, las actividades disponibles, el grado de participación y aprovechamiento, los avances observados y, en su caso, las causas que hayan impedido su cumplimiento;** **U. Informe Integral de Evolución para la Reinserción Social elaborado por el Comité Técnico, en términos del artículo 18 de esta Ley;** **V. Constancias, certificados o documentos que acrediten los estudios, la capacitación, las competencias laborales y las actividades formativas realizadas durante el internamiento;**

	W. Información relativa a tratamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos o de atención a las adicciones que requieran continuidad después del egreso, exclusivamente cuando resulte necesaria para garantizar la continuidad de la atención y con observancia de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales; X. Registro de las necesidades identificadas para la preparación del egreso, incluyendo documentación de identidad, continuidad educativa, vinculación laboral, atención a la salud y redes familiares o comunitarias de apoyo; Y. Constancia de que la persona sentenciada recibió información clara, accesible y suficiente sobre los servicios postpenitenciarios disponibles, así como, en su caso, su consentimiento libre e informado para participar en el acompañamiento postpenitenciario individualizado, y Z. Los demás documentos estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del proceso de reinserción social y la adecuada prestación de los servicios postpenitenciarios, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. IV. a V. ... La información incorporada al expediente de ejecución con motivo de la preparación para el egreso y de los servicios postpenitenciarios tendrá carácter confidencial y únicamente podrá ser consultada o transferida por las autoridades

	competentes para las finalidades expresamente previstas en esta Ley. Su tratamiento deberá observar los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, minimización, seguridad y temporalidad establecidos en la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.
Artículo 29. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria El Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria compartirá los registros administrativos, derivados de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que por su naturaleza estadística sean requeridos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el adecuado desarrollo de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, así como de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. Para el caso de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, el Instituto recolectará y publicará los datos estadísticos sobre infraestructura y recursos con los que cuentan los sistemas penitenciarios en el ámbito federal y local para ejercer sus funciones, en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. El Instituto recabará también información estadística sobre características demográficas, socioeconómicas y familiares de la población penitenciaria, así como de su situación jurídica. De igual forma, el Instituto recabará la información sobre los delitos y	Artículo 29. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria El Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria compartirá los registros administrativos derivados de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, **por su naturaleza estadística, sean requeridos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el adecuado desarrollo de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario,** así como de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. **Asimismo, el Sistema podrá proporcionar, a solicitud del Instituto y conforme a los criterios técnicos aplicables, información agregada sobre los programas de reinserción social, la preparación para el egreso y los servicios postpenitenciarios previstos en esta Ley.** Para el caso de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, el Instituto recolectará y publicará los datos estadísticos sobre infraestructura y recursos con los que cuentan los sistemas penitenciarios en el ámbito federal y local para ejercer sus funciones, en el marco del Subsistema Nacional de Información de

penalidad por los cuales son ingresadas las personas y recolectará información sobre las víctimas de los delitos por los cuales fueron sujetos a proceso, entre otras cosas. Por su parte, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad tendrá como finalidad generar información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las Personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será de tipo probabilística, incluirá a población privada de la libertad tanto del fuero común como federal y será representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha Encuesta conforme a su presupuesto. Asimismo, los Centros Penitenciarios seleccionados en la muestra determinada para la Encuesta deberán brindar todas las facilidades al Instituto para realizar entrevistas directas a la población privada de la libertad. **No existe.** **No existe.** **No existe.**	Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. El Instituto recabará también información estadística sobre características demográficas, socioeconómicas y familiares de la población penitenciaria, así como de su situación jurídica. De igual forma, el Instituto recabará **información sobre los delitos y las penas por los cuales ingresan las personas, así como sobre las víctimas de los delitos por los que fueron sujetas a proceso, entre otros aspectos, conforme a sus atribuciones, criterios técnicos y disponibilidad presupuestaria**. ... **Las autoridades penitenciarias y las autoridades corresponsables deberán generar, integrar y proporcionar información estadística agregada sobre los programas de reinserción social, el cumplimiento de los Planes de Actividades, la preparación para el egreso y los servicios postpenitenciarios, de conformidad con los criterios técnicos y mecanismos de coordinación aplicables.** **La información deberá permitir conocer, al menos, la cobertura, modalidad, duración, continuidad, conclusión y resultados generales de las acciones implementadas, sin contener datos que permitan identificar directa o indirectamente a las personas participantes.** **Para la evaluación de los servicios postpenitenciarios podrán considerarse indicadores relacionados con documentación de identidad, continuidad educativa, capacitación, vinculación laboral,**

	atención a la salud física y mental, atención de adicciones, redes familiares o comunitarias de apoyo y demás factores vinculados con el proceso de reinserción social. La medición de estos resultados no podrá interpretarse como certificación individual de rehabilitación ni como determinación absoluta de ausencia de riesgo de reincidencia. **La información estadística prevista en este artículo deberá integrarse y difundirse de manera agregada, disociada o anonimizada, con observancia de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública. En ningún caso podrá utilizarse para estigmatizar, discriminar o imponer restricciones adicionales a las personas egresadas.**
Artículo 104. Elaboración del Plan de Actividades Para la elaboración del Plan de Actividades, al ingreso al Centro, la Autoridad Penitenciaria informará a la persona privada de la libertad las actividades disponibles en dicho Centro y de manera participativa se diseñará un Plan de Actividades acorde a las necesidades, preferencias y capacidades de la persona privada de la libertad. Las normas reglamentarias determinarán el número de actividades y de horas que constituirán un Plan de Actividades satisfactorio. Dicho plan será remitido al Juez de Ejecución dentro de los quince días hábiles siguientes a la puesta a disposición del sentenciado, para su conocimiento.	Artículo 104. Elaboración del Plan de Actividades Para la elaboración del Plan de Actividades, al ingreso al Centro, la Autoridad Penitenciaria informará a la persona privada de la libertad las actividades disponibles **y, de manera participativa, diseñará** un Plan de Actividades acorde **con sus** necesidades, preferencias, capacidades y circunstancias personales, así como con los objetivos individualizados de su proceso de reinserción social. **El Plan de Actividades deberá establecer objetivos verificables, actividades educativas, laborales, culturales, deportivas, de capacitación, salud o atención especializada, según corresponda, así como mecanismos de seguimiento y**

No existe.	**evaluación periódica que permitan identificar los avances obtenidos, las necesidades de ajuste y las oportunidades efectivamente brindadas por el Centro Penitenciario.**
No existe.	**El Plan de Actividades será revisado periódicamente con participación de la persona privada de la libertad y podrá modificarse atendiendo a su evolución, necesidades, capacidades, condiciones de salud y disponibilidad institucional. La falta de acceso a una actividad por causas atribuibles al Centro Penitenciario no podrá considerarse incumplimiento ni producir consecuencias desfavorables para la persona.**
Las normas reglamentarias determinarán el número de actividades y de horas que constituirán un Plan de Actividades satisfactorio.	Las normas reglamentarias determinarán el número de actividades y de horas que constituirán un Plan de Actividades satisfactorio, considerando la disponibilidad real de los servicios, la situación jurídica, las condiciones personales y el tiempo de permanencia de la persona en el Centro Penitenciario.
Dicho plan será remitido al Juez de Ejecución dentro de los quince días hábiles siguientes a la puesta a disposición del sentenciado, para su conocimiento.	Dicho plan será remitido al Juez de Ejecución dentro de los quince días hábiles siguientes a la puesta a disposición **de la persona sentenciada**, para su conocimiento. **Las evaluaciones periódicas y modificaciones sustanciales realizadas al Plan deberán incorporarse al expediente de ejecución.**
No existe.	**Cuando se determine la fecha probable de egreso de la persona sentenciada, el Plan de Actividades incorporará un componente de preparación para el egreso, orientado a identificar necesidades relacionadas con**
La determinación del Plan de Actividades por parte de la Autoridad Penitenciaria podrá ser recurrida ante el Juez de Ejecución.	

	documentación de identidad, continuidad educativa, capacitación, vinculación laboral, atención a la salud, atención de adicciones y fortalecimiento de redes familiares o comunitarias de apoyo. La determinación del Plan de Actividades por parte de la Autoridad Penitenciaria podrá ser recurrida ante el Juez de Ejecución.
Artículo 207. Servicios postpenales Las Autoridades Corresponsables, en coordinación con la Unidad encargada de los servicios postpenales dentro de la Autoridad Penitenciaria, establecerán centros de atención y formará Redes de Apoyo Postpenal a fin de prestar a los liberados, externados y a sus familiares, el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia. A través de los servicios postpenales, se buscará fomentar, la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación, en general, de todas las áreas relacionadas con los ejes establecidos por el artículo 18 Constitucional a fin de facilitar la reinserción social además de promover en la sociedad la cultura de aceptación del liberado o externado. Los servicios postpenales se brindarán de forma individualizada conforme a las circunstancias de cada caso y a las posibilidades del sentenciado, externado y su familia. **No existe.** **No existe.** **No existe.**	Artículo 207. Servicios **postpenitenciarios** Las **autoridades corresponsables**, en coordinación con la **unidad** encargada de los servicios **postpenitenciarios de** la Autoridad Penitenciaria, establecerán centros de atención y **conformarán redes de apoyo postpenitenciario para implementar acciones institucionales de prevención social de la reincidencia mediante la continuidad de los procesos de reinserción social de las personas egresadas y externadas**. Los servicios **postpenitenciarios tendrán carácter preventivo, temporal, individualizado e interdisciplinario. Tendrán por objeto identificar y atender necesidades de intervención, reducir factores de riesgo modificables y fortalecer factores de protección personales, familiares, educativos, laborales, sanitarios y comunitarios que favorezcan la integración social.** **Los servicios generales de orientación, información y canalización institucional estarán disponibles para las personas egresadas y externadas que los soliciten, conforme a las capacidades institucionales.**

Para el cumplimiento de su objetivo, a nivel local y federal, la Autoridad Penitenciaria y demás autoridades corresponsables firmarán Convenios de colaboración con instituciones del sector público y privado que prestan funciones relacionadas con los servicios postpenales, con el objeto de canalizar a los liberados, externados y a su familia. De igual forma, existirá coordinación entre la Federación y los Estados o entre los Estados para el mejor cumplimiento de estos objetivos. **No existe.** **No existe.**	**El acompañamiento postpenitenciario individualizado se determinará con base en la evaluación interdisciplinaria, las necesidades identificadas y los criterios técnicos previstos en esta Ley. La evaluación tendrá por objeto establecer la modalidad e intensidad de la intervención y no podrá utilizarse como criterio automático de exclusión de los servicios generales.** **Para el cumplimiento de su objeto, las autoridades competentes proporcionarán orientación, información, canalización institucional y seguimiento de las acciones acordadas.** **La intervención podrá comprender la vinculación con instituciones públicas, sociales, académicas o privadas que presten servicios relacionados con educación, capacitación, empleo, salud, atención de adicciones, documentación de identidad y fortalecimiento familiar o comunitario.** **La admisión, permanencia y conclusión en cualquier programa o servicio se sujetará a la legislación aplicable, a sus reglas de operación, disponibilidad institucional y presupuestaria, así como a los criterios ordinarios establecidos para la población destinataria.** **La participación de las personas egresadas será voluntaria y requerirá su consentimiento libre e informado. Su aceptación, rechazo, suspensión o conclusión no generará consecuencias jurídicas desfavorables ni restricciones adicionales al ejercicio de sus derechos.**

	Tratándose de personas externadas, los servicios se prestarán conforme a la resolución judicial y al régimen de ejecución aplicable, sin sustituir las atribuciones del Juez de Ejecución ni de las autoridades responsables de la supervisión. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Autoridad Penitenciaria y **las autoridades corresponsables podrán celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y los sectores social y privado.** **La prestación de los servicios postpenitenciarios se sujetará a los principios, límites y salvaguardas establecidos en el artículo 214 de esta Ley.**
Nuevo articulo	**Artículo 208. Evaluación interdisciplinaria** **La unidad encargada de los servicios postpenitenciarios realizará una evaluación interdisciplinaria de las personas egresadas que voluntariamente soliciten o acepten participar en el acompañamiento postpenitenciario individualizado.** **La evaluación tendrá por objeto identificar las necesidades de intervención, los factores de riesgo modificables, los factores de protección y las capacidades personales, familiares, educativas, laborales, sanitarias y comunitarias relevantes para la continuidad del proceso de reinserción social y la prevención de la reincidencia delictiva.** **La evaluación será realizada por personal profesional de las áreas de psicología, trabajo social, criminología, derecho, salud**

	u otras disciplinas pertinentes, de acuerdo con las necesidades y circunstancias de cada caso. Cuando la autoridad no disponga del personal especializado requerido, podrá solicitar la colaboración de otras instituciones públicas, académicas u organizaciones de la sociedad civil, conforme a los mecanismos de coordinación y convenios aplicables. Para su elaboración podrán considerarse, con observancia de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales, el Informe Integral de Evolución para la Reinserción Social, el Plan de Actividades, el componente de preparación para el egreso y demás información pertinente contenida en el expediente de ejecución. La evaluación deberá sustentarse en criterios técnicos, objetivos e instrumentos técnicamente validados. Sus resultados deberán interpretarse conjuntamente con la trayectoria institucional, las condiciones personales y sociales y las oportunidades efectivamente brindadas durante el internamiento. La evaluación determinará las necesidades, modalidad e intensidad del acompañamiento. No podrá utilizarse para declarar la peligrosidad de la persona, certificar su rehabilitación, determinar la ausencia absoluta de riesgo, imponer restricciones adicionales o prolongar los efectos de la pena. La identificación de factores de riesgo no constituirá, por sí misma, motivo para negar

	los servicios generales de orientación, información o canalización institucional. Tratándose de personas externadas, la evaluación y las acciones de acompañamiento se realizarán conforme a la resolución judicial correspondiente y al régimen de ejecución aplicable, sin sustituir las atribuciones del Juez de Ejecución ni de las autoridades responsables de su supervisión.
Nuevo articulo	Artículo 209. Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado Con base en la evaluación interdisciplinaria y con la participación de la persona egresada, la unidad encargada de los servicios postpenitenciarios elaborará, cuando la evaluación determine la necesidad de acompañamiento especializado, un Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado. El Plan deberá contener, al menos: I. Las necesidades de intervención identificadas; II. Los factores de riesgo modificables y los factores de protección que serán objeto de atención; III. Los objetivos específicos y verificables del acompañamiento; IV. Las acciones de orientación, información, canalización institucional, vinculación y seguimiento acordadas; V. Las instituciones o instancias que, en el ámbito de sus atribuciones, podrán participar en su ejecución; VI. La duración estimada del acompañamiento;

	VII. Los mecanismos y la periodicidad para su revisión, y **VIII. Los criterios para su modificación, suspensión o conclusión.** **El Plan deberá ser explicado en lenguaje claro, accesible y comprensible. Su aceptación requerirá el consentimiento libre e informado de la persona egresada.** **El Plan no constituirá resolución judicial, medida de seguridad, condición de libertad, mecanismo de vigilancia ni obligación posterior al cumplimiento de la pena.**
Nuevo artículo	**Artículo 210. Acciones de acompañamiento y seguimiento** **Las acciones previstas en el Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado podrán comprender:** **I. Orientación e información sobre derechos, obligaciones y servicios disponibles;** **II. Canalización y vinculación con instituciones públicas, sociales, académicas o privadas;** **III. Seguimiento de las acciones acordadas;** **IV. Fortalecimiento de capacidades personales y sociales;** **V. Orientación para la continuidad educativa, capacitación o certificación de competencias;** **VI. Orientación para la vinculación laboral;** **VII. Canalización para la atención a la salud física, mental o de adicciones;** **VIII. Orientación para la obtención o regularización de documentación de identidad;** **IX. Fortalecimiento de redes familiares o comunitarias de apoyo, y**

	X. Las demás acciones compatibles con los fines de la reinserción social y la prevención de la reincidencia. **La admisión, permanencia y conclusión en cualquier programa o servicio se sujetará a la legislación aplicable, a sus reglas de operación, a la disponibilidad institucional y presupuestaria y a los criterios ordinarios establecidos para la población destinataria.** **La unidad encargada de los servicios postpenitenciarios no podrá garantizar la incorporación, permanencia o resultado de la persona en programas o servicios administrados por otras instituciones.**
Nuevo artículo	**Artículo 211. Duración, revisión y conclusión** **El acompañamiento postpenitenciario individualizado será temporal y tendrá la duración estrictamente necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, conforme a las necesidades identificadas y a la evolución de cada caso.** **El Plan deberá revisarse periódicamente con participación de la persona egresada, a fin de valorar los avances alcanzados, las dificultades presentadas, la pertinencia de las acciones acordadas y la necesidad de modificar su contenido.** **El acompañamiento podrá concluir por:** **I. Cumplimiento de los objetivos establecidos;** **II. Conclusión del plazo previsto, cuando no resulte necesaria su continuidad;** **III. Solicitud expresa de la persona egresada;**

	IV. Falta de localización, después de agotar los medios razonables de contacto previamente autorizados; **V. Imposibilidad material o jurídica de continuar las acciones, o** **VI. Cualquier otra causa justificada conforme a las disposiciones aplicables.** **La suspensión o conclusión del acompañamiento no producirá consecuencias jurídicas desfavorables ni limitará el acceso de la persona a servicios públicos a los que tenga derecho conforme a la legislación aplicable.**
Nuevo artículo	**Artículo 212. Coordinación institucional** **La Autoridad Penitenciaria y las autoridades corresponsables establecerán mecanismos de coordinación para la adecuada prestación de los servicios postpenitenciarios y la continuidad de las acciones de reinserción social.** **La coordinación tendrá por objeto:** **I. Identificar instituciones, servicios y recursos disponibles;** **II. Establecer mecanismos de referencia, canalización y contrarreferencia institucional;** **III. Evitar la duplicidad de acciones;** **IV. Facilitar la continuidad de la atención cuando la persona cambie de residencia;** **V. Promover el intercambio de información estadística y técnica, con observancia de la legislación aplicable;** **VI. Fortalecer las capacidades del personal encargado de los servicios postpenitenciarios, y**

	VII. Evaluar la cobertura, continuidad y resultados generales de las acciones implementadas. **Las autoridades podrán celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y los sectores social y privado, con observancia de los límites y salvaguardas establecidos en el artículo 214 de esta Ley**
Nuevo artículo	**Artículo 213. Confidencialidad y protección de datos personales** **La información obtenida con motivo de la evaluación interdisciplinaria, la elaboración del Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado y el seguimiento de las acciones tendrá carácter confidencial.** **Su tratamiento deberá observar los principios y deberes establecidos en la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.** **La información sólo podrá ser utilizada para las finalidades directamente relacionadas con la prestación, seguimiento y evaluación de los servicios postpenitenciarios.** **No podrá compartirse con autoridades o terceros para finalidades de vigilancia, restricción injustificada de derechos, selección laboral, estigmatización o discriminación, salvo disposición legal expresa o mandamiento fundado y motivado de autoridad competente.** **La transferencia de datos a las instituciones receptoras requerirá el consentimiento previo de la persona, salvo los casos**

	expresamente previstos por la legislación aplicable. **Las autoridades deberán adoptar las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para proteger la información.** **La información estadística derivada de los servicios postpenitenciarios deberá difundirse de manera agregada, disociada o anonimizada.**
Nuevo artículo	**Artículo 214. Principios, límites y salvaguardas** **Los servicios postpenitenciarios y el acompañamiento individualizado constituyen mecanismos institucionales de prevención social de la reincidencia mediante la continuidad de la reinserción social.** **Su prestación se regirá por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad, igualdad, no discriminación, voluntariedad, confidencialidad, protección de datos personales, enfoque diferenciado, respeto a los derechos de las víctimas y rendición de cuentas.** **En ningún caso podrán:** **I. Constituir recompensa, beneficio penitenciario, prolongación de la pena o medida de seguridad adicional;** **II. Imponer vigilancia, control o supervisión penal a las personas egresadas;** **III. Condicionar el ejercicio de derechos al cumplimiento del Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado;** **IV. Crear cuotas, reservas exclusivas, subsidios automáticos o derechos**

	preferentes frente a otras personas o grupos en situación de vulnerabilidad; **V. Eximir del cumplimiento de requisitos establecidos en leyes, reglamentos, reglas de operación o disposiciones administrativas;** **VI. Desplazar a otras personas solicitantes o alterar los criterios ordinarios de admisión a programas y servicios;** **VII. Certificar la rehabilitación individual, declarar la ausencia absoluta de riesgo o establecer presunciones de peligrosidad;** **VIII. Utilizar la información recabada para fines discriminatorios o distintos de los previstos en esta Ley, o** **IX. Afectar los derechos reconocidos a las víctimas u ofendidos del delito, las obligaciones derivadas de la sentencia, la reparación del daño o las medidas de protección vigentes.** **La participación de las personas egresadas será voluntaria y deberá sustentarse en consentimiento libre e informado. Su rechazo, suspensión o conclusión no generará consecuencias jurídicas desfavorables.** **Tratándose de personas externadas, la prestación de los servicios se sujetará a la resolución judicial correspondiente y al régimen de ejecución aplicable, sin sustituir las atribuciones del Juez de Ejecución ni de las autoridades responsables de su supervisión.**

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN MATERIA

DE PREVENCIÓN DE LA REINCIDENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LA REINSERCIÓN SOCIAL POSTPENITENCIARIA

Artículo Único. Se adicionan las fracciones XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 3; se reforman los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, y se adiciona un párrafo sexto al artículo 7; se reforman las fracciones III y VI, y se adiciona una fracción VII al artículo 18; se reforman los incisos S y T de la fracción III, se adicionan los incisos U, V, W, X, Y y Z a dicha fracción, así como un último párrafo al artículo 27; se reforman los párrafos primero y segundo, y se adicionan los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 29; se reforman el párrafo primero y los actuales párrafos segundo y tercero, que pasan a ser cuarto y quinto; se adicionan los párrafos segundo, tercero y sexto, recorriéndose el actual párrafo cuarto para quedar como séptimo, del artículo 104; asimismo, se reforman los párrafos primero, segundo y tercero, así como el actual párrafo cuarto, que pasa a ser décimo, y se adicionan los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y undécimo al artículo 207, y se adicionan los artículos 208, 209, 210, 211, 212, 213 y 214 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por:

I. a XXVII. ...

XXVIII. Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado: Al conjunto temporal, voluntario y coordinado de acciones de orientación, canalización, vinculación y seguimiento, diseñado conforme a las necesidades, capacidades y circunstancias particulares de la persona egresada, con la finalidad de favorecer la continuidad de su proceso de reinserción social y contribuir a la prevención de la reincidencia delictiva, sin que constituya una prolongación de la pena, una medida de seguridad o un régimen de beneficios preferenciales;

XXIX. Evaluación Interdisciplinaria: Al proceso técnico e individualizado realizado por un equipo interdisciplinario, mediante el cual se valoran integralmente la trayectoria institucional, la conducta observada durante el internamiento, el cumplimiento y aprovechamiento del Plan de Actividades, las condiciones personales, familiares, sociales, laborales, educativas y de salud, así como los factores de riesgo y de protección, con el propósito de determinar

las necesidades y el nivel de intervención requerido para favorecer la reinserción social;

XXX. Factores de Protección: A las condiciones personales, familiares, sociales, educativas, laborales, comunitarias o institucionales que fortalecen la integración de la persona a la vida en sociedad y contribuyen a disminuir el riesgo de reincidencia delictiva;

XXXI. Factores de Riesgo: A las condiciones personales, familiares, sociales, educativas, laborales, económicas, de salud o comunitarias que, conforme a una evaluación interdisciplinaria sustentada en instrumentos técnicamente validados, se asocian con una mayor probabilidad de reincidencia delictiva y son susceptibles de modificación o atención mediante intervenciones individualizadas;

XXXII. Persona Externada: A la persona sentenciada que continúa el cumplimiento de una pena, beneficio, condición o medida de ejecución penal fuera de un Centro Penitenciario, conforme a resolución emitida por autoridad competente, y

XXXIII. Persona Egresada: A la persona que ha recuperado su libertad por cumplimiento o extinción de la pena privativa de libertad y que ya no se encuentra sujeta a condiciones de ejecución penal, en los términos previstos por esta Ley.

Artículo 7. Articulación interinstitucional

...

Son autoridades corresponsables para el cumplimiento de esta Ley, las Secretarías de Gobernación, de ***Bienestar****, de Economía, de Educación Pública, de Cultura, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas y la Ciudad de México, así como las demás* ***autoridades*** *que, por la naturaleza de sus atribuciones, deban intervenir en el cumplimiento de la presente Ley.*

Encabezadas por la Secretaría de Gobernación o su equivalente en las entidades federativas, se establecerán ***Comisiones Intersecretariales integradas*** *por todas las autoridades corresponsables* ***previstas*** *en esta Ley, las cuales tendrán por objeto*

coordinar, planear, articular y dar seguimiento a las acciones institucionales necesarias para el cumplimiento de la política de reinserción social y de los servicios postpenitenciarios.

Asimismo, las Comisiones Intersecretariales serán responsables de promover la coordinación entre las autoridades competentes para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de** los programas de **reinserción social desarrollados** al interior de los Centros Penitenciarios y de los servicios **postpenitenciarios previstos** en esta Ley. **Para tal efecto, podrán promover mecanismos homologados de coordinación institucional, impulsar esquemas de colaboración interinstitucional y proponer indicadores para la evaluación de resultados, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a cada autoridad conforme a la legislación aplicable.** Las autoridades corresponsables en las entidades federativas establecerán **sus respectivas Comisiones para el cumplimiento de estos fines en el ámbito de su competencia.

*La Autoridad Penitenciaria y las autoridades corresponsables podrán implementar mecanismos de participación y **celebrar** convenios de colaboración con **instituciones públicas,** organizaciones de la sociedad civil, **instituciones académicas, organismos internacionales y los sectores social y privado, para diseñar, fortalecer, implementar o evaluar programas de reinserción social y servicios postpenitenciarios, observando los límites y salvaguardas establecidos en el artículo 214 de esta Ley.***

Las Comisiones Intersecretariales promoverán la coordinación técnica entre las autoridades corresponsables para fortalecer la continuidad de los procesos de reinserción social de las personas egresadas, impulsar la mejora continua de los servicios postpenitenciarios, promover la evaluación periódica de sus resultados y elaborar un informe anual sobre el desempeño general de las acciones implementadas, conforme a los indicadores previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. Funciones del Comité

El Comité tendrá las funciones siguientes:

I. a II. ...

*III. Diseñar con participación de la persona **privada de la libertad**, autorizar, **dar seguimiento y evaluar periódicamente el Plan de Actividades, documentando***

los avances, el cumplimiento de sus objetivos, los cambios positivos observados durante el internamiento y las oportunidades efectivamente brindadas por el Centro Penitenciario para el desarrollo del proceso de reinserción social;

IV. a V. ...

VI. Informar a la persona sentenciada de la posibilidad de acceder a las medidas de libertad condicional y de libertad anticipada en cuanto dicha circunstancia se verifique;

VII. Integrar, previo al egreso de la persona sentenciada, un Informe Integral de Evolución para la Reinserción Social, en el que se documenten la trayectoria observada durante el internamiento, el grado de cumplimiento del Plan de Actividades, la participación en programas educativos, laborales, deportivos, culturales, de salud o de atención especializada, así como los demás elementos objetivos que resulten relevantes para la continuidad del proceso de reinserción social. Dicho informe constituirá un insumo técnico para la elaboración del Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado, en los términos previstos por esta Ley.

...

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad

...

I. a II. ...

III. El expediente de ejecución contendrá, al menos:

A. a Q. ...

R. Sanciones y beneficios obtenidos;

*S. Información sobre cónyuge **o** pareja, familiares directos, así como dependientes económicos, incluyendo su lugar de residencia, origen **o** arraigo;*

*T. Plan de **Actividades y sus evaluaciones periódicas, incluyendo los objetivos establecidos, las actividades disponibles, el grado de participación y aprovechamiento, los avances observados y, en su caso, las causas que hayan impedido su cumplimiento;***

U. Informe Integral de Evolución para la Reinserción Social elaborado por el Comité Técnico, en términos del artículo 18 de esta Ley;

V. Constancias, certificados o documentos que acrediten los estudios, la capacitación, las competencias laborales y las actividades formativas realizadas durante el internamiento;

W. Constancia sobre la necesidad de continuidad de atención médica, psicológica, psiquiátrica o de adicciones después del egreso, sin incorporar al expediente de ejecución datos clínicos distintos de los estrictamente indispensables para la canalización correspondiente;

X. Registro de las necesidades identificadas para la preparación del egreso, incluyendo documentación de identidad, continuidad educativa, vinculación laboral, atención a la salud y redes familiares o comunitarias de apoyo;

Y. Constancia de que la persona sentenciada recibió información clara, accesible y suficiente sobre los servicios postpenitenciarios disponibles, así como, en su caso, su consentimiento libre e informado para participar en el acompañamiento postpenitenciario individualizado, y

Z. Los demás documentos estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del proceso de reinserción social y la adecuada prestación de los servicios postpenitenciarios, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

IV. a V. ...

La información incorporada al expediente de ejecución con motivo de la preparación para el egreso y de los servicios postpenitenciarios tendrá carácter confidencial y únicamente podrá ser consultada o transferida por las autoridades competentes para las finalidades expresamente previstas en esta Ley. Su tratamiento deberá observar los principios y deberes establecidos en la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

Artículo 29. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria

El Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria compartirá los registros administrativos derivados de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, ***por su naturaleza estadística, sean requeridos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el adecuado desarrollo de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario,*** *así como de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad.* ***Asimismo, el Sistema podrá proporcionar, a solicitud del Instituto y conforme a los criterios técnicos***

aplicables, información agregada sobre los programas de reinserción social, la preparación para el egreso y los servicios postpenitenciarios previstos en esta Ley.

Para el caso de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, el Instituto recolectará y publicará los datos estadísticos sobre infraestructura y recursos con los que cuentan los sistemas penitenciarios en el ámbito federal y local para ejercer sus funciones, en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. El Instituto recabará también información estadística sobre características demográficas, socioeconómicas y familiares de la población penitenciaria, así como de su situación jurídica. De igual forma, el Instituto recabará ***información sobre los delitos y las penas por los cuales ingresan las personas, así como sobre las víctimas de los delitos por los que fueron sujetas a proceso, entre otros aspectos, conforme a sus atribuciones, criterios técnicos y disponibilidad presupuestaria.***

...

Las autoridades penitenciarias y las autoridades corresponsables deberán generar, integrar y proporcionar información estadística agregada sobre los programas de reinserción social, el cumplimiento de los Planes de Actividades, la preparación para el egreso y los servicios postpenitenciarios, de conformidad con los criterios técnicos y mecanismos de coordinación aplicables.

La información deberá permitir conocer, al menos, la cobertura, modalidad, duración, continuidad, conclusión y resultados generales de las acciones implementadas, sin contener datos que permitan identificar directa o indirectamente a las personas participantes.

Para la evaluación de los servicios postpenitenciarios podrán considerarse indicadores relacionados con documentación de identidad, continuidad educativa, capacitación, vinculación laboral, atención a la salud física y mental, atención de adicciones, redes familiares o comunitarias de apoyo y demás factores vinculados con el proceso de reinserción social. La medición de estos resultados no podrá interpretarse como certificación individual de

rehabilitación ni como determinación absoluta de ausencia de riesgo de reincidencia.

La información estadística prevista en este artículo deberá integrarse y difundirse de manera agregada, disociada o anonimizada, con observancia de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública. En ningún caso podrá utilizarse para estigmatizar, discriminar o imponer restricciones adicionales a las personas egresadas.

Artículo 104. Elaboración del Plan de Actividades

Para la elaboración del Plan de Actividades, al ingreso al Centro, la Autoridad Penitenciaria informará a la persona privada de la libertad las actividades disponibles ***y, de manera participativa, diseñará*** *un Plan de Actividades acorde* ***con sus*** *necesidades, preferencias, capacidades y circunstancias personales, así como con los objetivos individualizados de su proceso de reinserción social.*

El Plan de Actividades deberá establecer objetivos verificables, actividades educativas, laborales, culturales, deportivas, de capacitación, salud o atención especializada, según corresponda, así como mecanismos de seguimiento y evaluación periódica que permitan identificar los avances obtenidos, las necesidades de ajuste y las oportunidades efectivamente brindadas por el Centro Penitenciario.

El Plan de Actividades será revisado periódicamente con participación de la persona privada de la libertad y podrá modificarse atendiendo a su evolución, necesidades, capacidades, condiciones de salud y disponibilidad institucional. La falta de acceso a una actividad por causas atribuibles al Centro Penitenciario no podrá considerarse incumplimiento ni producir consecuencias desfavorables para la persona.

Las normas reglamentarias determinarán el número de actividades y de horas que constituirán un Plan de Actividades satisfactorio, considerando la disponibilidad real de los servicios, la situación jurídica, las condiciones personales y el tiempo de permanencia de la persona en el Centro Penitenciario.

Dicho plan será remitido al Juez de Ejecución dentro de los quince días hábiles siguientes a la puesta a disposición ***de la persona sentenciada****, para su*

conocimiento. ***Las evaluaciones periódicas y modificaciones sustanciales realizadas al Plan deberán incorporarse al expediente de ejecución.***

Cuando se determine la fecha probable de egreso de la persona sentenciada, el Plan de Actividades incorporará un componente de preparación para el egreso, orientado a identificar necesidades relacionadas con documentación de identidad, continuidad educativa, capacitación, vinculación laboral, atención a la salud, atención de adicciones y fortalecimiento de redes familiares o comunitarias de apoyo.

La determinación del Plan de Actividades por parte de la Autoridad Penitenciaria podrá ser recurrida ante el Juez de Ejecución.

Artículo 207. Servicios ***postpenitenciarios***

Las ***autoridades corresponsables****, en coordinación con la* ***unidad*** *encargada de los servicios* ***postpenitenciarios de*** *la Autoridad Penitenciaria, establecerán centros de atención y* ***conformarán redes de apoyo postpenitenciario para implementar acciones institucionales de prevención social de la reincidencia mediante la continuidad de los procesos de reinserción social de las personas egresadas y externadas****.*

Los servicios ***postpenitenciarios tendrán carácter preventivo, temporal, individualizado e interdisciplinario. Tendrán por objeto identificar y atender necesidades de intervención, reducir factores de riesgo modificables y fortalecer factores de protección personales, familiares, educativos, laborales, sanitarios y comunitarios que favorezcan la integración social.***

Los servicios generales de orientación, información y canalización institucional estarán disponibles para las personas egresadas y externadas que los soliciten, conforme a las capacidades institucionales.

El acompañamiento postpenitenciario individualizado se determinará con base en la evaluación interdisciplinaria, las necesidades identificadas y los criterios técnicos previstos en esta Ley. La evaluación tendrá por objeto establecer la modalidad e intensidad de la intervención y no podrá utilizarse como criterio automático de exclusión de los servicios generales.

Para el cumplimiento de su objeto, las autoridades competentes proporcionarán orientación, información, canalización institucional y seguimiento de las acciones acordadas.

La intervención podrá comprender la vinculación con instituciones públicas, sociales, académicas o privadas que presten servicios relacionados con educación, capacitación, empleo, salud, atención de adicciones, documentación de identidad y fortalecimiento familiar o comunitario.

La admisión, permanencia y conclusión en cualquier programa o servicio se sujetará a la legislación aplicable, a sus reglas de operación, disponibilidad institucional y presupuestaria, así como a los criterios ordinarios establecidos para la población destinataria.

La participación de las personas egresadas será voluntaria y requerirá su consentimiento libre e informado. Su aceptación, rechazo, suspensión o conclusión no generará consecuencias jurídicas desfavorables ni restricciones adicionales al ejercicio de sus derechos.

Tratándose de personas externadas, los servicios se prestarán conforme a la resolución judicial y al régimen de ejecución aplicable, sin sustituir las atribuciones del Juez de Ejecución ni de las autoridades responsables de la supervisión.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Autoridad Penitenciaria y ***las autoridades corresponsables podrán celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y los sectores social y privado.***

La prestación de los servicios postpenitenciarios se sujetará a los principios, límites y salvaguardas establecidos en el artículo 214 de esta Ley.

Artículo 208. Evaluación interdisciplinaria

La unidad encargada de los servicios postpenitenciarios realizará una evaluación interdisciplinaria de las personas egresadas que voluntariamente soliciten o acepten participar en el acompañamiento postpenitenciario individualizado.

La evaluación tendrá por objeto identificar las necesidades de intervención, los factores de riesgo modificables, los factores de protección y las capacidades personales, familiares, educativas, laborales, sanitarias y comunitarias relevantes para la continuidad del proceso de reinserción social y la prevención de la reincidencia delictiva.

La evaluación será realizada por personal profesional de las áreas de psicología, trabajo social, criminología, derecho, salud u otras disciplinas pertinentes, de acuerdo con las necesidades y circunstancias de cada caso. Cuando la autoridad no disponga del personal especializado requerido, podrá solicitar la colaboración de otras instituciones públicas, académicas u organizaciones de la sociedad civil, conforme a los mecanismos de coordinación y convenios aplicables.

Para su elaboración podrán considerarse, con observancia de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales, el Informe Integral de Evolución para la Reinserción Social, el Plan de Actividades, el componente de preparación para el egreso y demás información pertinente contenida en el expediente de ejecución.

La evaluación deberá sustentarse en criterios técnicos, objetivos e instrumentos técnicamente validados. Sus resultados deberán interpretarse conjuntamente con la trayectoria institucional, las condiciones personales y sociales y las oportunidades efectivamente brindadas durante el internamiento.

La evaluación determinará las necesidades, modalidad e intensidad del acompañamiento. No podrá utilizarse para declarar la peligrosidad de la persona, certificar su rehabilitación, determinar la ausencia absoluta de riesgo, imponer restricciones adicionales o prolongar los efectos de la pena.

La identificación de factores de riesgo no constituirá, por sí misma, motivo para negar los servicios generales de orientación, información o canalización institucional.

Tratándose de personas externadas, la evaluación y las acciones de acompañamiento se realizarán conforme a la resolución judicial correspondiente y al régimen de ejecución aplicable, sin sustituir las atribuciones del Juez de Ejecución ni de las autoridades responsables de su supervisión.

Artículo 209. Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado

Con base en la evaluación interdisciplinaria y con la participación de la persona egresada, la unidad encargada de los servicios postpenitenciarios elaborará, cuando la evaluación determine la necesidad de acompañamiento especializado, un Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado.

El Plan deberá contener, al menos:

I. Las necesidades de intervención identificadas;

II. Los factores de riesgo modificables y los factores de protección que serán objeto de atención;

III. Los objetivos específicos y verificables del acompañamiento;

IV. Las acciones de orientación, información, canalización institucional, vinculación y seguimiento acordadas;

V. Las instituciones o instancias que, en el ámbito de sus atribuciones, podrán participar en su ejecución;

VI. La duración estimada del acompañamiento;

VII. Los mecanismos y la periodicidad para su revisión, y

VIII. Los criterios para su modificación, suspensión o conclusión.

El Plan deberá ser explicado en lenguaje claro, accesible y comprensible. Su aceptación requerirá el consentimiento libre e informado de la persona egresada.

El Plan no constituirá resolución judicial, medida de seguridad, condición de libertad, mecanismo de vigilancia ni obligación posterior al cumplimiento de la pena.

Artículo 210. Acciones de acompañamiento y seguimiento

Las acciones previstas en el Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado podrán comprender:

I. Orientación e información sobre derechos, obligaciones y servicios disponibles;

II. Canalización y vinculación con instituciones públicas, sociales, académicas o privadas;

III. Seguimiento de las acciones acordadas;

IV. Fortalecimiento de capacidades personales y sociales;

V. Orientación para la continuidad educativa, capacitación o certificación de competencias;

VI. Orientación para la vinculación laboral;

VII. Canalización para la atención a la salud física, mental o de adicciones;

VIII. Orientación para la obtención o regularización de documentación de identidad;

IX. Fortalecimiento de redes familiares o comunitarias de apoyo, y

X. Las demás acciones compatibles con los fines de la reinserción social y la prevención de la reincidencia.

La admisión, permanencia y conclusión en cualquier programa o servicio se sujetará a la legislación aplicable, a sus reglas de operación, a la disponibilidad institucional y presupuestaria y a los criterios ordinarios establecidos para la población destinataria.

La unidad encargada de los servicios postpenitenciarios no podrá garantizar la incorporación, permanencia o resultado de la persona en programas o servicios administrados por otras instituciones.

Artículo 211. Duración, revisión y conclusión

El acompañamiento postpenitenciario individualizado será temporal y tendrá la duración estrictamente necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, conforme a las necesidades identificadas y a la evolución de cada caso.

El Plan deberá revisarse periódicamente con participación de la persona egresada, a fin de valorar los avances alcanzados, las dificultades presentadas, la pertinencia de las acciones acordadas y la necesidad de modificar su contenido.

El acompañamiento podrá concluir por:

I. Cumplimiento de los objetivos establecidos;

II. Conclusión del plazo previsto, cuando no resulte necesaria su continuidad;

III. Solicitud expresa de la persona egresada;

IV. Falta de localización, después de agotar los medios razonables de contacto previamente autorizados;

V. Imposibilidad material o jurídica de continuar las acciones, o

VI. Cualquier otra causa justificada conforme a las disposiciones aplicables.

La suspensión o conclusión del acompañamiento no producirá consecuencias jurídicas desfavorables ni limitará el acceso de la persona a servicios públicos a los que tenga derecho conforme a la legislación aplicable.

Artículo 212. Coordinación institucional

La Autoridad Penitenciaria y las autoridades corresponsables establecerán mecanismos de coordinación para la adecuada prestación de los servicios postpenitenciarios y la continuidad de las acciones de reinserción social.

La coordinación tendrá por objeto:

I. Identificar instituciones, servicios y recursos disponibles;

II. Establecer mecanismos de referencia, canalización y contrarreferencia institucional;

III. Evitar la duplicidad de acciones;

IV. Facilitar la continuidad de la atención cuando la persona cambie de residencia;

V. Promover el intercambio de información estadística y técnica, con observancia de la legislación aplicable;

VI. Fortalecer las capacidades del personal encargado de los servicios postpenitenciarios, y

VII. Evaluar la cobertura, continuidad y resultados generales de las acciones implementadas.

Las autoridades podrán celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y los sectores social y privado, con observancia de los límites y salvaguardas establecidos en el artículo 214 de esta Ley.

Artículo 213. Confidencialidad y protección de datos personales

La información obtenida con motivo de la evaluación interdisciplinaria, la elaboración del Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado y el seguimiento de las acciones tendrá carácter confidencial.

Su tratamiento deberá observar los principios y deberes establecidos en la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

La información sólo podrá ser utilizada para las finalidades directamente relacionadas con la prestación, seguimiento y evaluación de los servicios postpenitenciarios.

No podrá compartirse con autoridades o terceros para finalidades de vigilancia, restricción injustificada de derechos, selección laboral, estigmatización o discriminación, salvo disposición legal expresa o mandamiento fundado y motivado de autoridad competente.

La transferencia de datos a las instituciones receptoras requerirá el consentimiento previo de la persona, salvo los casos expresamente previstos por la legislación aplicable.

Las autoridades deberán adoptar las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para proteger la información.

La información estadística derivada de los servicios postpenitenciarios deberá difundirse de manera agregada, disociada o anonimizada.

Artículo 214. Principios, límites y salvaguardas

Los servicios postpenitenciarios y el acompañamiento individualizado constituyen mecanismos institucionales de prevención social de la reincidencia mediante la continuidad de la reinserción social.

Su prestación se regirá por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad, igualdad, no discriminación, voluntariedad, confidencialidad, protección de datos personales, enfoque diferenciado, respeto a los derechos de las víctimas y rendición de cuentas.

En ningún caso podrán:

I. Constituir recompensa, beneficio penitenciario, prolongación de la pena o medida de seguridad adicional;

II. Imponer vigilancia, control o supervisión penal a las personas egresadas;

III. Condicionar el ejercicio de derechos al cumplimiento del Plan de Acompañamiento Postpenitenciario Individualizado;

IV. Crear cuotas, reservas exclusivas, subsidios automáticos o derechos preferentes frente a otras personas o grupos en situación de vulnerabilidad;

V. Eximir del cumplimiento de requisitos establecidos en leyes, reglamentos, reglas de operación o disposiciones administrativas;

VI. Desplazar a otras personas solicitantes o alterar los criterios ordinarios de admisión a programas y servicios;

VII. Certificar la rehabilitación individual, declarar la ausencia absoluta de riesgo o establecer presunciones de peligrosidad;

VIII. Utilizar la información recabada para fines discriminatorios o distintos de los previstos en esta Ley, o

IX. Afectar los derechos reconocidos a las víctimas u ofendidos del delito, las obligaciones derivadas de la sentencia, la reparación del daño o las medidas de protección vigentes.

La participación de las personas egresadas será voluntaria y deberá sustentarse en consentimiento libre e informado. Su rechazo, suspensión o conclusión no generará consecuencias jurídicas desfavorables.

Tratándose de personas externadas, la prestación de los servicios se sujetará a la resolución judicial correspondiente y al régimen de ejecución aplicable, sin sustituir las atribuciones del Juez de Ejecución ni de las autoridades responsables de su supervisión.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal y las autoridades competentes de las entidades federativas deberán realizar, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las adecuaciones reglamentarias, administrativas y operativas necesarias para su cumplimiento.

Tercero. Las Comisiones Intersecretariales previstas en el artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal deberán establecer, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación necesarios para la implementación progresiva de los servicios postpenitenciarios.

Cuarto. Las autoridades penitenciarias deberán adecuar progresivamente los expedientes de ejecución, los procedimientos de evaluación del Plan de Actividades y los mecanismos de preparación para el egreso conforme a lo previsto en el presente Decreto, sin afectar derechos adquiridos ni procedimientos de ejecución penal iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.

Quinto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados a las

autoridades competentes, sujetándose a la disponibilidad presupuestaria y a los principios de racionalidad, austeridad y eficiencia del gasto público. Su implementación se realizará de manera progresiva y no implicará la creación obligatoria de estructuras administrativas adicionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al decimocuarto día del mes de septiembre del año dos mil veintiséis.

ATENTAMENTE

Diputado Luis Enrique Martínez Ventura

P.O. 7498/cc/26

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OBJETIVIDAD Y LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL, LA INTEGRIDAD DE LA ACTUACIÓN INSTITUCIONAL Y LA PREVENCIÓN DEL USO FRAUDULENTO DE LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA JUSTICIA

El que suscribe, Luis Enrique Martínez Ventura, Diputado Federal de la LXVI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: **iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de procedimientos penales, del código penal federal y de la Ley General De Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de fortalecimiento de la objetividad y la debida diligencia en la investigación penal, la integridad de la actuación institucional y la prevención del uso fraudulento de los mecanismos de acceso a la justicia, al tenor de la siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La consolidación del Estado democrático de derecho exige que el sistema de procuración e impartición de justicia garantice simultáneamente la protección efectiva de las víctimas, el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas imputadas y la búsqueda objetiva de la verdad jurídica. Estos principios no son excluyentes; por el contrario, constituyen obligaciones constitucionales complementarias que deben coexistir para preservar la legitimidad de las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos.

En México, la evolución del sistema penal acusatorio representó un cambio trascendental al sustituir un modelo predominantemente inquisitivo por uno orientado al respeto del debido proceso, la presunción de inocencia, la publicidad de las actuaciones judiciales, la igualdad procesal y la protección integral de los derechos humanos. La reforma constitucional de 2008 y la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales consolidaron un modelo en el que la investigación penal dejó de tener como único objetivo la obtención de una sentencia condenatoria para convertirse en un mecanismo destinado al esclarecimiento

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género para dictamen.
Septiembre 14 de 2026.

objetivo de los hechos y a la protección de todas las personas involucradas en el procedimiento penal.

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Estos cuatro objetivos poseen el mismo rango constitucional y deben interpretarse de manera armónica. En consecuencia, la eficacia del sistema de justicia no puede medirse únicamente por el número de personas sentenciadas, sino por su capacidad para investigar con objetividad, sancionar a quien resulte responsable, proteger a las víctimas y evitar que personas inocentes sufran consecuencias derivadas de investigaciones deficientes o de actuaciones dolosas.

Paralelamente, el Estado mexicano ha asumido importantes compromisos nacionales e internacionales para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, constituyen el fundamento jurídico de un conjunto de mecanismos especializados orientados a garantizar el acceso efectivo a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.

La existencia de estos mecanismos responde a una realidad social ampliamente documentada. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), un porcentaje significativo de mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que evidencia la persistencia de un problema estructural que exige respuestas institucionales firmes y especializadas. Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) demuestra que una elevada proporción de delitos no son denunciados, fenómeno conocido como "cifra negra", motivado principalmente por la desconfianza en las autoridades, el temor a represalias y la percepción de que denunciar resulta inútil. Estos datos reflejan la necesidad de fortalecer, y no debilitar, los mecanismos de protección de las víctimas.

Sin embargo, fortalecer la protección de las víctimas no implica renunciar a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad que rigen la investigación penal. Un sistema de justicia sólido debe ser capaz de proteger a quien verdaderamente ha sido víctima de un delito y, al mismo tiempo, impedir que cualquier persona sea

privada de sus derechos como consecuencia de acusaciones deliberadamente falsas, investigaciones deficientes o actuaciones contrarias a la ley.

En este sentido, el principio de presunción de inocencia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional. El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución reconoce expresamente que toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad competente. Este principio ha sido desarrollado ampliamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha sostenido que la presunción de inocencia opera como regla de trato, regla probatoria y estándar para la valoración de la prueba, impidiendo que una persona sea tratada como culpable antes de que exista una resolución firme que así lo determine.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que la presunción de inocencia constituye una garantía esencial del debido proceso y que los Estados deben abstenerse de generar actos o manifestaciones que impliquen una condena anticipada antes de que exista una resolución judicial definitiva.

Bajo esta lógica, la investigación penal debe desarrollarse con estricto apego al principio de objetividad. El Ministerio Público no representa únicamente los intereses de la víctima ni tiene como finalidad obtener condenas a cualquier costo. Conforme al artículo 21 constitucional y al Código Nacional de Procedimientos Penales, su obligación consiste en investigar tanto los elementos que acrediten la existencia del delito y la probable responsabilidad como aquellos que favorezcan a la persona investigada, buscando el esclarecimiento objetivo de los hechos.

No obstante, la práctica cotidiana evidencia desafíos importantes. Diversos diagnósticos elaborados por instituciones nacionales e internacionales han señalado problemas relacionados con la insuficiente preservación de evidencia, deficiencias en la integración de carpetas de investigación, filtraciones indebidas de información reservada, revictimización, retrasos procesales y prácticas que, en ocasiones, afectan tanto los derechos de las víctimas como los de las personas imputadas. Tales circunstancias debilitan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia y generan la percepción de que el sistema puede ser utilizado de manera indebida o ineficaz.

Es importante precisar que la presente iniciativa no parte de la premisa de que las denuncias falsas constituyan un fenómeno generalizado ni pretende desalentar el ejercicio del derecho a denunciar. Tal afirmación carecería de sustento empírico suficiente y resultaría incompatible con la evidencia disponible respecto de la elevada cifra negra y de las múltiples barreras que aún enfrentan las víctimas para acceder a la justicia.

El propósito de esta iniciativa es distinto. Se reconoce que el marco jurídico vigente carece de disposiciones suficientemente claras para distinguir entre tres escenarios jurídicamente diferentes: la denuncia que logra acreditarse mediante pruebas; la denuncia que no alcanza el estándar probatorio requerido para obtener una sentencia condenatoria; y la imputación dolosamente falsa, formulada con pleno conocimiento de su falsedad y con la intención de provocar un perjuicio indebido a otra persona. La ausencia de esta diferenciación puede generar incertidumbre jurídica y dificulta la aplicación uniforme del derecho.

La reforma propuesta parte de un principio elemental: la absolución de una persona no implica, por sí misma, que la denuncia haya sido falsa; de la misma manera, la inexistencia de una sentencia condenatoria no autoriza a presumir mala fe por parte de quien denunció. La responsabilidad penal por una denuncia dolosamente falsa únicamente podrá actualizarse cuando, mediante un procedimiento judicial y con pleno respeto al debido proceso, se acredite que la imputación fue realizada de manera consciente, deliberada y con conocimiento de su falsedad.

No obstante, reconocer que las denuncias dolosamente falsas no constituyen un fenómeno estadísticamente generalizado no significa desconocer la gravedad de las consecuencias que pueden producir cuando llegan a presentarse. En un Estado democrático de derecho, la trascendencia de una conducta ilícita no depende exclusivamente de su frecuencia, sino también de la magnitud del daño que puede ocasionar a los bienes jurídicos tutelados y a la confianza de la sociedad en las instituciones públicas. Existen conductas cuya incidencia puede ser relativamente baja, pero cuyos efectos individuales e institucionales justifican plenamente la intervención del legislador para prevenirlas, investigarlas y sancionarlas de manera proporcional.

Cuando una persona formula deliberadamente una imputación falsa con conocimiento de su falsedad, no sólo puede provocar la apertura de una investigación penal innecesaria; también puede generar afectaciones profundas e incluso irreversibles para la persona indebidamente señalada. La sola existencia de una investigación puede implicar restricciones personales, afectaciones laborales, pérdida de oportunidades profesionales, deterioro de la reputación, ruptura de vínculos familiares, desgaste económico derivado de la defensa jurídica y consecuencias psicológicas asociadas al estigma social que suele acompañar a una acusación penal, aun cuando posteriormente se determine la inexistencia de responsabilidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la presunción de inocencia opera también como una regla de trato, lo que implica que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente durante todas las etapas del

procedimiento penal hasta que exista una sentencia condenatoria firme. Sin embargo, en la práctica, la exposición pública derivada de determinadas investigaciones puede generar una condena social anticipada difícilmente reversible, especialmente en un contexto caracterizado por la inmediatez de las redes sociales, la amplia difusión de información digital y la cobertura mediática de asuntos penales de alto impacto.

Los efectos de una imputación dolosamente falsa tampoco se limitan a la esfera individual. Cada investigación iniciada con base en hechos deliberadamente fabricados implica la movilización de recursos humanos, financieros y materiales del Estado que podrían destinarse a la investigación de delitos efectivamente cometidos. Ministerios Públicos, policías de investigación, peritos, asesores jurídicos, órganos jurisdiccionales y demás operadores del sistema de justicia deben emplear tiempo, presupuesto y capacidad institucional para atender procedimientos que, de haberse conocido oportunamente su falsedad, nunca habrían debido activarse. Ello repercute directamente en la eficiencia institucional y puede contribuir al incremento de cargas de trabajo, retrasos procesales y mayores tiempos de respuesta para las víctimas reales.

De igual forma, las imputaciones dolosamente falsas pueden producir un efecto nocivo sobre la percepción pública de los mecanismos de protección creados para atender a grupos históricamente vulnerables. Cuando casos excepcionales de utilización fraudulenta adquieren notoriedad pública, existe el riesgo de que se genere una desconfianza injustificada hacia instrumentos jurídicos cuya existencia responde a una necesidad plenamente acreditada, particularmente aquellos destinados a proteger a las mujeres víctimas de violencia. Este fenómeno puede traducirse en mayores obstáculos para quienes realmente requieren protección, alimentando prejuicios sociales que desincentiven la denuncia o cuestionen indebidamente la credibilidad de las víctimas.

Precisamente por ello, la presente iniciativa no pretende debilitar dichos mecanismos, sino preservar su legitimidad mediante reglas que distingan con absoluta claridad entre el ejercicio legítimo del derecho de acceso a la justicia y aquellas conductas excepcionales en las que una persona instrumentaliza deliberadamente el sistema penal para causar un daño indebido. Proteger la credibilidad de las instituciones exige garantizar que los mecanismos de protección permanezcan plenamente disponibles para quienes verdaderamente los necesitan, al tiempo que el orden jurídico cuente con herramientas suficientes para responder frente a conductas fraudulentas plenamente acreditadas mediante resolución judicial firme.

Desde la perspectiva del interés público, atender normativamente este problema también fortalece la seguridad jurídica. Un sistema legal que define con precisión los elementos constitutivos de una imputación dolosamente falsa reduce espacios para interpretaciones arbitrarias, proporciona mayor certeza a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y evita que la inexistencia de una sentencia condenatoria sea interpretada erróneamente como prueba automática de una denuncia falsa. En consecuencia, la reforma contribuye a delimitar con mayor claridad los alcances del derecho a denunciar, de la presunción de inocencia y de la responsabilidad penal derivada de conductas dolosas, reforzando el equilibrio entre los derechos de las víctimas, los derechos de las personas imputadas y el interés colectivo en la correcta administración de justicia.

En este sentido, la importancia de la presente iniciativa radica precisamente en evitar dos extremos igualmente perjudiciales para el Estado de derecho: por un lado, que las víctimas reales enfrenten obstáculos o temor para denunciar hechos delictivos; y por el otro, que el ordenamiento jurídico carezca de mecanismos suficientemente claros para responder cuando, de manera excepcional, se acredita judicialmente que una persona utilizó deliberadamente el sistema penal como instrumento para causar un perjuicio indebido. La finalidad de la reforma consiste en fortalecer la confianza en las instituciones mediante reglas claras, investigaciones objetivas y decisiones sustentadas en pruebas, preservando así la legitimidad del sistema de justicia y el equilibrio entre los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todas las personas.

Esta precisión resulta indispensable para evitar interpretaciones que puedan desalentar la denuncia de hechos delictivos por parte de víctimas reales. La iniciativa reafirma que toda persona tiene derecho a acudir ante las autoridades cuando considere que ha sido víctima de un delito y que ninguna reforma debe convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia. Al mismo tiempo, reconoce que el ejercicio de ese derecho no puede utilizarse como instrumento para fabricar hechos, manipular pruebas o provocar deliberadamente consecuencias jurídicas contra personas inocentes.

En un Estado constitucional de derecho, la protección de las víctimas y la protección de las personas inocentes no representan intereses contrapuestos. Ambos constituyen obligaciones derivadas de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La legitimidad del sistema de justicia depende precisamente de su capacidad para garantizar investigaciones objetivas, decisiones sustentadas en pruebas legalmente obtenidas y mecanismos eficaces para sancionar cualquier conducta que atente contra la correcta administración de justicia.

Por ello, la presente iniciativa propone fortalecer el marco jurídico mediante reformas que permitan perfeccionar los procedimientos de investigación, reforzar la preservación de la evidencia, garantizar la confidencialidad de la información, delimitar con claridad la responsabilidad derivada de las imputaciones dolosamente falsas, establecer mecanismos efectivos de reparación integral del daño y prever consecuencias jurídicas proporcionales para quienes, mediante el abuso deliberado de los mecanismos de protección previstos por la ley, ocasionen perjuicios graves a otras personas.

Lejos de debilitar los derechos de las víctimas o de restringir el acceso a la justicia, estas reformas buscan fortalecer la credibilidad de las instituciones, incrementar la confianza ciudadana en el sistema penal y consolidar un modelo de justicia que proteja de manera equilibrada la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en un procedimiento penal.

La transformación tecnológica experimentada durante las últimas décadas ha modificado profundamente la forma en que se desarrollan las relaciones sociales, económicas, comerciales y personales. Como consecuencia de ello, una parte cada vez mayor de las conductas con relevancia jurídica deja rastros digitales susceptibles de incorporarse como medios de prueba dentro de un procedimiento penal. Mensajes de texto, conversaciones mediante aplicaciones de mensajería instantánea, correos electrónicos, fotografías, videos, grabaciones de audio, metadatos, registros de geolocalización, historiales de navegación, transacciones electrónicas, publicaciones en redes sociales y la información almacenada en dispositivos móviles o servicios en la nube constituyen hoy fuentes probatorias de enorme relevancia para el esclarecimiento de los hechos.

En este nuevo contexto, la evidencia digital ha dejado de ser un elemento excepcional para convertirse en una de las principales herramientas de investigación criminal. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), prácticamente toda investigación penal contemporánea contiene algún componente de evidencia digital, incluso cuando el delito investigado no sea de naturaleza informática, debido a la utilización cotidiana de dispositivos electrónicos por parte de víctimas, testigos y personas investigadas.

No obstante, las características propias de la evidencia digital plantean desafíos significativamente distintos a los de la evidencia física tradicional. Mientras un objeto material suele conservar sus propiedades de manera estable, la información digital puede ser modificada, eliminada, sobrescrita, cifrada o transferida en cuestión de segundos, incluso de forma remota y sin dejar alteraciones perceptibles para el observador común. Asimismo, la facilidad para duplicar archivos electrónicos exige mecanismos técnicos que permitan distinguir entre una copia auténtica y una

alteración maliciosa. Por ello, la preservación adecuada de la evidencia digital constituye una condición indispensable para garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información que eventualmente será sometida al conocimiento de la autoridad judicial.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 14, 16, 17, 20 y 21 que toda actuación de la autoridad debe sujetarse al principio de legalidad y al debido proceso. Ello implica que las pruebas incorporadas a un procedimiento penal deben obtenerse mediante procedimientos lícitos, respetando los derechos fundamentales de todas las personas involucradas y garantizando que los elementos probatorios no hayan sido alterados, contaminados o manipulados durante las etapas de investigación.

En el mismo sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce la importancia de la cadena de custodia como mecanismo destinado a preservar la identidad e integridad de los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho probablemente delictivo. Sin embargo, la regulación vigente fue concebida originalmente tomando como referencia principal la evidencia física tradicional, razón por la cual resulta pertinente fortalecer expresamente el tratamiento normativo de la evidencia digital mediante disposiciones que respondan a sus características particulares.

La presente iniciativa no pretende sustituir el régimen vigente de cadena de custodia, sino complementarlo mediante criterios específicos aplicables a la obtención, preservación, almacenamiento, procesamiento y presentación de información digital. Ello permitirá dotar de mayor certeza jurídica tanto a las autoridades investigadoras como a los órganos jurisdiccionales, reduciendo el riesgo de exclusión probatoria derivado de deficiencias técnicas o procesales.

Asimismo, la reforma busca armonizar el marco jurídico nacional con los estándares internacionales sobre evidencia electrónica. Organismos como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Europa han desarrollado lineamientos dirigidos a garantizar la adecuada preservación de la evidencia digital mediante procedimientos técnicamente verificables y respetuosos de los derechos fundamentales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la valoración de la prueba debe realizarse conforme a criterios de licitud, pertinencia, autenticidad y confiabilidad, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el debido proceso exige que las pruebas utilizadas por las autoridades sean obtenidas y conservadas mediante procedimientos compatibles con los derechos humanos y susceptibles de control jurisdiccional.

Estos criterios adquieren especial relevancia tratándose de información electrónica, cuya alteración puede comprometer seriamente la búsqueda de la verdad y afectar tanto los derechos de las víctimas como la presunción de inocencia de las personas investigadas.

La creciente sofisticación de las tecnologías de información también ha incrementado la posibilidad de manipulación mediante herramientas de edición de imágenes, generación de contenido sintético, alteración de metadatos, suplantación de identidad digital e inteligencia artificial generativa. Estas circunstancias obligan al legislador a prever mecanismos legales que permitan verificar la autenticidad de la evidencia antes de que ésta produzca efectos procesales.

En consecuencia, la iniciativa propone fortalecer las disposiciones relativas a la evidencia digital para establecer expresamente que toda información obtenida por medios electrónicos deberá preservarse mediante procedimientos que garanticen su autenticidad, integridad y trazabilidad, documentando de manera completa cada una de las personas que intervengan en su obtención, resguardo, análisis y presentación ante la autoridad competente.

Asimismo, se plantea incorporar el deber de documentar técnicamente cualquier extracción, copia forense, migración de información o análisis especializado realizado sobre dispositivos electrónicos, con el propósito de asegurar que la evidencia permanezca inalterada y pueda ser reproducida, verificada y controvertida por las partes durante el procedimiento penal.

Estas medidas no sólo fortalecen la calidad de las investigaciones, sino que incrementan la seguridad jurídica de todas las personas involucradas en el proceso penal. Las víctimas obtienen mayores garantías de que los elementos probatorios que acreditan los hechos serán preservados adecuadamente; las personas investigadas cuentan con mejores mecanismos para verificar la autenticidad de las pruebas presentadas en su contra; y los órganos jurisdiccionales disponen de información técnicamente más confiable para emitir resoluciones sustentadas en evidencia objetiva.

Desde la perspectiva institucional, estas reformas también contribuirán a la profesionalización de las autoridades encargadas de la investigación criminal, incentivando la actualización permanente de protocolos técnicos, la capacitación especializada del personal ministerial y pericial, así como la adopción de estándares internacionales de informática forense.

En suma, el fortalecimiento del régimen jurídico aplicable a la evidencia digital responde a una necesidad derivada de la evolución tecnológica y de la creciente complejidad de las investigaciones penales contemporáneas. Su incorporación

expresa al marco normativo permitirá reducir riesgos de impugnación procesal, incrementar la confiabilidad de los medios de prueba, proteger de mejor manera los derechos fundamentales de las partes y consolidar un sistema de justicia más eficiente, transparente y acorde con las exigencias del Estado constitucional de derecho.

La presente iniciativa no se limita a proponer un incremento de sanciones o la incorporación de nuevas figuras penales. Su propósito fundamental consiste en fortalecer el marco jurídico que regula la procuración e impartición de justicia, mediante la armonización de diversos ordenamientos legales que, en conjunto, permitan garantizar investigaciones objetivas, proteger los derechos de las víctimas, salvaguardar la presunción de inocencia y consolidar un sistema de justicia más transparente, confiable y eficaz.

Desde una perspectiva de técnica legislativa, las reformas propuestas responden al principio de coherencia normativa, conforme al cual las modificaciones legales deben integrarse de manera sistemática con el ordenamiento jurídico vigente, evitando contradicciones, duplicidades o vacíos de regulación. En consecuencia, la iniciativa no pretende sustituir los mecanismos existentes de protección a las víctimas ni alterar la estructura del sistema penal acusatorio, sino perfeccionar su funcionamiento mediante disposiciones que fortalezcan la seguridad jurídica y la calidad de las investigaciones.

La reforma se encuentra alineada con los principios constitucionales previstos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los tratados internacionales de derechos humanos. En particular, observa el deber de garantizar el acceso efectivo a la justicia, la igualdad ante la ley, el debido proceso, la presunción de inocencia, la protección de las víctimas y el principio de legalidad que rige toda actuación de las autoridades encargadas de investigar y perseguir los delitos.

Asimismo, la propuesta atiende el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la tutela de los derechos humanos debe realizarse de manera integral, procurando un equilibrio entre los distintos bienes jurídicos protegidos por el orden constitucional. Ello implica que el fortalecimiento de los derechos de las víctimas no puede traducirse en una disminución de las garantías procesales de las personas imputadas, del mismo modo que la protección de la presunción de inocencia no debe convertirse en un obstáculo para investigar, sancionar y reparar eficazmente los delitos. En este contexto, la iniciativa articula un conjunto de reformas que responden a problemas específicos identificados

durante la aplicación del sistema penal acusatorio y que buscan mejorar la actuación institucional sin modificar sus principios fundamentales.

El Código Nacional de Procedimientos Penales constituye el principal instrumento normativo que regula el desarrollo de las investigaciones penales y el procedimiento acusatorio. Por ello, las modificaciones propuestas se concentran en fortalecer las etapas iniciales de la investigación, donde se generan la mayoría de los elementos probatorios que posteriormente serán valorados por la autoridad judicial.

Las reformas dirigidas al principio de objetividad del Ministerio Público tienen como finalidad reforzar una obligación que ya existe constitucionalmente, pero cuya aplicación práctica requiere mayor precisión normativa. La investigación penal debe desarrollarse bajo criterios de imparcialidad, documentando tanto los elementos que sustenten la imputación como aquellos que favorezcan a la persona investigada. Este deber no constituye una concesión a favor del imputado, sino una garantía indispensable para la búsqueda de la verdad y para la legitimidad de las resoluciones judiciales.

Del mismo modo, el fortalecimiento de las disposiciones relacionadas con la preservación de evidencia física y digital responde a la creciente complejidad de las investigaciones contemporáneas. El uso generalizado de dispositivos electrónicos, plataformas digitales y medios tecnológicos exige reglas claras respecto de la obtención, conservación y análisis de la información, evitando tanto la pérdida de evidencia relevante como la incorporación de elementos obtenidos de manera ilícita o alterados.

La iniciativa también propone reforzar la regulación de la confidencialidad durante la investigación penal, considerando que la divulgación indebida de información reservada puede afectar simultáneamente los derechos de las víctimas, la presunción de inocencia, la seguridad de los testigos y la eficacia de las diligencias ministeriales. Estas modificaciones buscan reducir prácticas que generan condenas mediáticas anticipadas y debilitan la confianza pública en las instituciones. Las modificaciones propuestas al Código Penal Federal responden a la necesidad de otorgar mayor certeza jurídica respecto de aquellas conductas que afectan directamente la correcta administración de justicia.

Actualmente existen diversas figuras relacionadas con la falsedad de declaraciones, la simulación de pruebas y otros delitos contra la administración de justicia; sin embargo, el marco jurídico presenta áreas susceptibles de fortalecimiento para diferenciar con claridad entre una denuncia presentada de buena fe que no logra acreditarse y una imputación formulada deliberadamente con conocimiento de su falsedad. Esta diferenciación resulta indispensable para proteger el derecho de

acceso a la justicia y evitar cualquier interpretación que pueda desalentar la denuncia de hechos delictivos por parte de víctimas reales.

Por ello, la iniciativa propone definir con precisión los elementos constitutivos de la imputación dolosamente falsa, exigiendo que el dolo sea plenamente acreditado mediante resolución judicial firme y descartando cualquier presunción derivada de una sentencia absolutoria o de la insuficiencia probatoria. Asimismo, se fortalecen las disposiciones relacionadas con la reparación integral del daño ocasionado por estas conductas, permitiendo que las personas afectadas puedan obtener una restitución proporcional a las consecuencias efectivamente acreditadas durante el procedimiento.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa consiste en preservar la legitimidad y eficacia de los mecanismos especializados creados para proteger a las mujeres víctimas de violencia.

La reforma parte del reconocimiento de que la violencia de género constituye un problema estructural ampliamente documentado por organismos nacionales e internacionales, razón por la cual el Estado tiene la obligación constitucional y convencional de mantener mecanismos eficaces de prevención, atención, protección y acceso a la justicia. En consecuencia, las modificaciones propuestas no limitan, restringen ni condicionan el derecho de las mujeres a denunciar hechos constitutivos de violencia, ni alteran el funcionamiento de las órdenes de protección previstas por la legislación vigente.

Por el contrario, la iniciativa busca reforzar la confianza en dichos mecanismos, precisando que cualquier utilización dolosa para fabricar hechos, manipular pruebas o provocar perjuicios indebidos será sancionada conforme a la legislación penal aplicable, siempre mediante resolución judicial firme y con pleno respeto al debido proceso. Esta precisión fortalece la legitimidad institucional de los mecanismos de protección y evita que conductas fraudulentas excepcionales puedan utilizarse para desacreditar instrumentos fundamentales en la protección de los derechos humanos de las mujeres.

La actuación de los servidores públicos constituye un elemento esencial para garantizar investigaciones eficaces y respetuosas de los derechos humanos. La experiencia demuestra que la pérdida de evidencia, la omisión deliberada de diligencias, las filtraciones de información reservada y otras conductas contrarias a la legalidad pueden comprometer gravemente la calidad de las investigaciones penales. Por ello, la iniciativa propone fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas cuando dichas conductas sean atribuibles a servidores públicos

encargados de la procuración o administración de justicia. Con ello se busca consolidar una cultura institucional basada en la legalidad, la objetividad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Desde una perspectiva institucional, la aprobación de la presente iniciativa permitirá fortalecer la calidad técnica de las investigaciones penales mediante procedimientos más objetivos, mayor preservación de la evidencia y mejores mecanismos de control sobre la actuación de las autoridades. En el ámbito de los derechos humanos, las reformas contribuirán a consolidar un equilibrio más sólido entre la protección de las víctimas y las garantías procesales de las personas imputadas, evitando falsas dicotomías entre ambos derechos y reafirmando que su tutela debe realizarse de manera complementaria.

En materia de procuración de justicia, se espera una mayor certeza jurídica respecto de las conductas que constituyen imputaciones dolosamente falsas, reduciendo espacios para interpretaciones contradictorias y fortaleciendo la confianza ciudadana en las resoluciones judiciales. Asimismo, la regulación más precisa de la evidencia digital, la confidencialidad de las investigaciones y la responsabilidad de los servidores públicos permitirá incrementar la transparencia institucional y mejorar la percepción pública sobre la imparcialidad del sistema de justicia.

Desde el punto de vista presupuestario, la iniciativa no implica la creación de nuevas instituciones, organismos o estructuras administrativas permanentes. Su implementación podrá realizarse mediante la actualización de protocolos de actuación, programas de capacitación y adecuaciones normativas internas de las instituciones competentes, aprovechando la infraestructura institucional existente. En términos del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el impacto presupuestario puede atenderse de manera gradual dentro de los recursos autorizados a las dependencias responsables, sin generar una carga financiera extraordinaria para el Estado.

En el ámbito social, las reformas contribuirán a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia, al ofrecer mayores garantías de imparcialidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Un sistema de justicia percibido como objetivo y confiable favorece la denuncia de los delitos, incrementa la cooperación de la ciudadanía con las autoridades y fortalece la legitimidad del Estado de Derecho.

La presente iniciativa representa una propuesta de armonización normativa orientada a perfeccionar el funcionamiento del sistema penal acusatorio mexicano sin alterar sus principios esenciales. Su diseño responde a los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y busca consolidar un modelo de justicia que investigue con objetividad, resuelva con base

en pruebas legalmente obtenidas y garantice la protección efectiva tanto de las víctimas como de las personas sujetas a investigación.

Lejos de establecer privilegios o restricciones indebidas para cualquiera de las partes del proceso penal, las reformas propuestas fortalecen los principios de legalidad, igualdad, debido proceso, presunción de inocencia, acceso a la justicia y reparación integral del daño, reafirmando que todos ellos constituyen pilares inseparables de un Estado democrático de derecho.

En consecuencia, se considera que la aprobación de la presente iniciativa contribuirá al fortalecimiento institucional de la procuración e impartición de justicia en México, incrementará la seguridad jurídica de las personas involucradas en los procedimientos penales y consolidará un marco normativo más claro, equilibrado y acorde con las exigencias constitucionales y convencionales que rigen la actuación del Estado mexicano.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reafirma su compromiso con la consolidación de un sistema de justicia más humano, transparente, objetivo y eficaz, que garantice el acceso pleno a la justicia de las víctimas, fortalezca la protección de los derechos humanos y preserve las garantías fundamentales reconocidas por la Constitución. La presente iniciativa parte de la convicción de que la protección reforzada de las mujeres víctimas de violencia y el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la legalidad no son principios incompatibles, sino obligaciones complementarias de un Estado democrático de derecho.

Por ello, se propone perfeccionar el marco jurídico para fortalecer la objetividad de las investigaciones, la integridad de la actuación institucional, la preservación de la evidencia, la responsabilidad de las personas servidoras públicas y la sanción de las conductas dolosas que vulneren la correcta administración de justicia, incluyendo el uso fraudulento de los mecanismos de protección previstos por la ley. Con estas reformas se busca consolidar instituciones más confiables, transparentes y profesionales, incrementar la certeza jurídica de todas las personas involucradas en los procedimientos penales y fortalecer la confianza de la sociedad en un sistema de justicia que proteja eficazmente a las víctimas, respete los derechos fundamentales y garantice que toda determinación se sustente en investigaciones objetivas y en pruebas legalmente obtenidas, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho y de la paz social en nuestro país.

Para una mejor comprensión del contenido y alcance de la presente iniciativa, en las siguientes tablas comparativas se presentan las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias cuya reforma y adición se propone, señalando de manera puntual el texto vigente y el texto propuesto de cada

artículo, con el propósito de fortalecer la objetividad en la investigación penal, la integridad de la actuación institucional y la protección de los derechos de las personas intervinientes.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 2o. Objeto del Código. Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.	**Artículo 2o. Objeto del Código.** Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, **garantizando que la investigación se desarrolle con objetividad, imparcialidad y respeto al debido proceso**, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.	**Artículo 127.** Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación con **objetividad, imparcialidad, legalidad y debida diligencia,** coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes, útiles y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, **debiendo considerar de manera objetiva los datos de prueba obtenidos durante la investigación, tanto los que sustenten la imputación como los que resulten relevantes para el esclarecimiento de los hechos, conforme a este Código.**
Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público: I al II.-... III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; IV.-... V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el	**Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público:** **I al II.-...** **III.** Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos **con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y debida diligencia**, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; IV.-... **V.** Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de

delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. Cuando se trate del delito de feminicidio se deberán aplicar los protocolos previstos para tales efectos; V.-... VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; VIII al XXIV.---	indicios **y datos de prueba pertinentes, útiles y necesarios para el esclarecimiento de los hechos, que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y su cuantificación para efectos de la reparación correspondiente. Cuando se trate del delito de feminicidio deberán aplicarse los protocolos previstos para tales efectos;** **VI.-...** **VII.** Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de los actos de investigación pertinentes, **útiles y necesarios para el esclarecimiento de los hechos,** así como analizar de manera integral las actuaciones realizadas por dichas autoridades; **VIII al XXIV.- ...**
Artículo 132. El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. I al VI.-... VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público; VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable; IX-... X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; XI al XV.-...	**Artículo 132.** El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género, respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución **y debida diligencia, orientando su actuación al esclarecimiento de los hechos.** **I al VI.-...** **VII.** Practicar las inspecciones y **demás actos de investigación pertinentes, útiles y necesarios para el esclarecimiento de los hechos,** así como reportar oportunamente sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que requieran autorización judicial, ésta deberá solicitarse a través del Ministerio Público; **VIII.** Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y, en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad, **conservación y adecuada preservación de los indicios.** En su caso, deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable; **IX.-...** **X.** Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento **relevante para el**

	esclarecimiento de los hechos, registrando la información obtenida de manera objetiva y conforme a las disposiciones aplicables; **XI al XV.-...**
Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación.	**Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito.**Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan, desaparezcan **o se modifiquen sus condiciones originales**. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación, **debiendo documentarse las actuaciones realizadas sobre dichos bienes durante su aseguramiento y resguardo, conforme a las disposiciones aplicables.**

CÓDIGO PENAL FEDERAL

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes: **I al XXX.-...** **XXXI.** Alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia; **XXXII.** Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia; **XXXIII al XXXVII.-...**	**Artículo 225.-** Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes: **I al XXX.-...** **XXXI.** Alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar, **dolosamente**, el lugar de los hechos o del hallazgo, los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo, o el procedimiento de cadena de custodia, **comprometiendo su integridad, autenticidad, conservación o disponibilidad para el procedimiento penal;** **XXXII. Desviar, obstaculizar o retardar indebidamente la investigación del hecho delictuoso, u omitir dolosamente la práctica de diligencias indispensables, la incorporación, preservación o documentación de datos de prueba relevantes para el esclarecimiento de los hechos, con el propósito de favorecer o perjudicar indebidamente a cualquiera de las personas intervinientes en el procedimiento penal, o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia;** **XXXIII al XXXVII.-...** ... ...

Artículo 247.- Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa: I.- Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad. II al V.-...	**Artículo 247.-** Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa: I.- Al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, **falte dolosamente a la verdad, proporcionando información falsa u ocultando hechos relevantes con la finalidad de inducir a error a la autoridad en la investigación o en el ejercicio de sus atribuciones.** **II al V.-...**
Artículo 248 Bis.- Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa.	**Artículo 248 Bis.-** Al que, **dolosamente y con el propósito de provocar, mantener o favorecer una investigación o procedimiento penal**, simule en contra de una persona la existencia de pruebas materiales o proporcione información, documentos, datos o cualquier otro elemento falso, **sabiendo que los hechos atribuidos no ocurrieron o son falsos**, con la finalidad de hacer presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de **tres a ocho años** y de **doscientos a quinientos días multa**, sin perjuicio de la reparación integral del daño cuando proceda conforme a la ley.**La pena prevista en este artículo se incrementará hasta en una mitad cuando la conducta se cometa invocando dolosamente circunstancias que, conforme a la ley, otorguen medidas o mecanismos de protección especial, con el propósito de inducir a error a la autoridad y obtener medidas, resoluciones o actuaciones que ocasionen una afectación indebida a los derechos de otra persona.**

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 2.- La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a través de acciones reforzadas de protección de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.	**Artículo 2.-** La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, mediante acciones reforzadas de protección, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres ratificados por el Estado mexicano. **La implementación de dichas acciones deberá realizarse con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, debida diligencia, buena fe e imparcialidad, asegurando la protección**

...	**efectiva de las víctimas mediante actuaciones objetivas, imparciales y debidamente fundadas y motivadas, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.** ... ...
Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: **I al X.-...** **Sin correlación**	**Artículo 4.-** Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: I al X.-... **XI. La objetividad institucional**
Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: I a XXI. ... XXII.- sin correlación	**Artículo 5.-** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: I. a XXI. ... **XXII. Objetividad institucional: Principio conforme al cual las autoridades competentes deberán actuar con legalidad, imparcialidad, buena fe, debida fundamentación y motivación, sustentando sus determinaciones en una valoración objetiva e integral de los hechos, con la finalidad de garantizar la protección efectiva de las víctimas y el respeto a los derechos humanos, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.**
Artículo 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.	**Artículo 18.- Violencia Institucional:** Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. **Asimismo, constituye violencia institucional la actuación de las personas servidoras públicas que, apartándose de los principios de legalidad, objetividad, debida diligencia, imparcialidad y buena fe, emitan determinaciones o realicen actuaciones sin la debida fundamentación, motivación o valoración objetiva de los hechos, cuando ello comprometa la protección efectiva de los derechos reconocidos en esta Ley.**
Artículo 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, los tres órdenes de gobierno deben reforzar las acciones de prevención, atención,	**Artículo 20.-** Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, los tres órdenes de gobierno deberán reforzar las acciones de prevención, atención,

investigación, sanción y reparación del daño respecto a mujeres, adolescentes, niñas y niños.	investigación, sanción y reparación integral del daño respecto de mujeres, adolescentes, niñas y niños. **En el ejercicio de dichas atribuciones, las autoridades deberán actuar con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, debida diligencia, imparcialidad y buena fe, garantizando que sus determinaciones y actuaciones sean oportunas, debidamente fundadas y motivadas, y sustentadas en una valoración objetiva de los hechos, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones aplicables.**

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OBJETIVIDAD Y LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL, LA INTEGRIDAD DE LA ACTUACIÓN INSTITUCIONAL Y LA PREVENCIÓN DEL USO FRAUDULENTO DE LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA JUSTICIA.

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman el artículo 2; el artículo 127; las fracciones II, V y VII del artículo 131; se reforma el párrafo primero y las fracciones VII, VIII y X, del artículo 132; se reforma el artículo 229, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

> ***Artículo 2. Objeto del Código.*** *Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos,* ***garantizando que la investigación se desarrolle con objetividad, imparcialidad y respeto al debido proceso****, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.*
>
> ***Artículo 127.*** *Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación con* ***objetividad, imparcialidad, legalidad y debida diligencia,*** *coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes, útiles y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión,* ***debiendo considerar***

de manera objetiva los datos de prueba obtenidos durante la investigación, tanto los que sustenten la imputación como los que resulten relevantes para el esclarecimiento de los hechos, conforme a este Código.

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público:

I al II.-...

III. *Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos* ***con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y debida diligencia****, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma;*

IV.-...

V. *Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios* ***y datos de prueba pertinentes, útiles y necesarios para el esclarecimiento de los hechos, que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y su cuantificación para efectos de la reparación correspondiente. Cuando se trate del delito de feminicidio deberán aplicarse los protocolos previstos para tales efectos;***

VI.-...

VII. *Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de los actos de investigación pertinentes,* ***útiles y necesarios para el esclarecimiento de los hechos,*** *así como analizar de manera integral las actuaciones realizadas por dichas autoridades;*

VIII al XXIV.- ...

Artículo 132*. El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género, respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución* ***y debida diligencia, orientando su actuación al esclarecimiento de los hechos.***

I al VI.-...

VII. *Practicar las inspecciones y* ***demás actos de investigación pertinentes, útiles y necesarios para el esclarecimiento de los hechos,*** *así como reportar oportunamente sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que requieran autorización judicial, ésta deberá solicitarse a través del Ministerio Público;*

VIII. *Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y, en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad,* ***conservación y adecuada preservación de los indicios.*** *En su caso, deberá dar aviso a la Policía con*

capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable;

IX.-...

X.** Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento **relevante para el esclarecimiento de los hechos, registrando la información obtenida de manera objetiva y conforme a las disposiciones aplicables;

XI al XV.-...

Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito.** Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan, desaparezcan **o se modifiquen sus condiciones originales**. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación, **debiendo documentarse las actuaciones realizadas sobre dichos bienes durante su aseguramiento y resguardo, conforme a las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman las fracciones XXXI y XXXII del artículo 225; se reforma la fracción I del artículo 247; se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 248 Bis, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

***Artículo 225.-** Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:*

I al XXX.-...

XXXI.** Alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar, **dolosamente**, el lugar de los hechos o del hallazgo, los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo, o el procedimiento de cadena de custodia, **comprometiendo su integridad, autenticidad, conservación o disponibilidad para el procedimiento penal;

XXXII. Desviar, obstaculizar o retardar indebidamente la investigación del hecho delictuoso, u omitir dolosamente la práctica de diligencias indispensables, la incorporación, preservación o documentación de datos de prueba relevantes para el esclarecimiento de los hechos, con el propósito de favorecer o perjudicar indebidamente a cualquiera de las personas intervinientes en el procedimiento penal, o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia;

XXXIII al XXXVII.-...

...

...

...

Artículo 247.- *Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:*

I.- *Al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas,* ***falte dolosamente a la verdad, proporcionando información falsa u ocultando hechos relevantes con la finalidad de inducir a error a la autoridad en la investigación o en el ejercicio de sus atribuciones.***

II al V.-...

Artículo 248 Bis.- *Al que,* ***dolosamente y con el propósito de provocar, mantener o favorecer una investigación o procedimiento penal****, simule en contra de una persona la existencia de pruebas materiales o proporcione información, documentos, datos o cualquier otro elemento falso,* ***sabiendo que los hechos atribuidos no ocurrieron o son falsos****, con la finalidad de hacer presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de* ***tres a ocho años*** *y de* ***doscientos a quinientos días multa****, sin perjuicio de la reparación integral del daño cuando proceda conforme a la ley.*

La pena prevista en este artículo se incrementará hasta en una mitad cuando la conducta se cometa invocando dolosamente circunstancias que, conforme a la ley, otorguen medidas o mecanismos de protección especial, con el propósito de inducir a error a la autoridad y obtener medidas, resoluciones o actuaciones que ocasionen una afectación indebida a los derechos de otra persona.

ARTÍCULO TERCERO: Se reforman el artículo 2; el artículo 4, adicionando una fracción XI; el artículo 5, adicionando una fracción XXII; el artículo 18; y el artículo 20, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para quedar como sigue:

Artículo 2.- *La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, mediante acciones reforzadas de protección, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres ratificados por el Estado mexicano.* ***La implementación de dichas acciones deberá realizarse con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, debida diligencia, buena fe e imparcialidad, asegurando la protección efectiva de las víctimas mediante actuaciones objetivas, imparciales y debidamente fundadas***

y motivadas, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

...

...

...

Artículo 4.- *Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:*

I al X.-...

XI. ***La objetividad institucional***

Artículo 5.- *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

I. a XXI. ...

XXII. Objetividad institucional: Principio conforme al cual las autoridades competentes deberán actuar con legalidad, imparcialidad, buena fe, debida fundamentación y motivación, sustentando sus determinaciones en una valoración objetiva e integral de los hechos, con la finalidad de garantizar la protección efectiva de las víctimas y el respeto a los derechos humanos, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18.- Violencia Institucional: *Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.* ***Asimismo, constituye violencia institucional la actuación de las personas servidoras públicas que, apartándose de los principios de legalidad, objetividad, debida diligencia, imparcialidad y buena fe, emitan determinaciones o realicen actuaciones sin la debida fundamentación, motivación o valoración objetiva de los hechos, cuando ello comprometa la protección efectiva de los derechos reconocidos en esta Ley.***

Artículo 20.- *Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, los tres órdenes de gobierno deberán reforzar las acciones de prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño respecto de mujeres, adolescentes, niñas y niños.* ***En el ejercicio de dichas atribuciones, las autoridades deberán actuar con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, debida diligencia, imparcialidad y buena fe, garantizando que sus determinaciones y actuaciones sean oportunas, debidamente fundadas y motivadas, y sustentadas en una valoración objetiva***

de los hechos, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones aplicables

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Segundo. La Fiscalía General de la República, las fiscalías o procuradurías de las entidades federativas, las instituciones de seguridad pública y las demás autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán adecuar sus reglamentos, protocolos, lineamientos, manuales y demás disposiciones administrativas para dar cumplimiento al presente Decreto, dentro de los **ciento ochenta días naturales** siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. Las autoridades competentes deberán fortalecer los programas de capacitación y profesionalización dirigidos al personal ministerial, policial, pericial y demás personas servidoras públicas que intervengan en la investigación y persecución de los delitos, con el objeto de garantizar la correcta aplicación de los principios de legalidad, objetividad, debida diligencia, imparcialidad, perspectiva de género, respeto a los derechos humanos, preservación de indicios y cadena de custodia, conforme a las disposiciones previstas en el presente Decreto.

Cuarto. La Fiscalía General de la República, en coordinación con las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas y las demás autoridades competentes, promoverá la actualización de los protocolos de investigación, preservación y procesamiento de indicios y evidencias, cadena de custodia, actuación ministerial y policial, así como de los mecanismos de recepción y atención de denuncias, con el fin de armonizarlos con las disposiciones previstas en el presente Decreto.

Quinto. Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo a los recursos humanos, materiales y financieros aprobados a las dependencias y entidades competentes para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que no se autorizarán recursos presupuestarios adicionales para su implementación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al decimocuarto día del mes de septiembre del año dos mil veintiséis.

ATENTAMENTE

Diputado Luis Enrique Martínez Ventura

P.O. 7499/CC/2C

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.
Septiembre 14 de 2026.

BancadaNaranja

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89, ASÍ COMO LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO FEMINICIDA EN LA BÚSQUEDA DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Quien suscribe, **Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura**, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto **POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89, ASÍ COMO LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO FEMINICIDA EN LA BÚSQUEDA DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desaparición de una persona representa una de las situaciones más graves de vulneración de derechos humanos. Cuando una persona no es localizada, el Estado tiene la obligación de actuar de manera inmediata, coordinada y diligente para

encontrarla, proteger su vida e integridad y esclarecer las circunstancias que dieron lugar a su desaparición

En estos casos, el tiempo no es un elemento secundario. Cada hora puede representar una diferencia entre localizar a una persona con vida o encontrarla después de haber sido víctima de nuevas formas de violencia. Por ello, la respuesta de las autoridades no puede depender del transcurso de un plazo, de la presentación de determinadas pruebas o de la certeza sobre lo ocurrido. La búsqueda debe comenzar desde el primer momento en que se tiene conocimiento de la desaparición o no localización de una persona.

Este principio se encuentra reconocido en la legislación mexicana. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas[1] establece que todas las búsquedas deben realizarse de manera inmediata, oportuna y exhaustiva, partiendo de la presunción de que la persona se encuentra con vida y considerando todas las posibles líneas de búsqueda.

El Estado mexicano ha fortalecido recientemente este sistema. La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 incorporó nuevas herramientas para fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas, entre ellas la Alerta Nacional de Búsqueda,

---

[1] LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf

Localización e Identificación[2]. Posteriormente, en febrero de 2026, se publicó el Protocolo Nacional para la Activación de dicha Alerta, con el propósito de establecer mecanismos para su activación y fortalecer la actuación inmediata y coordinada de las autoridades.

Estos avances responden a una necesidad fundamental: que la desaparición de una persona no sea tratada como un hecho que puede esperar. La búsqueda debe iniciar de inmediato y desarrollarse con toda la información disponible, sin prejuicios y sin suposiciones que puedan retrasar la actuación institucional.

Sin embargo, la inmediatez de la búsqueda no es suficiente por sí misma. También importa la manera en que las autoridades interpretan la información que reciben y las circunstancias que rodean cada caso.

En México, la desaparición de personas es una problemática que ha alcanzado dimensiones que exigen fortalecer permanentemente las capacidades de búsqueda, localización e investigación[3]. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra desde hace décadas los

---

[2] DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General **en** Materia de. Desaparición Forzada de **Personas**, Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_pdf.php?fecha=16/07/2025&edicion=VES

[3] CIDH publica informe sobre desaparición de personas en México, Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2026/082.asp&utm_content=country-mex&utm_term=class-mon

registros relacionados con este fenómeno y permite observar su evolución, así como sus características por sexo, edad y territorio[4].

La magnitud del problema obliga a reconocer que no todas las desapariciones tienen las mismas causas ni implican los mismos riesgos. Una persona puede desaparecer como consecuencia de un delito, por una situación accidental, por condiciones de vulnerabilidad, por violencia familiar o de pareja, por trata de personas, por privación de la libertad o por diversas circunstancias que deben ser identificadas durante la búsqueda.

Por ello, la legislación reconoce la necesidad de aplicar un enfoque diferencial y especializado. Las autoridades deben considerar las características particulares de cada persona, así como su contexto y las circunstancias en las que ocurrió la desaparición. Esta obligación adquiere una relevancia especial cuando se trata de mujeres, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la información disponible en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las mujeres representan una proporción relevante de las personas desaparecidas y no localizadas en México[5]. Esta realidad obliga a observar el fenómeno desde una perspectiva que permita identificar las circunstancias particulares que pueden estar presentes en sus casos y evitar que las

---

[4] El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas **(RNPDNO),** Gobierno de México. https://consultapublicarnpdno.segob.gob.mx/

[5] **Un informe sobre desapariciones y municipios,** Disponible ne: https://www.zonadocs.mx/2026/09/06/un-informe-sobre-desapariciones-y-municipios/

búsquedas se desarrollen bajo una visión uniforme que desconozca las diferencias existentes entre las personas desaparecidas.

Hablar de una búsqueda diferenciada no significa asumir que todas las mujeres desaparecidas enfrentan las mismas circunstancias. Tampoco significa afirmar que toda desaparición de una mujer está relacionada con un delito de género. Significa reconocer que existen formas de violencia que afectan de manera diferenciada a las mujeres y que, en determinados casos, pueden estar relacionadas con su desaparición.

La violencia contra las mujeres puede presentarse en distintos ámbitos y bajo diferentes manifestaciones. Puede existir violencia familiar, violencia de pareja, amenazas, acoso, violencia sexual, trata de personas, explotación, privación de la libertad u otras conductas que, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden incrementar el riesgo para su vida e integridad[6].

En consecuencia, cuando una mujer desaparece, la búsqueda debe considerar también la información que permita conocer su contexto. Los antecedentes de violencia, las amenazas recibidas, las relaciones personales, las circunstancias de la última vez que fue vista, posibles conflictos, patrones de control o cualquier otro elemento relevante pueden aportar información indispensable para determinar las líneas de búsqueda que deben seguirse.

---

[6] INEGI, Violencia contra las mujeres en México, Disponible en: https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

Esta valoración no debe entenderse como una forma de prejuzgar sobre la víctima ni sobre las personas de su entorno. Por el contrario, se trata de evitar que la falta de información o los prejuicios impidan considerar líneas de búsqueda que pueden resultar determinantes para localizarla con vida.

La perspectiva de género tiene precisamente esa función. Permite reconocer que determinadas circunstancias pueden adquirir un significado distinto cuando se analizan desde el contexto de violencia y desigualdad que enfrentan las mujeres[7] y, por ello, debe incorporarse desde el inicio de las acciones de búsqueda.

La Ley General ya reconoce la perspectiva de género como uno de los principios que deben observarse en las acciones de búsqueda e investigación[8]. Asimismo, establece el enfoque diferencial y especializado y obliga a las autoridades a considerar las características, contexto y circunstancias particulares de cada caso.

El reconocimiento de estos principios representa un avance indispensable. Sin embargo, para que la perspectiva de género tenga efectos reales en la búsqueda de una mujer desaparecida, debe traducirse en acciones concretas. No basta con señalar que una búsqueda debe realizarse con perspectiva de género; es necesario que las autoridades cuenten con herramientas que les permitan identificar qué

---

[7] ¿Qué es la perspectiva de género y por qué es necesario implementarla? https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-genero-y-por-que-es-necesario-implementarla

[8] LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf

información deben considerar y qué circunstancias pueden requerir una actuación reforzada.

Esto es particularmente relevante cuando existen elementos que permiten advertir que la desaparición puede encontrarse relacionada con violencia contra las mujeres.

Una desaparición puede constituir un momento crítico dentro de una posible cadena de violencia. En determinados casos, la desaparición no representa un hecho aislado, sino una etapa que puede estar relacionada con agresiones previas o con otras conductas que ponen en peligro la vida e integridad de la víctima.

Por ello, la búsqueda no debe limitarse a determinar dónde se encuentra una persona. También debe permitir identificar, a partir de la información disponible, las circunstancias que pueden ponerla en una situación de mayor riesgo.

Esta obligación adquiere una importancia particular frente al feminicidio.

El feminicidio constituye una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres. Su gravedad no deriva únicamente del resultado final, sino también del contexto de violencia de género en el que puede producirse. En determinados casos, antes de la privación de la vida pueden existir antecedentes, amenazas, agresiones, actos de control, violencia sexual u otras circunstancias que,

analizadas oportunamente, pueden aportar información relevante sobre el riesgo que enfrenta una mujer[9].

Por ello, la protección de la vida de las mujeres no puede concentrarse únicamente en la investigación posterior a la comisión de un feminicidio. También debe considerar aquellos momentos previos en los que todavía existe la posibilidad de localizar a la víctima y evitar que la violencia llegue a su expresión más grave.

La desaparición puede encontrarse precisamente dentro de ese periodo crítico.

Esto no significa que toda mujer desaparecida deba ser considerada víctima de feminicidio ni que toda desaparición deba conducir automáticamente a una investigación por ese delito. Una conclusión de esa naturaleza sólo puede derivarse de los elementos que correspondan y de la investigación realizada por las autoridades competentes.

Lo que sí resulta necesario es que, desde el inicio de la búsqueda, las autoridades puedan reconocer aquellas circunstancias que permitan advertir que una mujer, niña o adolescente podría encontrarse ante un riesgo grave para su vida o integridad.

La diferencia es fundamental. Identificar un posible riesgo no equivale a determinar la existencia de un delito. Significa reconocer que existen elementos que requieren

---

[9] SCJN, Protocolo para juzgar casos de feminicidio, Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2025-12/protocolo-para-juzgar-casos-de-feminicidio.pdf

atención inmediata y que pueden modificar la manera en que debe desarrollarse la búsqueda.

Esta lógica es congruente con el principio de presunción de vida que rige las acciones de búsqueda. Presumir que una persona se encuentra con vida implica que las autoridades deben actuar con urgencia para localizarla y protegerla. Pero esa presunción no debe llevar a ignorar las circunstancias que pueden indicar que su vida o integridad se encuentran particularmente amenazadas.

Por el contrario, la presunción de vida debe impulsar una actuación más rápida e informada.

La búsqueda inmediata y la perspectiva de género, por tanto, deben funcionar de manera conjunta. La primera garantiza que las autoridades actúen sin demora; la segunda permite que esa actuación considere las circunstancias particulares que pueden influir en el riesgo que enfrenta la persona buscada.

Esta necesidad ha sido reconocida también dentro de los instrumentos que integran el propio sistema nacional de búsqueda.

El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualizado en 2025[10], reconoce la necesidad de reforzar la actuación de las autoridades cuando se trata de mujeres, niñas y adolescentes y contempla la

---

[10] Comisión Nacional de Búsqueda, **El Protocolo Homologado ayuda a organizar y planear las actividades de búsqueda, Disponible en:**
https://comisionacionaldebusqueda.segob.gob.mx/protocolo-homologado-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-y-no-localizadas-phb/

posibilidad de que una desaparición esté relacionada con distintas formas de violencia de género, incluido el feminicidio. De esta manera, el propio sistema reconoce que la búsqueda de mujeres requiere considerar las circunstancias específicas de género que pueden estar presentes en cada caso.

Este reconocimiento es particularmente importante porque demuestra que la incorporación de la perspectiva de género en la búsqueda no es una cuestión ajena al sistema ni una obligación que deba construirse desde cero. Por el contrario, es un criterio que ya forma parte de los instrumentos que orientan la actuación de las autoridades y que responde a la experiencia acumulada en la búsqueda de mujeres desaparecidas.

El reto consiste en fortalecer ese criterio y asegurar que su aplicación no dependa únicamente de la interpretación o de la iniciativa de cada autoridad.

Cuando una mujer desaparece, las autoridades pueden recibir información fragmentaria: una denuncia, un reporte, testimonios de familiares, registros de comunicaciones, información sobre sus últimos movimientos, antecedentes de violencia u otros datos que, por separado, pueden parecer insuficientes. Sin embargo, analizados conjuntamente, pueden permitir advertir circunstancias que requieren una atención particular.

La búsqueda debe ser capaz de aprovechar esa información.

No se trata de crear una carga adicional que retrase las acciones de localización. Tampoco de establecer procedimientos complejos que deban cumplirse antes de

comenzar una búsqueda. La identificación de posibles factores de riesgo debe formar parte de la propia búsqueda inmediata y realizarse de manera paralela a las demás acciones necesarias para localizar a la persona.

La actuación institucional debe ser, por ello, simultáneamente rápida y sensible al contexto.

En el caso de niñas y adolescentes, esta necesidad adquiere características particulares. Su edad, grado de dependencia, entorno familiar y social y otras condiciones específicas pueden generar riesgos diferenciados. Por ello, las autoridades deben contar con herramientas que permitan analizar sus circunstancias sin perder de vista el principio del interés superior de la niñez y la obligación de brindar una protección reforzada.

La inclusión de niñas y adolescentes dentro de este enfoque no significa equiparar sus circunstancias con las de las mujeres adultas. Significa reconocer que también pueden encontrarse expuestas a formas específicas de violencia y que la búsqueda debe considerar las características particulares de cada caso.

De esta manera, la perspectiva de género debe entenderse como una herramienta para mejorar la búsqueda y no como una conclusión anticipada sobre lo ocurrido.

El objetivo es evitar dos extremos igualmente perjudiciales: asumir que toda desaparición de una mujer está necesariamente relacionada con violencia de género o, por el contrario, descartar desde el inicio esa posibilidad.

La actuación adecuada requiere identificar las circunstancias, valorarlas y, cuando existan elementos suficientes para advertir un posible riesgo, activar oportunamente la intervención de las autoridades competentes.

En este sentido, el sistema de búsqueda debe ser capaz de responder no sólo a la pregunta de dónde puede encontrarse una persona, sino también a una pregunta igual de importante, esta es si... ¿existen circunstancias que indiquen que su vida puede estar en peligro?

Cuando la respuesta sea afirmativa, aunque se trate todavía de un posible riesgo y no de una conclusión sobre la comisión de un delito, esa información debe tener consecuencias en la actuación institucional.

La protección de la vida de una mujer desaparecida exige que las autoridades puedan reconocer esas señales a tiempo.

México ha construido en los últimos años un marco cada vez más amplio para la búsqueda de personas desaparecidas. Se han fortalecido las obligaciones de búsqueda inmediata, la coordinación entre autoridades, los mecanismos de registro, los protocolos homologados y las herramientas nacionales para activar búsquedas. El siguiente paso debe ser asegurar que toda esa estructura también permita identificar oportunamente las situaciones en las que una desaparición puede estar vinculada con una violencia que pone en riesgo la vida de una mujer.

Porque la perspectiva de género no debe aparecer únicamente cuando una mujer ya fue localizada sin vida. Debe estar presente desde el primer momento en que se

reporta su desaparición, precisamente cuando todavía existe la posibilidad de encontrarla con vida y evitar un desenlace irreversible.

La desaparición de una mujer debe activar una búsqueda inmediata, pero también una lectura cuidadosa de sus circunstancias. Cuando existan elementos que permitan advertir un posible riesgo feminicida, el sistema debe estar preparado para reconocerlos y actuar sin demora.

Ese es el punto en el que la búsqueda y la prevención de la violencia feminicida se encuentran: en el momento en que todavía es posible intervenir para proteger una vida.

A partir de lo anterior es evidentemente necesario fortalecer el marco jurídico que regula la búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas. La legislación vigente reconoce la perspectiva de género, la búsqueda inmediata y el enfoque diferencial y especializado; asimismo, los instrumentos protocolarios ya contemplan la posibilidad de que una desaparición se encuentre relacionada con violencia de género. Sin embargo, existe un espacio que puede ser atendido desde la Ley General que es establecer de manera expresa que, durante la búsqueda, deben identificarse y valorarse las circunstancias que permitan advertir un posible riesgo feminicida.

Esta precisión es importante porque permite transformar un criterio que actualmente se encuentra desarrollado en los instrumentos de actuación en una

obligación expresa dentro del marco legal que rige el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La Ley General establece en su artículo 89 que, cuando la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente tenga noticia o reporte de una persona desaparecida o no localizada, deberá iniciar la búsqueda de inmediato e informar sin dilación a la fiscalía competente. Asimismo, establece la obligación de informar a la Fiscalía Especializada cuando se considere que la desaparición se debe a la comisión de un delito.

Esta disposición constituye un punto fundamental de coordinación entre las autoridades encargadas de la búsqueda y aquellas responsables de la investigación de los delitos. Sin embargo, puede fortalecerse para contemplar expresamente aquellos casos en los que, aun cuando no exista todavía certeza sobre la comisión de un delito, las circunstancias de la desaparición de una mujer, niña o adolescente permitan advertir un posible riesgo feminicida.

La diferencia no es menor. Exigir que exista certeza sobre la comisión de un delito antes de comunicar determinadas circunstancias podría limitar la oportunidad de la intervención ministerial. En cambio, permitir que la comunicación se realice cuando existan elementos que permitan advertir un posible riesgo no implica prejuzgar sobre los hechos, sino garantizar que la autoridad competente conozca oportunamente la información disponible.

Por ello, la propuesta plantea que las autoridades de búsqueda informen sin dilación a la Fiscalía Especializada competente cuando, tratándose de mujeres, niñas o adolescentes, adviertan circunstancias que permitan identificar un posible riesgo feminicida.

En este sentido, se fortalece una comunicación que ya forma parte de las obligaciones del sistema sin crear una nueva autoridad, una nueva investigación o categoría jurídica de desaparición. Se trata de aprovechar los mecanismos institucionales existentes para que la información relevante llegue oportunamente a quien tiene facultades para investigar y, en su caso, adoptar las medidas correspondientes.

De manera complementaria, es necesario fortalecer el contenido de los protocolos que orientan las acciones de búsqueda.

El artículo 99 de la Ley General establece los contenidos mínimos que deben contemplar el Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Homologado de Investigación. Entre ellos se encuentran los procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiera ocurrido la desaparición, así como el mecanismo de búsqueda inmediata desde el momento en que se recibe el Reporte, Denuncia o Noticia de hechos.

Estas disposiciones ofrecen el espacio adecuado para incorporar criterios específicos relacionados con el posible riesgo feminicida.

La propuesta busca que los procesos de búsqueda diferenciados contemplen criterios para identificar y valorar, tratándose de mujeres, niñas y adolescentes, los factores que permitan advertir un posible riesgo feminicida, así como las acciones que deberán implementarse cuando dicho riesgo sea advertido.

Esto permitirá que la perspectiva de género no dependa únicamente de una valoración general del caso, sino que se traduzca en criterios concretos que orienten la actuación de las autoridades.

De igual manera, se propone que el mecanismo de búsqueda inmediata contemple la identificación y valoración inmediata de las circunstancias que permitan advertir un posible riesgo feminicida tratándose de mujeres, niñas y adolescentes.

La incorporación de esta obligación dentro del mecanismo de búsqueda inmediata responde a una razón sencilla, la valoración del riesgo no puede realizarse cuando la búsqueda ya terminó o después de que hayan transcurrido días fundamentales para localizar a la persona. Debe realizarse de manera paralela a las primeras acciones de búsqueda, aprovechando la información disponible desde el momento en que se recibe el reporte, denuncia o noticia.

La propuesta tampoco pretende establecer una definición rígida de riesgo feminicida dentro de la Ley General. Las circunstancias que pueden advertirlo pueden variar de acuerdo con el contexto de cada caso y requieren criterios técnicos que puedan actualizarse conforme a la experiencia de las autoridades encargadas de la búsqueda y a los estándares aplicables.

Por ello, corresponde a los protocolos establecer los criterios y procedimientos necesarios para su identificación y valoración, mientras que la Ley General debe establecer de manera clara la obligación de que dichos criterios existan y sean aplicados dentro de la búsqueda inmediata.

Con esta modificación se evita también que la identificación del posible riesgo dependa exclusivamente del criterio individual de una persona servidora pública. La existencia de criterios homologados permitirá que la información sea valorada bajo parámetros comunes y que, cuando corresponda, se genere una respuesta coordinada entre las autoridades de búsqueda y las fiscalías especializadas.

La reforma propuesta mantiene en todo momento la presunción de vida de la persona desaparecida. Identificar un posible riesgo feminicida no significa asumir que la víctima ha muerto; por el contrario, significa reconocer que puede encontrarse ante una situación que pone en peligro su vida y que requiere una respuesta inmediata para localizarla con vida.

Tampoco se pretende trasladar a las autoridades de búsqueda funciones que corresponden a las fiscalías. La Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda no determinarán la existencia de un feminicidio ni realizarán una calificación jurídica anticipada de los hechos. Su función será identificar y comunicar circunstancias relevantes que puedan advertir un posible riesgo, mientras que corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones que procedan conforme a sus atribuciones.

De esta manera, esta iniciativa respeta la distribución de competencias existente y fortalece la coordinación entre las instituciones que participan en la búsqueda y la investigación.

El objetivo es que ninguna señal relevante quede aislada o pierda oportunidad por falta de comunicación. Una amenaza previa, un antecedente de violencia, una situación de control, una agresión reciente o cualquier otra circunstancia relacionada con la desaparición puede ser determinante para orientar una búsqueda y proteger a una víctima. Cuando esa información permita advertir un posible riesgo feminicida, debe ser conocida oportunamente por las autoridades que pueden intervenir.

En consecuencia, se pretende fortalecer la respuesta del Estado desde el primer momento en que se tiene conocimiento de la desaparición de una mujer, niña o adolescente.

No se propone crear nuevos procedimientos que retrasen la búsqueda ni imponer cargas adicionales que obstaculicen la actuación inmediata. Se propone incorporar dentro de las acciones que ya deben realizarse una valoración que permita reconocer oportunamente situaciones de riesgo y activar la coordinación institucional correspondiente.

El sentido de la reforma es preventivo. Si el Estado tiene la obligación de buscar de manera inmediata a una persona desaparecida, también debe contar con

herramientas que le permitan identificar si esa persona puede encontrarse en una situación particular de peligro.

En el caso de mujeres, niñas y adolescentes, esta obligación debe incorporar la posibilidad de que la desaparición se encuentre relacionada con violencia de género y, cuando las circunstancias lo permitan advertir, con un posible riesgo feminicida.

Fortalecer la Ley General en este sentido permitirá que la perspectiva de género tenga una aplicación más concreta dentro de la búsqueda; que los protocolos cuenten con criterios homologados para identificar y valorar posibles situaciones de riesgo; y que las autoridades de búsqueda tengan una ruta clara para comunicar oportunamente esa información a las fiscalías especializadas.

La propuesta parte de una premisa sencilla, ante la desaparición de una mujer, niña o adolescente, el Estado debe hacer todo lo necesario para localizarla con vida y, al mismo tiempo, ser capaz de reconocer las circunstancias que puedan poner su vida en peligro.

Por ello, esta iniciativa propone reformar el segundo párrafo del artículo 89 y las fracciones II y V del artículo 99 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el propósito de fortalecer la identificación y atención oportuna de posibles situaciones de riesgo feminicida durante la búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.

Con estas modificaciones, se busca que la perspectiva de género no sea únicamente un principio que oriente la actuación de las autoridades, sino una herramienta concreta para identificar riesgos, mejorar la coordinación institucional y aumentar las posibilidades de localizar con vida a quienes se encuentran desaparecidas.

Porque frente a la desaparición de una mujer, niña o adolescente, actuar rápido es indispensable; pero actuar rápido y reconocer oportunamente el riesgo que enfrenta puede hacer la diferencia.

Por lo antes expuesto, para mayor claridad presento en el siguiente cuadro comparativo la reforma propuesta:

LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

TEXTO ACTUAL	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 89. Cuando la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente tenga Noticia o Reporte de una Persona Desaparecida o No Localizada, iniciará	Artículo 89. Cuando la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente tenga Noticia o Reporte de una Persona Desaparecida o No Localizada, iniciará

la búsqueda de inmediato e informará sin dilación a la fiscalía competente. Asimismo, informará sin dilación a la Fiscalía Especializada competente cuando considere que la desaparición de la persona se debe a la comisión de un delito. En todos los casos, la Unidad de Gestión podrá solicitar constituirse como coadyuvante en los procesos que se sigan por los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares.	la búsqueda de inmediato e informará sin dilación a la fiscalía competente. Asimismo, informará sin dilación a la Fiscalía Especializada competente cuando considere que la desaparición de la persona se debe a la comisión de un delito **o cuando, tratándose de mujeres, niñas o adolescentes, advierta circunstancias que permitan identificar un posible riesgo feminicida.** En todos los casos, la Unidad de Gestión podrá solicitar constituirse como coadyuvante en los procesos que se sigan por los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares.

Artículo 99. La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente y las Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atribuciones que le confiere esta Ley, deberán realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme a los protocolos correspondientes.	Artículo 99. La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente y las Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atribuciones que le confiere esta Ley, deberán realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme a los protocolos correspondientes.
Corresponderá al Sistema la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la del Protocolo Homologado de Investigación. La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá opinión previa a la emisión de los protocolos.	Corresponderá al Sistema la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la del Protocolo Homologado de Investigación. La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá opinión previa a la emisión de los protocolos.

Los protocolos deberán elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos. En lo que corresponda a cada uno contendrán, al menos, lo siguiente: I. ... II. Los procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, incluidos en los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares;	Los protocolos deberán elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos. En lo que corresponda a cada uno contendrán, al menos, lo siguiente: I. ... II. Los procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, incluidos en los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, **así como los criterios para identificar y valorar, tratándose de mujeres, niñas y adolescentes, los factores que permitan advertir un posible riesgo feminicida, así como las acciones que deberán implementarse cuando se advierta dicho riesgo;**

III. ... IV. ... V. El mecanismo de búsqueda inmediata, el cual deberá considerar la intervención de las autoridades desde el momento que se recibe el Reporte, Denuncia o Noticia de hechos de la desaparición, partiendo del supuesto de que la víctima se encuentra con vida; VI. a XXV.	III. ... IV. ... V. El mecanismo de búsqueda inmediata, el cual deberá considerar la intervención de las autoridades desde el momento que se recibe el Reporte, Denuncia o Noticia de hechos de la desaparición, partiendo del supuesto de que la víctima se encuentra con vida, **así como la identificación y valoración inmediata de las circunstancias que permitan advertir un posible riesgo feminicida tratándose de mujeres, niñas y adolescentes;** VI. a XXV. ... ...

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89, ASÍ COMO LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO FEMINICIDA EN LA BÚSQUEDA DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89, ASÍ COMO LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO FEMINICIDA EN LA BÚSQUEDA DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

ÚNICO. Se reforman el segundo párrafo del artículo 89, así como las fracciones II y V del artículo 99, todos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 89. Cuando la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente tenga Noticia o Reporte de una Persona Desaparecida o No Localizada, iniciará la búsqueda de inmediato e informará sin dilación a la fiscalía competente.

Asimismo, informará sin dilación a la Fiscalía Especializada competente cuando considere que la desaparición de la persona se debe a la comisión de un delito **o cuando, tratándose de mujeres, niñas o adolescentes, advierta circunstancias que permitan identificar un posible riesgo feminicida.**

En todos los casos, la Unidad de Gestión podrá solicitar constituirse como coadyuvante en los procesos que se sigan por los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares.

Artículo 99. La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente y las Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atribuciones que le confiere esta Ley, deberán realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme a los protocolos correspondientes.

Corresponderá al Sistema la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la del Protocolo Homologado de Investigación. La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá opinión previa a la emisión de los protocolos.

Los protocolos deberán elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos.

En lo que corresponda a cada uno contendrán, al menos, lo siguiente:

I. ...

II. Los procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, incluidos en los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, **así como los criterios para identificar y valorar, tratándose de mujeres, niñas y adolescentes, los factores que permitan advertir un posible riesgo feminicida, así como las acciones que deberán implementarse cuando se advierta dicho riesgo**;

III. ...

IV. ...

V. El mecanismo de búsqueda inmediata, el cual deberá considerar la intervención de las autoridades desde el momento que se recibe el Reporte, Denuncia o Noticia de hechos de la desaparición, partiendo del supuesto de que la víctima se encuentra con vida, **así como la identificación y valoración inmediata de las circunstancias que permitan advertir un posible riesgo feminicida tratándose de mujeres, niñas y adolescentes**;

VI. a XXV. ...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. - El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas deberá realizar las adecuaciones correspondientes al Protocolo Homologado de Búsqueda para incorporar los criterios y procedimientos derivados de este Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

ATENTAMENTE

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco
Coordinadora
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano



Secretario de Servicios Parlamentarios: Hugo Christian Rosas de Léon; **Director General de Crónica y Gaceta Parlamentaria:** Gilberto Becerril Olivares; **Directora del Diario de los Debates:** Eugenia García Gómez; **Jefe del Departamento de Producción del Diario de los Debates:** Oscar Orozco López. Apoyo Documental: **Dirección General de Proceso Legislativo,** José de Jesús Vargas, director. Oficinas de la Dirección del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión 66, edificio E, cuarto nivel, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, CP 15969. Teléfonos: 5036-0000, extensiones 54039 y 54044. **Página electrónica:** http://cronica.diputados.gob.mx